

TOMO XIII

La economía agraria como sede conflictiva de los mundos colonial y nacional (Siglos XVII, XVIII y XIX)

Capítulo_1

Introducción

Lo infructuoso de los análisis y narrativas historiográficas tradicionales presentados en los tomos precedentes parece haber radicado en reducir la problemática de lo económico y lo social a la plutocracia capitular y la burguesía mercantil. Admitida la inevitable movilidad social existente en la vida urbana y mercantil,¹ ciertos autores han insistido últimamente,² refiriéndose al Chile, Alto Perú, Perú y México, pre-revolucionarios, que también en el agro latinoamericano se había dado en tiempos coloniales una considerable movilidad social. Béaur (1989), refiriéndose a la Francia revolucionaria, sostuvo que si bien la venta de los llamados bienes nacionales, equivalente a nuestras Temporalidades (bienes de los Jesuitas expulsos), le dieron un envión al mercado inmobiliario rural y tuvieron un impacto psicológico superior, el fenómeno de la redistribución de la tierra no puede ser comprensible si no se tiene en cuenta el dinamismo de los mercados inmobiliarios tradicionales.³ A diferencia de Lefebvre (1963), quien sostuvo que el despegue de la pequeña propiedad, la preservación de los bienes comunales y la defensa de los derechos de uso fueron frenos a la penetración del capitalismo en la campaña, Soboul (1977) ha sostenido la tesis de la vía campesina del desarrollo del capitalismo agrario. Ultimamente Lehmann (1985) y Clère (1988) concluyeron que el origen y desarrollo del capitalismo no está reñido con la consolidación de la pequeña propiedad y el desarrollo de grupos de pequeños productores.⁴ Por mi parte, intenté probar que en el Río de la Plata, pese a la existencia de restricciones extra-económicas --producto del derecho de abolengo, como el tanteo,⁵ y el retracto,⁶ y del régimen capellánico, propios del Antiguo Régimen colonial-- la propiedad de chacras y estancias sufrió un intenso proceso de fragmentación, y con ella las derivaciones y desarticulaciones sociales y políticas consiguientes.⁷ Los mecanismos restrictivos de circulación de la tierra también le garantizaban al estado colonial mercantilista la maximización de sus rentas y la disminución de sus costos de transacción.⁸

Con respecto a los territorios que constituyeron el antiguo Virreinato del Río de la Plata, mientras numerosos autores (Sebill, 1989; Presta, 1989; Jackson, 1988; Jackson y Gordillo,

1993; Cornejo, 1945; Mata de López, 1989,1990; Yofre, 1904; Maeder, 1981; Calvo, 1993; y Sala, Rodríguez y De la Torre, 1967, 1968), refiriéndose a La Paz, Tarija, Cochabamba, Salta, Córdoba, Corrientes, Santa Fé y la Banda Oriental respectivamente, certificaron el tipo de gran propiedad que en ellas existió; otros autores como López Godoy (1973), Marquiegui (1990), Mayo (1991), Fradkin (1993), Mayo y Latrubese (1993), Gelman (1992) y Garavaglia (1987,1993), refiriéndose a la región Bonaerense alejada de la frontera, nos informan que en ella existieron una gran cantidad de vecinos que eran terratenientes, pero pequeños propietarios. Para el caso de las estancias de vieja población y alejadas de la frontera, censadas en 1789, Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac (1989), reconocen que necesariamente deben haberse fragmentado, y para el caso de las estancias próximas a la frontera, le admiten cierta tendencia al aumento de sus dimensiones.⁹ En forma semejante, mientras García Belsunce (1988), Garavaglia (1987), Gelman (1989), y Halperín Donghi (1992) sostienen que en la campaña de Buenos Aires la agricultura fué más relevante que la ganadería, Ghío (1987), Amaral y Ghío (1990) y Gresores y Martínez Dougnac (1992) sostienen lo contrario.

En ese mismo sentido, la distribución de tierras rurales en las regiones de frontera de las pampas Argentinas había dado origen a un debate que subsiste hoy en día.¹⁰ A comienzos de siglo, Coni (1920,1927) enfatizó la influencia que la propiedad privada --y consecuentemente el mercado inmobiliario rural-- tuvo en la definición del patrón dominial de las tierras de cultivo, no así en las tierras de pastoreo.¹¹ Más luego, Oddone (1930), González (1957), y últimamente Sábato (1989), remarcaron el rol que los factores políticos e institucionales pudieron haber tenido en la inicial distribución de la tierra pública, la misma que había dado lugar a la formación de la llamada por algunos burguesía criolla y por otros oligarquía Argentina. En ese sentido, para Pastore (1991) --a la luz de las teorías de Baysinger (1981)-- los mecanismos compulsivos en el comportamiento de los mercados le garantizaban al estado colonial mercantilista, la maximización de sus rentas y la disminución de sus costos de transacción.¹² Siguiendo estos argumentos, la escasez de tierra rural habría requerido, aunque infructuosamente, de restricciones en su circulación, mediante el derecho de abolengo (tanteo y retracto),¹³ y el régimen capellánico,¹⁴ a los efectos de impedir el excesivo fraccionamiento de las unidades productivas.

Para los tiempos aristocrático-republicanos, el debate historiográfico se centró en la contradicción entre los fines agrarios rivadavianos (la agricultura yeoman) y los resultados del régimen de enfiteusis (el incremento del latifundio). En ese sentido, Bartolomé Mitre, más tarde presidente del país, adoptó las ideas fisiocráticas de Belgrano al sostener en 1857, que mientras los arrendamientos de tierras públicas, o sistema de arrendamiento, estaban en armonía con la venta gradual de tierras públicas, el sistema de enfiteusis obraba en contra de la venta de tierras públicas. Deslindando al régimen de enfiteusis, que no permitía ventas de tierras, del sistema de arrendamiento que sí las permitía, Mitre intentó diferenciarse tanto de la política de reforma rural rivadaviana como obtener el apoyo político de la embrionaria clase terrateniente Bonaerense.¹⁵ Para defender su proyecto, Mitre atribuyó los efectos monoproduktivos y de despoblamiento al sistema de enfiteusis. Sostuvo que la enfiteusis incrementaba el número de cabezas de ganado en vez del número de campesinos. Usando este argumento, Mitre asignaba implícitamente al sistema de arrendamiento los efectos de diversificación en la economía rural. Acuciado por la amplia repercusión mundial de las revoluciones francesa y alemana de 1848, Mitre se anticipó por más de un siglo a la ideología de la Alianza para el Progreso. De acuerdo a esta ideología, la distribución más equitativa de la propiedad privada era la mejor manera de obstruir al comunismo.¹⁶ Más tarde, los liberales centristas, como Andrés Lamas (1883), intentaron asignar al sistema de enfiteusis una semejanza a la propuesta de impuesto único de Henry George, resucitando en cierta forma las ideas fisiocráticas. Pensaba que Rivadavia buscaba por medio del

sistema de enfiteusis impedir que la tierra fuera sujeto de oferta y demanda, y evitar que los terratenientes se aprovecharan de alquilar la tierra. Para casi todos los economistas liberales de la época con quienes Rivadavia estaba familiarizado (Ricardo, Bentham, Destutt de Tracy, Sismonde de Sismondi, Mill, etc.), la renta obtenida del alquiler de la tierra era considerada una explotación indirecta de la clase trabajadora urbana.¹⁷ De acuerdo a estos economistas liberales, la mejor manera de que los terratenientes se apropiaran de este valor excedente era declarando a la tierra propiedad estatal y permitiendo al estado recoger el alquiler. Esa es la causa por la que, de acuerdo a Lamas, la burguesía liberal liderada por Rivadavia intentaba evitar la propiedad privada de la tierra. Argumentaba que Rivadavia deseaba convertir a la tierra pública en propiedad común de la clase burguesa en forma de propiedad estatal.

Asimismo, los liberales de izquierda, como Carlos Antola y Alfredo Palacios, en su deseo de corroer la base de sustentación de la oligarquía terrateniente, atribuyeron al sistema Rivadaviano un intencionado salto de una vía feudal a una vía socialista de desarrollo rural.¹⁸ Por otra parte, los liberales de derecha (Lamas, Lobos, Coni, Piccirilli, etc.) intentaron probar que Rivadavia nunca tuvo en mente un cambio radical en la estructura latifundista. Para probar esto, señalan que Rivadavia nunca extendió la enfiteusis a tierras ya dadas en propiedad privada ni declaró a la enfiteusis perpetua. Concluían que para Rivadavia, la enfiteusis era un sistema provisional en la transición de una vía precapitalista a una vía campesina de capitalismo agrario. En cambio, de acuerdo a una más reciente escuela revisionista de izquierda, la enfiteusis rivadaviana puede ser vista como una vía "neo-junker" hacia el capitalismo agrario. En otras palabras, un sistema de "expropiación legal de la comunidad indígena y del campesinado libre, un sistema dirigido a impedir la compra de tierra por productores directos a fin de beneficiar a los poseedores de tierra ricos que ya eran propietarios".¹⁹

Plan del Volumen

Este estudio se extiende a lo largo de siete (7) capítulos. En el capítulo 2 estudiamos la emergencia de un patriciado rural y el rol del comercio y la inmigración. Buenos Aires a comienzos del siglo XVII La crisis pecuaria y las vaquerías de la Banda Oriental en el siglo XVIII es analizada en el capítulo 3. En el capítulo 4 estudiamos la economía de trueque y la crisis agraria del litoral Rioplatense. En el capítulo 5 investigamos el mercado inmobiliario rural y su incidencia en la estructura social Rioplatense La especulación de la tierra y el latifundio en la Provincia de Buenos Aires luego de la Independencia (1820-1852), es estudiada en el capítulo 6 Y en el capítulo 7 estudiamos la base económica de la República Oligárquica, en especial la distribución de la tierra de frontera en la Provincia de Buenos Aires (1852-90)

NOTAS

¹ ver los trabajos compilados por Robinson (1990).

² para Cochabamba: Gordillo y Jackson (1987) y Larson (1988); para Chile: Borde y Góngora (1956); para el Perú: Ramírez (1991); y para México: Taylor (1972), Brading (1973) y Van Young (1983).

³ Béaur, 1993, 142.

⁴ Béaur, 1993, 143. Con respecto a los territorios que constituyeron el antiguo Virreinato del Río de la Plata, mientras diversos autores (Prestas, 1989; Cornejo, 1945; Mata de López, 1990; Yofre, 1984; Maeder, 1981; Whigham, 1988; y Sala, Rodríguez y de la Torre, 1968) refiriéndose a Tarija, Salta, Córdoba, Corrientes y la Banda Oriental respectivamente, certificaron el tipo de gran propiedad que en ellas existió; Schleh (1955) refiriéndose a Tucumán; Guzmán (1985) aludiendo a Catamarca; Castilla y Sod (1990), y Castilla y Adams (1990), haciendo referencia a La Rioja; López Godoy (1973), Marquiegui (1990), Mayo (1991), Fradkin (1992), Gelman (1992), Mayo y Latrubese (1993) y Garavaglia (1987, 1993), con relación a la región Bonaerense, nos informan que en dichas regiones existieron vecinos propietarios que eran terratenientes pero, por el contrario pequeños propietarios.

⁵ Facultad que por ley o costumbre jurídica tiene una persona para adquirir algo con preferencia a otros compradores y por el mismo precio. Se distingue del retracto por el momento de su ejercicio, que en el tanteo es previo a la enajenación de la cosa (Ossorio y Florit, 1968, XXV, 1055).

⁶ Derecho establecido en favor de los parientes colaterales para que en el caso de venderse una finca familiar o un esclavo de la familia a una persona extraña, pudiesen retraer esa finca o ese esclavo. Estas instituciones trabaron la formación de la renta y el salario, fuente material de la gestación de la burguesía (debo esta reflexión a mi amigo y colega Ezequiel Raggio).

⁷ permítaseme mencionar mi propio trabajo citado en Saguier, 1993c.

⁸ ver Pastore, 1990, y 1991, 6. Para el caso de las estancias de vieja población y alejadas de la frontera, censadas en 1789, Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac (1989) reconocen que necesariamente deben haberse fragmentado, y para el caso de las estancias próximas a la frontera, admiten cierta tendencia al aumento de sus dimensiones (Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac, 1989, 126 y 34. El déficit grave que presenta este análisis cuantitativo, que invalida sus conclusiones, consiste en la exclusión del ganado mular (Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac, 1989, Cuadro 1 de Magdalena, Cuadro 3 de Areco en pp. 35 y 73, y descripción del Rincón de Pinazo, p.128). En forma semejante, mientras García Belsunce (1988), Garavaglia (1987), Gelman (1989) y Halperin Donghi (1992) sostienen que en la campaña de Buenos Aires la agricultura fué más relevante que la ganadería; Ghío (1987), Amaral y Ghío (1990), y Gresores y Martínez Dougnac (1992) sostienen lo contrario.

⁹ Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac, 1989, 126 y 34. El déficit grave que presenta este análisis cuantitativo, que invalida sus conclusiones, consiste en la exclusión del ganado mular (ver Cuadro 1 de Magdalena, Cuadro 3 de Areco en pp. 35 y 73, y descripción del Rincón de Pinazo, p.128).

¹⁰ ver Zemborain, 1973; Saguier, 1983; Gaignard, 1989; y Basualdo y Khavisse, 1993.

¹¹ Coni, 1927, 128.

¹² ver Pastore, 1990, y 1991, 6.

¹³ el tanteo era la facultad que por ley o costumbre jurídica tiene una persona para adquirir algo con preferencia a los compradores y por el mismo precio. Se distingue del retracto por el momento de su ejercicio, que en el tanteo es previo a la enajenación de la cosa (Ossorio y Florit,

1968, XXV, 1055). El retracto era el derecho establecido en favor de los parientes colaterales para que en el caso de venderse una finca familiar o un esclavo de la familia a una persona extraña, pudiesen retraer esa finca o ese esclavo. Estas instituciones, que también existieron en el mundo anglosajón (Hoyle, 1995, 156), trabaron la formación de la renta y el salario, fuente material de la gestación de la burguesía (debo esta reflexión a mi amigo y colega Ezequiel Raggio).

¹⁴ El Derecho Canónico prohíbe la enajenación de las tierras e inmuebles afectos a capellanías colativas sin el presupuesto permiso de la competente jurisdicción eclesiástica (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.52, Exp.4, fs.189v.).

¹⁵ Mitre, 1889, 152.

¹⁶ Harris, 1969, 49-59; Huntington, 1968, 374-396; y Jaffe, 1960, 337-354.

¹⁷ Ingenieros, 1918, 376.

¹⁸ Antola, 1919, 107.

¹⁹ Frigerio, 1953, 25; y Palcos, 1960, 153-154.

TOMO XIII

Capítulo 2

La emergencia de un patriciado rural y el rol del comercio y la inmigración. Buenos Aires a comienzos del siglo XVII

(publicado en 1984 en *History of Agriculture [West Bengal, India]*, vol.2, n.3, 19-67; bajo el título: "Economic Impact of Immigration and Commercial Capital on the Emergence of a Rural Bourgeoisie: Buenos Aires in the Early Seventeenth Century", registrado en el HLAS, v.48, 1986, item 2831);

El impacto de la penetración comercial en la colonización rural de Buenos Aires colonial es analizado mostrando como los empresarios no-encomenderos, a diferencia de los vecinos encomenderos, recurrían a comienzos del siglo XVII al trabajo asalariado y al trabajo esclavo, a la tierra pública y privada, al crédito mercantil, a las inversiones intensivas en capital, al monopolio sobre la oferta de carne al mercado interno y la contratación de compañías agrícolas con el fin de expandir sus negocios. Más aún, el acceso al excedente de tierra por el cual los empresarios no-encomenderos articulaban los alrededores de Buenos Aires estaba estrechamente ligado a la división del trabajo y a la existente lucha intra-colonial. En Buenos Aires, las contradicciones existieron dentro de diferentes sectores o facciones de grupo de interés o estamentos que tuvieron una posición dominante desde las postrimerías del siglo XVI. Estas contradicciones llevaron a sucesivos cambios en el control de la mano de obra y el aparato del estado.

Sin embargo, estos cambios no generaron, como lo hicieron en Europa, trabajo asalariado real por cuanto la organización socio-económica y la super-estructura colonial, fueron concebidos solo para producir un crecimiento comercial y para evitar cualquier tipo de desarrollo capitalista real. De aquí que, la desposesión de un pequeño productor orientado hacia la auto-suficiencia chacarera (por lo general un encomendero) por el capital comercial no funcionó para el perjuicio del sistema, sino como un cambio de manos de la propiedad inmobiliaria rural, que comenzó siendo organizada y trabajada dentro de una estrategia de gran productor, como opuesta a una estrategia de pequeño productor, con el fin de cumplimentar las funciones socio-económicas asignadas por el capital comercial.

La estrecha franja de tierra poblada por los primeros residentes de Buenos Aires consistió en diferentes pagos o condados. Estos diferentes pagos estuvieron distribuidos ecológicamente. Mientras el condado de Monte Grande, al norte de la ciudad, subsecuentemente llamado la Costa de San Isidro, fue distribuido por los gobernadores con el propósito de destinarlos a la siembra de trigo y maíz, la tierra de la Magdalena al sud, y la de Luján al oeste fue distribuida por los gobernadores con el propósito de establecer la base desde la cual organizar la gran cacería (vaquerías) de ganado salvaje o cimarron.

Como resultado de la creciente demanda de provisiones por parte de las plantaciones de azúcar del Nordeste de Brasil así como de la necesidad de proveer bastimentos para las caravanas de esclavos que viajaban desde Angola en tránsito al Perú y al Alto Perú, para las tropas militares arribadas de España en tránsito a Chile,¹ y para las tropas procedentes del interior para defender Buenos Aires (1594, 1616, 1625 y 1645), la frontera rural de Buenos Aires se expandió en las décadas de 1620 y 1630.² De aquí que, la demanda de azúcar de Europa, las guerras Araucanas en Chile, las invasiones Guaycurúes en Santa Fe, y la amenaza de invasiones foráneas en Buenos Aires tuvo un impacto positivo en la economía agraria de Buenos Aires. Para garantizar la provisión de las tropas la corona estipuló, a través de los gobernadores, el otorgamiento de tierras y de encomiendas indígenas. Sucesivos gobernadores, como Rodrigo Ortiz de Zárate (1583-85), Juan de Torres de Vera y Aragón (1587-89), Hernando Arias de Saavedra, conocido como Hernandarias (1591-94, 1602-09, y 1615-18), y Diego Rodríguez de Valdés y de la Banda (1599-1602), movieron gradualmente la frontera hacia el norte de Buenos Aires distribuyendo tierra que correspondía a los pagos de Matanza, Conchas, Cañada de la Cruz, y Areco. Más luego, en las décadas de 1620 y 1630, los gobernadores Francisco de Cespedes (1625-30), Pedro Estéban Dávila (1631-37), Francisco de Avendaño y Valdivia (1640) y Mendo de la Cueva y Benavídez (1638-40), distribuyeron las tierras del pago de los Arrecifes, ubicado más al norte, y movieron la frontera del pago de la Magdalena más hacia el sur, todo debido a la necesidad de retribuir a aquellos residentes de Buenos Aires que ayudaron a montar expediciones militares contra los indios Guaycurúes y Calchaquies, del área del Río Bermejo (Chaco). El total de tierras distribuidas alcanzaron alrededor de las 800 leguas cuadradas (ver Tabla 1).

Sin embargo, debido a la creciente escasez de capital y de indios encomendados locales, la mayoría de las familias fundadoras porteñas que no recibieron mercedes de tierras en las últimas distribuciones se fundaron en una estrategia de desarrollo rural en pequeñas unidades, en economías de subsistencia, y en familias extensas. Como resultado, muchas de las viejas familias fundadoras vendieron sus propiedades. De acuerdo con Miguel Ángel Lima, de los 64 encomenderos y terratenientes de la expedición de Juan de Garay de 1580, 21 (o el 33%) dejaron la ciudad en los siguientes dos años. También, en la revista militar de 1602 Lima encontró solo siete pobladores de los 64 pobladores originarios que fundaron Buenos Aires. Y de los 84 miembros de los permisos de exportación de 1602, solo 14 pobladores originarios fueron mencionados.³ Pero nuevos residentes poblaron Buenos Aires luego de 1580. Ya en 1582 el Cap. Juan de Espinosa arribó a Buenos Aires con numerosos nuevos pobladores desde Santa Fe. Un año más tarde, en 1583, el navío de Alonso de Vera y Aragón y la flota del General Sotomayor arribaron a Buenos Aires desde España. Muchos de los soldados que lo acompañaron desertaron y permanecieron en Buenos Aires. Los Gobernadores clasificaron estos pobladores y sus familias en una escala de cinco grados de antigüedad, con el objetivo de asignar el derecho a la cuota para exportar harina y tasajo al Brasil. A los más antiguos les era asignado el título de Primeros Pobladores y los más nuevos la dignidad de Quintos Pobladores.⁴ No obstante, los descendientes de estos pobladores permanecieron en la ciudad. De acuerdo con la información por mí relevada, 31 pobladores (o el 48%) estuvieron presentes en el permiso de exportación de 1602.⁵ Otros 23 descendientes de los primeros pobladores encomenderos estaban aún presentes como terratenientes en 1602. Pero de los 54 primeras familias pobladoras sobrevivientes que poseían inmuebles rurales en la primera mitad del siglo XVII, 30 residentes, o el 56%, vendieron 57 chacras, o el 35% de todas las chacras vendidas en este período, y 24 residentes, o el 44% vendieron 32 estancias, o el 29% de todas las estancias vendidas en la primera mitad del siglo (ver Tablas 2 y 3). De igual manera, de las 60 familias sobrevivientes de los primeros pobladores que poseían inmuebles urbanos en 1602, 37 residentes o el 62%, vendieron 62 casas y lotes urbanos en la primera mitad del siglo (ver Tabla 4). De acuerdo con mi información, seis (6) primeros pobladores vendieron 20 inmuebles; dos (2) terceros pobladores vendieron cinco inmuebles; y tres (3) cuartos pobladores

vendieron ocho (8) inmuebles; y siete (7) quintos pobladores vendieron 17 inmuebles. De aquí que, estas cifras corroboraron aun mas la existencia de un desplazamiento social y economico.

Las viejas familias fundadoras que no se vieron desalentadas por el impetu económico de los tratantes de esclavos constituyeron el nucleo central de la facción política Benemerita. Ellos eran muy pocos y debieron su éxito económico esencialmente al hecho de haberse embarcado en un comercio orientado hacia el mercado interno y haber adquirido esclavos negros sin endeudarse con los comerciantes de esclavos Portugueses, que constituían el núcleo central de la facción Confederada. Estos individuos incluían a Pedro Gutierrez, un terrateniente que adquirio cinco esclavos y que habia sido el abogado de los herederos del Adelantado Juan de Torres de Vera y Aragón en 1611 y el Alcalde de Primer Voto elegido por el Gobernador Céspedes en 1629; Cristóbal Naharro, un dueño de atahonas o molinos harineros que adquirio diez esclavos; Francisco Pérez de Burgos, un encomendero que poseía cinco esclavos; Miguel del Corro, y Andres Ximénez de Fuentes. El caso de Hernandarias, aunque un residente de la ciudad de Santa Fé, era quien mas sobresalía, por cuanto su viuda declaro mas de 64 esclavos, la mayoría de los cuales fueron obtenidos mediante secuestros aduaneros cuando fue juez en procedimientos relacionados con confiscaciones de mercancías prohibidas.⁶ En otras palabras, el núcleo central de la facción Benemerita debió su fuerza económica a instrumentos extra-económicos para la obtención de fuerza de trabajo. Mas luego, en la década de 1630, este patrón de comportamiento económico continuó. El General Gonzalo de Carvajal y el General Amador Váez de Alpoin, ambos productores orientados hacia el mercado interno, y el primero un conocido lider de la facción Benemerita, fueron capaces de adquirir libremente fuerza de trabajo indígena en sus expediciones fracasadas para la recuperación de Concepción del Bermejo.⁷

La emergencia de una producción agraria de gran escala y orientada al mercado y de un comercio orientado a la trata de esclavos removió gradualmente de la elite dominante porteña aquellos terratenientes cuya base social consistió de indios encomendados locales. Los empresarios urbanos no-encomenderos emergieron como los principales agentes responsables en presionar los salarios de la mano de obra en competencia directa con los encomenderos. La baja rentabilidad del sistema encomendil convenció a muchos encomenderos de migrar. Algunos de estos prefirieron vender su derecho a las encomiendas de indios antes que retornar a sus localidades de origen. Esto ocurrió con el Cap. Victor Casco de Mendoza, quien en 1609 renunció la encomienda de la nación Guatoma asi como la nación Guatabu en la provincia del Paraguay.⁸ En forma similar, el Cap. Juan de Vallejo, el Tesorero Real de Buenos Aires, renunció en 1633 los indios del repartimiento de Guana en Chile en la persona del General Diego Xaraquemada.⁹ Pero los empresarios no-encomendros no fueron los únicos en poseer esclavos africanos en Buenos Aires. Desde comienzos del siglo, los encomenderos de Buenos Aires también invertían en esclavos. En 1613, cuando el encomendero-comerciante Sebastián de Horduña alquiló ocho indios Chana de su propia encomienda de Baradero, sirvió de fiador conjuntamente con Miguel Rivadeneyra, Cristóbal Naharro y Juan Nieto de Humanes, en beneficio del traficante de esclavos Hernan Gómez y con el objetivo de introducir 129 esclavos de Angola. Más luego, en la década de 1620, esta tendencia se incrementó.¹⁰ La Tabla 5 nos muestra como Sebastián de Horduña fue socio en ocho transacciones introduciendo 70 esclavos, y Lorenzo de Lara, un encomendero del pago de la Magdalena, era socio en tres transacciones que introducían 48 esclavos, y Alonso Guerrero de Ayala, otro encomendero, introducía 198 esclavos.

Las viejas familias chacareras porteñas o los clanes familiares ligados a la encomienda adquirieron la primer suerte de tierra a través de transacciones no monetarias (herencias, legados, dotes, o donaciones). Este modo de adquisición inmobiliaria representó la transferencia de riqueza por antonomasia dentro de la existente elite terrateniente. El nuevo sector rural de terratenientes no-

encomenderos, mostrados en las Tablas 6 y 7, entró en el rango de los propietarios adquiriendo venalmente propiedad real o de la corona, o a través de donaciones y adquisiciones a no parientes. Existía una bastante extensa creencia entre los terratenientes no-encomenderos que la tierra adquirida podría ser más fácil de enajenar que la tierra heredada. Estos recién llegados representaban a los nuevos ricos ligados con la emergencia de una producción a gran escala orientada al mercado que exportaba trigo y harina al nordeste del Brasil. Acumularon suficiente riqueza a través de la trata de esclavos y el contrabando que cómodamente pudieron adquirir su ingreso a la clase terrateniente.

Conocer si los viejos o los nuevos estamentos estaban invirtiendo sus intereses en chacras o estancias clarificará el problema. Mientras las chacras fueron usualmente poseídas por intereses orientados hacia el mercado externo exportador de trigo (un estamento nuevo), las estancias fueron poseídas por productores orientados hacia el mercado interno producto de mulas (un estamento viejo). Un modo fácil de determinar esto es analizando la manera en que cada una de estas dos clases de propiedades fue adquirida. La compraventa era la única vía en que la clase contrabandista penetró en el estamento terrateniente. Las herencias, en su lugar, fue el modo más común para el viejo estamento de los vecinos fundadores de atar su nombre a la tierra. De lo que puede ser deducido de la Tabla 8, la historia de la tenencia rural de Buenos Aires confirma que para la transferencia de las chacras la venta era un medio más común de traspaso que la herencia (donaciones más dotes). Entre 1602 y 1642 las chacras cambiaron de manos un total de 226 veces. Solo 89 de las 226 transferencias fueron a través de legados y dotes; las transferencias remanentes (61%) fueron por compra-venta (Tabla 8).

En su lugar, entre las estancias, la compra-venta era mucho menos común como medio de transferencia que la herencia. Las estancias cambiaron de manos un total de 245 veces. Solo un centenar de las 245 transferencias fueron a través de legados y dotes; las 111 remanentes (53%) fueron por venta. La carencia de registros notariales antes de 1602 hace difícil de evaluar la frecuencia de las ventas de chacras y estancias en el siglo XVI. De aquí que, estas cifras corroboran aún más el hecho que la producción orientada hacia el mercado que exportaba harina al Brasil estimuló una alta movilidad dentro del mercado de tierras de chacra, dejando en su lugar al mercado de tierras de estancia casi estancado.

En el pago de Monte Grande, un pago de chacras, de un total de 46 propiedades distribuidas en 1582, una suerte cambió de propietarios a través de compraventas cuatro veces, otra en tres oportunidades, siete propiedades dos veces, y 28 propiedades al menos una vez en el periodo entre 1602 y 1640. De las 64 mercedes de chacras otorgadas en 1582, una cambio de propietarios solo a través de legados y dotes durante 60 años. En los pagos de Matanza y Las Conchas, debido a que estaban ubicadas en tierras de menos valor, la propiedad circuló menos y pareciera haberse extendido pretensiones más fuertes de "mantener el nombre en la tierra". Del total de casi 50 propiedades en Matanza en 1610, solo tres estuvieron mediante legados y dotes en la misma familia durante 60 años. Dos de estas propiedades fueron las otorgadas en merced por el Gobernador Hernandarias a Simón de Valdéz en 1609 y donadas a la Orden Dominica por sus herederos en 1709,¹¹ y la merced de tierra otorgada por Hernandarias a Mateo Leal de Ayala en 1609 y vendida por su nieta Petrona Cabral de Ayala, a Andrés de Avila en 1728.¹² En forma semejante, la merced de tierra otorgada por el Gobernador Juan de Torres de Vera y Aragón a Cristóbal Naharro en junio de 1588 fue vendida por su bisnieto Diego de Giles a Francisco Rodríguez de Estela en abril de 1682.¹³ De las casi medio centenar de propiedades en el pago de Las Conchas en 1610, solo siete se perpetuaron en la misma familia durante 60 años. Mucha persistencia en "preservar el nombre en la tierra" era inusual debido al crecientemente expansivo mercado inmobiliario. De un total de siete casos, el más prolongado comprendió la chacra de Domingo Griveo. Dos siglos más tarde, en 1823, sus tataranietos, la familia

Ibarrola, vendió la propiedad a Jose Las.¹⁴ Sin embargo, la existencia de "tierra libre" en la frontera rural conspiraba contra una prolongada persistencia en "mantener el nombre en la tierra".

En contraste con el absoluto mono-cultivo de las plantaciones de azúcar brasileras, las chacras de la provincia de Buenos Aires eran diversificadas, muchas de ellas sembraban trigo para alimentar su propia población así como para la venta al mercado porteño y para la exportación al Nordeste Brasileño. Más aún, la labranza de trigo y maíz en Buenos Aires fue mucho menos intensiva en mano de obra que el azúcar en Brasil. En otras palabras, el trabajo de preparar la tierra, sembrar, cosechar, y procesar la cosecha estuvo mucho mas imparcialmente distribuido a través del año. Aparte de esto, el trigo y el maíz no se pudrían inmediatamente después de la cosecha como el azúcar, de manera que los esclavos Africanos y los indios asalariados podían ser empleados en ensacar, moler y fabricar harina y pan.

La producción agraria en gran escala en la provincia de Buenos Aires durante la primer mitad del siglo XVII fue intentada solo por aquellos productores que estaban preparados para competir en una estrategia de gran productor con el propósito de generar una ganancia. Por una estrategia de gran productor entiendo la combinación del alquiler de una fuerza de trabajo asalariada, emplear una clase administradora de capataces y mayordomos, subordinar al capital comercial a través de créditos de largo plazo, e invertir en bienes intensivos en capital. Los principales exponentes de esta clase de producción durante la primer parte del siglo XVII fueron un total de 20 pobladores (ver Tablas 6 y 7). Por ejemplo, Amador Vázquez de Alpoin, originalmente un traficante de esclavos, devino un dueño de chacras y estancias en 1605 cuando le compró a Pedro Alvarez Gaitan el derecho a sus tierras, lotes urbanos, estancias, etc., por \$130.¹⁵ Tres años más tarde, Vázquez de Alpoin compró mil varas de frente en el pago de Monte Grande (tierras de chacra) y media legua de frente en el pago de Parana (tierras de estancia). En 1622, Vázquez de Alpoin compró una chacra en el pago de las Conchas por \$80.¹⁶ Un año más tarde, en 1623 Vázquez de Alpoin se la alquiló a Juan de la Torre a \$100 anuales y por la mitad de la cosecha de su chacra en el pago de Las Conchas. Además, Vázquez se comprometía a darle a Torres diez indios¹⁷ Unos cuantos meses más tarde, empleó al capataz Francisco López en \$60 anuales para manejar su estancia del pago de Parana¹⁸ Finalmente, otro año más tarde, en 1624, decidió compartir con Juan Bernal "la chacra que posee en el pago de Las Conchas para sembrar trigo y maíz por la tercera parte de su cosecha".¹⁹ Mas aun, Vázquez de Alpoin se endeudó cuatro veces entre 1626 y 1643 por un monto total de \$2.979.

Otros ejemplos menos complejos fueron los de Juan Barragan, que empleo quince indios entre 1622 y 1652 y poseyo una chacra en el pago de Las Conchas y estancias en los pagos de Luján y Magdalena; Gaspar de Gaete, quien empleo cinco indios entre 1634 y 1639 y poseyó 29 esclavos que trabajaron en su estancia del pago de Magdalena; Marcos de Sequera, quien en 1632 compró dos chacras de 700 varas de frente en el pago de Las Conchas valuadas en \$240 y tres estancias en el pago de Luján de una legua y media (9.000 varas) de frente, en 1637 y 1638, por un total de \$3.290.²⁰ Sequera alquiló 11 indios y poseyó 33 esclavos, diez de los cuales trabajaron en sus establecimientos de los pagos de Luján y Conchas. También, en 1637 alquiló el capataz Juan de Silvera por el término de un año en \$120.²¹ Más aun, Sequera se endeudó cuatro veces entre 1633 y 1640 por un total de \$14.570. De igual manera, en 1633, Juan de Tapia de Vargas compró 857 varas de frente en el pago de La Matanza por un valor de \$103. En 1638, compró otras 700 varas de frente en el mismo lugar por valor de \$185.²² Tapia de Vargas alquiló ocho indios y poseyó 60 esclavos que trabajaron en sus chacras del pago de Monte Grande y Matanza, asi como en sus estancias del pago de los Arrecifes. Tambien, en 1636, Tapia contrató al capataz Sebastián Gómez por el término de un año en la suma de \$100.²³ Además, Tapia de Vargas se endeudó en cuatro diferentes oportunidades entre 1633, el año que

compró su primer chacra, y 1640, por un monto total de \$7.947. De manera similar, Bernabé González Filiano compró en 1634 una chacra en el pago de Monte Grande valuada en \$120, y en 1639 una estancia en el pago de Luján en \$280.²⁴ Más aun, González Filiano alquiló dos indios y poseyó hasta su muerte 28 esclavos que trabajaron en su chacra de Monte Grande así como en sus estancias de Luján y Cañada de la Cruz. Finalmente, González Filiano se endeudó tres veces mediante préstamos personales entre 1634 y 1640 por un monto total de \$3.657. También se endeudó en \$500 mediante un préstamo hipotecario en 1632.²⁵ De aquí que, las actividades combinadas de comprar tierra en el mercado, alquilar indios y mano de obra foránea, y comprar esclavos africanos caracterizó la embrionaria naturaleza capitalista de la producción agraria de Buenos Aires.

Había además, casos en los cuales los terratenientes, que habían heredado tierras, actuaban también de un modo que podríamos caracterizar algo extemporánea o anacrónicamente, como una vía "junker". Este fue el caso de Enrique Enríquez, anteriormente un dueño de navios, quien heredó tierras en el pago de la Magdalena de su suegro Francisco García Romero, quien en el pasado había militado con la facción Confederada. Durante su administración, contrató capataces en dos oportunidades. En 1622, contrató a Sebastián de Almirón por el término de un año en \$90. En 1632, contrató a Manuel Gómez Viera por un año en \$120.²⁶ Amén de su inmueble heredado, Enríquez adquirió en 1632 una estancia en el pago de la Matanza en \$100.²⁷ Seis años más tarde, en 1638, Enríquez tomó prestado \$2.000, ofreciendo de garantía una estancia, que canceló en 1658.²⁸ Más aun, en 1644, Enríquez tomó prestado \$1.364 para reparar sus establecimientos rurales y comprar fuerza de trabajo esclava.²⁹ La emergencia de un estrato terrateniente mercantilizado se benefició de la estabilidad monetaria bajo hipotecas de muy largo plazo mientras que los precios de la producción se elevaban.

La producción de ganado en gran escala se garantizaba mediante la contratación de un calificado supervisor. Para ser un capataz eficiente uno debía ser extraordinariamente versátil y capaz de lidiar con todo tipo de tareas, desde la construcción de carretas hasta el parto de las esclavas. La herramienta que los terratenientes ausentistas empleaban más a menudo para asegurar el servicio de los capataces era el concierto notarialmente escriturado, que especificaba los deberes y derechos del terrateniente y del capataz. Establecía el monto del salario y el término de tiempo acordado para la prestación del servicio. La Tabla 9 registra 20 contratos de este tipo que una veintena de terratenientes contrajeron entre 1622 y 1642. Los salarios fluctuaban alrededor de un promedio de \$100 anuales. Los más altos salarios no superaban los \$160 anuales. Por ejemplo, Diego López, el yerno de Sebastián Ramos, contrató a Gregorio Botello en \$160 por año. Los salarios más bajos no cayeron nunca por debajo de los \$50 anuales (ver Tabla 9).

La posición del capataz de tropa (de hacienda o ganado), o el de capataz de flota de carretas, en contraste con el de mayordomo de estancia, llevaba consigo un status social más alto. En efecto, el capataz de tropa ganaba salarios más altos que los de los mayordomos de estancia, o eran generalmente pagados con un porcentaje del ganado arreado. Los salarios de los capataces de tropa fluctuaban entre \$300 y \$500 anuales. Por ejemplo, el terrateniente Pedro Gutiérrez contrató en 1634 una pareja de capataces, Geronimo Villarroel y Marcos Morales, en \$300 y \$400 cada uno,³⁰ y Juan Crespo Flores contrató a Juan de Herrera en \$500.³¹ Estos altos salarios resultaban del hecho de que los capataces tenían con sus salarios que contratar la mano de obra indígena para realizar las tareas de arreo. Contrastando la Tabla 9 con la lista de empleadores no-encomenderos de indios que tengo en mi Banco de Datos, descubrí que los capataces Manuel Gómez, Diego Serrano y Juan Bautista Manso alquilaron numerosos indios.

El proceso de concentración de la tierra no ocurrió sólo por medio de mercedes de tierras.

También resultó del uso del matrimonio endogámico como una estrategia para reforzar la concentración de tierra. La Tabla 10 nos muestra una lista de 25 terratenientes que casaron con hijas de propietarios de inmuebles rurales. Entre estos negociadores o intermediarios clánicos, la tierra urbana era preferida a la tierra rural. Observando específicamente la propiedad rural obtenida a través del matrimonio, observé que las chacras y las estancias constituían el 14% del valor total de todas las dotes y el 24% del valor total de los esclavos (ver Tabla 11). Examinando específicamente aquellas propiedades urbanas que habían sido obtenidas a través del matrimonio, encontré en una muestra de 200 dotes procesadas en la Tabla 11, que las casas y los lotes vacantes constituían el 26% del valor total de todas las dotes.

La producción de ganado en gran escala fue también lograda por medio de inversiones capital-intensivas. Para ese propósito, los potenciales criadores de ganado en Buenos Aires compraban toros y vacas. Por ejemplo, en 1632, Bartolomé Ramírez, un anterior producto de trigo, en compañía con el Cap. Pedro Hurtado transportó desde Santa Fé 300 cabezas de ganado. En forma similar, en 1639, el Sargento Mayor Marcos de Sequera adquirió de Diego López Camelo 200 vacas y 500 toros en \$250.³²

La producción de ganado en gran escala estuvo también condicionada por la manera en que la carne era distribuida para el consumo público y privado. El derecho exclusivo a abastecer Buenos Aires con carne era contratado por el Cabildo con individuos por el término de un año y bajo subasta. Cuando no había subastador privado alguno, el Cabildo mismo asignaba el derecho exclusivo a la matanza sobre la base de una rotación semanal, una semana para cada propietario de hacienda.

Los matarifes obtuvieron un monopolio sobre su comercio a cambio de una sujeción a la supervisión Capitular y al control de precios. La razón de este monopolio era proveer la ciudad con carne al más bajo precio posible haciendo a un solo individuo responsable y de esa manera evitando las subas y bajas de un mercado libre y competitivo.³³ No obstante, las fuerzas del mercado entraron en juego, especialmente del lado de la oferta. La creciente oligarquía terrateniente criolla sacó provecho del monopolio de oferta de carne. Aunque estaba en teoría completamente abierto a la postura pública, el derecho exclusivo a abastecer Buenos Aires con carne, o contrato de abasto, estaba efectivamente restringido a aquellos grandes terratenientes como Blas de Mora en 1618, o Antón Higuera de Santana en 1620, quienes podían ellos mismos abastecer el ganado necesario, o de lo contrario a aquellos comerciantes como Martín de Avila en 1605 o Francisco Gómez Prieto en 1608, quienes tenían suficiente capital para comprar lo que necesitaban (ver Tabla 12).

Cuando era directamente administrado por el gobierno de la ciudad, el abasto continuó canalizando hacia Buenos Aires el ganado de la oligarquía terrateniente criolla. Aunque la oligarquía terrateniente criolla ejerció un control monopolístico sobre la oferta de carne a la ciudad, las estructuras políticas permitían el acceso a otros que querían vender carne. Por ejemplo, en 1616, debido a que el Gobernador de Buenos Aires había prohibido la matanza de vientres en la pampa (para prevenir su exterminio), ningún terrateniente estaba inclinado a comprometerse para abastecer la ciudad con carne. El Cabildo ordenó a los vecinos que poseían ganado la obligación de faenar solo los días sábados y entonces solo en rotación con otros vecinos poseedores de ganado.³⁴ Sin embargo, más luego, en la década de 1630, la prohibición de matar hacienda realenga, o, en otras palabras, la exclusividad de matar ganado, devino una pre-condición demandada por los abastecedores de carne.³⁵

Las compañías eran también un indicador de la producción agraria porteña de gran escala orientada hacia el mercado externo así como de la liquidación del encomendero autosuficiente. Los terratenientes porteños entraron en sociedades y compañías con parientes o amigos para combinar

recursos para financiar la transformación y consolidación de sus propiedades. Por ejemplo, en 1616, Geronimo de Medrano y Juan Barragán, ambos amigos, compraron una estancia en el pago de Luján. Luis Gaitán y Juan Rodríguez Gaitán, primos, compraron 500 varas de frente en el pago de la Magdalena en 1619.³⁶ En forma similar, la compañía de dos personas formada por Christóbal Naharro y Juan Alonso de Vera y Zárate, Luis Cordobés y Gonzalo de Acosta, y Martín de Avila y Juan Domínguez Palermo alcanzaron acuerdos financieros en negocios rurales en 1608, 1614, y 1615, respectivamente.³⁷ Las compañías desaparecieron en la década de 1630, cuando los terratenientes habían acumulado suficiente capital para adquirir los inmuebles por separado. Esto, por cierto, implicó que la mitad de los socios lograron triunfar económicamente a expensas de sus socios.

La acumulación capitalista en la agricultura puede tomar la forma de una inversión intensiva en capital en un área geográfica dada y no del incremento de sólo el área geográfica. En efecto, la propiedad de molinos de agua y de viento, atahonas y percheles son también factores que ayudaron a acumular capital.³⁸ De acuerdo a la Tabla 13, los testamentos muestran la existencia de 20 atahonas o molinos harineros y 13 graneros (percheles) sobre un total de 115 testamentos. De un total de 53 testamentos que incluían en sus ítems molinos y graneros, 30 o el 57% fueron emitidos por viudas. De aquí que, no es sorprendente que los molinos, conjuntamente con los esclavos, hayan sido los principales activos productores de ingresos dejados a las viudas.

Aparte de las atahonas (molinos) y percheles (graneros), el tipo de inversión agrícola intensivo en capital tomó la forma de los viñedos. Los viñedos fueron también un medio de incorporar a Buenos Aires en el mercado interno colonial. La tierra plantada con viñedos llevaba los precios más altos, requería la más alta tasa de mano de obra y de acuerdo con Cushner (1980),

"...era factible sólo a aquellos con substanciales sumas de dinero, por cuanto el comprador debía de comprar la casa, las bodegas, las máquinas de prensar y una enorme fuerza de trabajo esclava".³⁹

La necesidad de cercar las viñas es una de las razones porque tan alto grado de mano de obra era necesario. En el caso de Buenos Aires, cuatro testamentos y dos ventas notariales revelan la existencia de viñedos (ver Tabla 14). Mientras la chacra que tenía el mayor número de plantas era la de Pedro Pedraza Centellas, con 18.000 plantas, o el equivalente de 3.600 barriles de vino, localizadas en el pago de Monte Grande; la que empleo el mas alto número de esclavos fue el viñado de Antón Higuera de Santana con 28 esclavos localizado también en Monte Grande y productor de alrededor de 3.200 barriles (ver Tabla 14). Con relación a la producción de vino, el número de viñas cultivadas variaba por localidad. De tres pagos o condados donde los testamentos mencionan la existencia de viñedos, el que tuvo en cuenta los viñedos más grandes fue el pago de Monte Grande, seguido por el de Magdalena, y después por el de Matanza.

Por cuanto los empresarios Bonaerenses estaban interviniendo directamente en la producción agraria, la acumulación comercial afectó en forma instantánea las relaciones rurales de propiedad. La ciudad de Buenos Aires así como la campaña creció en el contexto de un cambio en las relaciones sociales. Como resultado de este cambio, no todos los vecinos de Buenos Aires compartieron la misma identidad socio-económica. Mientras los más ricos comerciantes monopolistas fueron tanto propietarios rurales como urbanos, aquellos menos ricos y del ramo minorista llenaban una u otra categoría. Por ejemplo, una minoría de terratenientes urbanos, aquellos que eran grandes comerciantes, fueron también vendedores y compradores de chacras y estancias. De un total de 194 vendedores de inmuebles

urbanos, solo 24 fueron vendedores de chacras y 11 de estancias. Algunos de los vendedores de inmuebles urbanos fueron también dueños de chacras, estancieros, y vendedores de esclavos. A propósito, ocho vendedores de inmuebles urbanos fueron también vendedores de estancias y chacras; cuatro fueron vendedores de estancias y esclavos; tres fueron vendedores de chacras y esclavos; y otros tres fueron vendedores de estancias, chacras y esclavos. De igual manera, de un total de 194 compradores de inmuebles urbanos, solo 34 fueron compradores de chacras y 15 de estancias. Algunos de los compradores de tierra urbana fueron también dueños de chacra, estancias y compradores de esclavos. In efecto, hubo seis compradores de inmuebles urbanos que también fueron compradores de chacras y esclavos y dos que fueron compradores de estancias y esclavos.⁴⁰

En suma, uno puede concluir que la penetración de relaciones comerciales en la campaña aceleró un intenso mercado de tierras urbanas y rurales. En este sentido, los propietarios de esclavos, no compartían un gran porción del mercado de tierras de chacra. De 107 vendedores de chacras, solo 14, o el 13%, fueron también vendedores de esclavos. De igual manera, solo 10 compradores de un total de 107 compradores de chacras fueron también compradores de esclavos. Por otro lado, los propietarios de esclavos, los terratenientes fueron también compradores y vendedores de inmuebles urbanos. Actualmente, entre 82 compradores de inmuebles rurales, solo 26, o el 32%, fueron también compradores de inmuebles urbanos y seis fueron compradores de casas y esclavos. En forma semejante, entre 82 vendedores de estancias, solo 21 o el 26%, fueron también vendedores de inmuebles urbanos, y siete o el 9%, fueron ambos vendedores de esclavos y lotes urbanos. Asimismo, entre 107 compradores de chacras, solo 34 o el 32%, fueron también compradores de inmuebles urbanos, y siete fueron ambos vendedores de esclavos y lotes urbanos. Aparentemente, los dueños de estancias compartían una porción más grande del mercado esclavo que los dueños de chacra. De hecho, de 82 vendedores de estancias, 23 o el 28%, fueron vendedores de esclavos. De igual manera, de 82 compradores de estancias, 16 o el 20% fueron también compradores de esclavos.

En suma, este capítulo ha verificado como la penetración capitalista en la campaña de Buenos Aires bajo el control del capital comercial a comienzos del siglo XVII cambió los patrones culturales, de una estrategia "farmer" (producción de pequeña mercadería), administrada por la facción Benemérita, hacia una estrategia "junker" (de producción agraria en gran escala, orientada al mercado), de desarrollo rural, administrado por los miembros de la facción Confederada. Más aún, este capítulo ha demostrado que para estimular una estrategia "junker" de desarrollo rural una clase terrateniente no-encomendera de empresarios recurrió a la adquisición de tierra pública y privada y de mano de obra esclava, al alquiler de mano de obra indígena, a las inversiones intensivas en capital, al endeudamiento privado, al monopolio sobre el abastecimiento de carne, y a la sociedad agraria con el fin de abastecer la demanda brasileña de vituallas.

NOTAS

¹ General Alonso de Sotomayor en 1583, General Martínez de Leyba en 1601, General Mosquera en 1605, y Cap. Francisco de Mandojana en 1623.

² Trelles, 1872, 22.

³ Lima, 1980, 20.

⁴ Lafuente Machain, 1944, 183.

⁵ Vedoya, 1973, 428.

⁶ Molina, 1964, 333.

⁷ Cervera, op. cit., I, 361.

⁸ AGN, Sala IX, Escribanias Antiguas, v.1, f.470.

⁹ AGN, v.19, f.411.

¹⁰ Entre ellos encontramos: Amador Vaez de Alpoin, Juan Barragan, Gaspar de Gaete, Bernabe Gonzalez Filiano, Antonio de Govea, Mateo Leal de Aayala, Diego Lopez Camelo, Melchor Maciel, Juan de Matias de Balcazar, Mateo de Monserrate, Blas de Mora, Juan Quintero, Antonio de Rocha Bautista, Pedro de Roxas y Acevedo, Marcos de Sequera, Juan de Tapia de Vargas, Cristobal de Torres, y Luis de Villegas.

¹¹ AGN, Seccion Tribunales, Protocolos, Registro 2, f.1.

¹² AGN, Registro 3, 1728, f.68.

¹³ AGN, v.45, f.255.

¹⁴ AGN, Division Colonia, Sala IX, Protocolos de Lujan, v.3, f.537v.

¹⁵ AGN, v.3, f.428v.

¹⁶ AGN, v.11, f.309.

¹⁷ AGN, v.12, f. 1o1v.

¹⁸ AGN, v.12, f.191v.

¹⁹ AGN, v.13, f. 135v.

²⁰ AGN, v.18, f.196; v.23, f.365 y v.24, f.7.

²¹ AGN, v.23, f.354.

²² AGN, v.19, f.60; v.25, f.27v. y 40v.

²³ AGN, v.22, f. 466v.

²⁴ AGN, v.20, f.315v.; y v.25, f.58.

²⁵ AGN, v.15, f.34.

²⁶ AGN, v.11, f.539; y v.18, f.250.

²⁷ AGN, v.18, f.89v.

- ²⁸ AGN, v.24, f.512.
- ²⁹ AGN, v.27, f.538.
- ³⁰ AGN, v.20, f.37 y 38.
- ³¹ AGN, v.19, f.471.
- ³² AGN, v.25, f.102.
- ³³ Cordero, 1978, 183-186.
- ³⁴ Acuerdos, III, 198.
- ³⁵ Acuerdos, VIII, 264.
- ³⁶ AGN, v.8, f.29; y v.10, f.160.
- ³⁷ AGN, v.2, f.1057; v.6, f.172; y v.7, f.6.
- ³⁸ Ochoa de Eguileor, 1977, 28-37.
- ³⁹ Cushner, 1980, 44.
- ⁴⁰ Informacion procedente de mi banco de datos privado.

TOMO XIII

CAPITULO 3

La Crisis Pecuaria. Las Vaquerías de la Banda Oriental.*

* Esta es una versión mejorada del artículo publicado en la Revista de Historia Económica (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, Universidad Carlos III), año IX, n.1, 1991, 103-126; más una Addenda en el n.3 de 1991);

La naturaleza inconclusa de la revolución de independencia en el Uruguay, o en otras palabras, la no resolución de sus contradicciones étnicas, económicas, políticas, sociales y culturales, habría estado íntimamente vinculada con las sucesivas crisis políticas, militares, sociales, eclesiásticas y económicas (pecuaria) que la precedieron. En la historiografía de las crisis económicas del Uruguay la de la crisis pecuaria propiamente dicha o simplemente depredación pecuaria, denominada "desarreglo de los campos", giró tradicionalmente alrededor de las tesis que sostienen el rol determinante que jugaron en la misma factores externos tales como la demanda internacional de cueros y el doble sometimiento del capital agrario al capital comercial, sufrido desde las submetrópolis mercantiles del Brasil y el Río de la Plata.¹

Pero el error de estas tesis acerca del medio rural colonial uruguayo ha sido no tomar en cuenta la región litoraleña (Misiones, Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos, y la Banda Oriental) en su conjunto.² Ella estaba constituida por economías agrícolas de plantación (pueblos de Misiones) en crisis crónica y por polos o enclaves estacionales de producción de cueros para la exportación (Vaquerías del Mar o de la Costa). Los pueblos de Misiones aseguraban, parafraseando a Assadourian, el proceso de reproducción de la energía campesina destinada a ser empleada estacionalmente en las vaquerías.³

Las economías de enclave.

Las economías de enclave, como fué el caso de las corambres o vaquerías (auténticas factorías) de la Banda Oriental en el siglo XVIII, estaban sistemáticamente asociadas en lo que respecta a la mano de obra insumida, con una oferta y una demanda estacionales, una incipiente división técnica del trabajo, y una remuneración a destajo o por piezas; y en lo que respecta a la comercialización de su producto, con un mercado oligopsónico a término. En un comienzo, cuando la campaña de la Banda Oriental se hallaba cuasi-desierta, la importancia de estas economías de enclave estaba en relación directa con la cantidad de indígenas que primero los Padres Jesuitas y luego los Corregidores, Administradores, Cabildos de Indios, y Sub-delegados de las ex-Misiones Jesuíticas o Administración de Temporalidades estaban dispuestos a permitir circular desde las mismas Misiones a las rinconadas del Litoral y la Banda Oriental.⁴

Factores de movilización de energía campesina.

Cabe señalar entonces que, tal como Assadourian lo destacara para el mundo andino, el factor más activo de movilización de energía campesina hacia la producción mercantil (corambres), en las antiguas Misiones Jesuíticas, fueron los Corregidores, más luego llamados Subdelegados y Administradores.⁵ Revelando el rol de estos funcionarios reales, Juan Bautista Dargain pide en 1792 licencia para vaquear en la otra banda bajo la excepcional condición de

"...que en estas faenas he de emplear para peones...a los indios del Pueblo de Yapeyú que con permiso de su Corregidor Cabildo y Administrador se me presentasen a conchavo a los cuales he de pagar en igual forma que a los peones Españoles que conchabase para el mismo efecto".⁶

También fueron factores activos de la movilización campesina los oficiales a cargo de guarniciones militares, los cuales aprovechaban a la soldadesca ociosa. En la Guardia del Paso del Rey (Banda Oriental) Andrés Fernández, natural de la Villa Rica y vecino del Camacué, mayor de 30 años, de oficio labrador, que lo prendió la gente de la partida de Don Antonio Pereira más allá del Fraile Muerto, dijo en 1784:

"...que siempre ha visto que las mayores cogidas de ganado que se hacen y introducen en aquellos dominios, son por los capitanes, coroneles, y demás personas de distinción, constándole asimismo que muchas ocasiones salen las tropas cogedoras de ganado, auxiliadas con soldados y oficiales, como de ordinario suele hacerlo el Capitán Francisco Alvarez con su gente".⁷

Los dueños de barracas o barraqueros.

En un comienzo los comerciantes exportadores eran asimismo dueños de barracas. Pero más luego, estas funciones fueron diferenciándose. Los dueños de barracas o barraqueros eran los que estaban vinculados con los acopiadores del interior.⁸ El acopiador de pieles o cueros, un empresario no encomendero, se veía obligado a lidiar en un negocio donde no se invertía en tierras ni se poblaban estancias y donde prevalecía, aunque en forma primitiva, un embrionario mercado de precios futuros, y un mercado estacional de mano de obra rural donde lo que se remuneraba era un trabajo a destajo o por piezas, y donde a su vez prevalecía una incipiente división del trabajo. La exigüidad del beneficio obtenido por los acopiadores dotados de las vaquerías menos ricas explicaría el porqué el capital comercial pudo dominar fácilmente al capital de los acopiadores, frenando el desarrollo económico de las regiones ganaderas. Los cuadros X-I, X-II y X-III nos revelan la nómina de deudores que operaron en la Banda Oriental con créditos otorgados por acreedores residentes en Buenos Aires. El acopiador de cueros no sentía estímulo alguno por poblar estancias, ni en introducir métodos nuevos de producción ganadera. Poblar estancias e implementar métodos nuevos no contaba con crédito mercantil alguno pues implicaba ingentes riesgos. Casi siempre las mejoras técnicas introducidas traían consigo el aumento del precio de la tierra --tan pronto aumentaba la rentabilidad ganadera-- pero no de los beneficios netos, por lo que el estanciero se guardaba de acometer mejoras técnicas cuando no estaba seguro de recuperar el capital empleado y los intereses devengados. Como era norma entre los acopiadores de cueros, dada la abundancia de ganados mostrencos, no invertir en tierras, tampoco contemplaban reservas para amortizar el equipo de trabajo (carretas, tropillas de caballos, desjarretadoras). Por cuanto los acopiadores eran renuentes a invertir, los comerciantes dueños de barracas tuvieron que extenderles líneas de crédito extremadamente generosas, para que adquirieran lo imprescindible con que mantener activas las vaquerías.

La estacionalidad de las vaquerías.

La estacionalidad de la vaquería o corambre estaba garantizada por la presencia de los cardos, los gusanos y las pariciones. Las matanzas se practicaban, al igual que los rodeos para marcar la hacienda, en los meses de mayo, junio y julio, cuando los campos estaban libres de cardos y no había riesgo en maltratar terneros recién nacidos por estar estos meses fuera del tiempo de la parición.⁹ En los meses de verano no se podía herrar por la corrupción o riesgo de agusanarse "...que le entra a los animales por el calor del yerro". Tampoco en esta estación se podía vaquear, o apartar ganado para el pago del diezmo de cuatropea por la abundancia de cardales, y además por ser tiempo de cría o de parición en que cualquier movimiento del ganado ponía en peligro de muerte a las crías, las que debido a su endeblez física, no estaban en condiciones de seguir a sus madres en las disparadas provocadas por los vaqueros. Los únicos que no respetaban esta restricción estacional (faenar sólo en invierno) y vaqueaban en verano eran los que faenaban cueros clandestinamente, ya que poco les importaba que en las disparadas de la hacienda se murieran los terneros recién paridos. Pero no sólo los faeneros clandestinos faltaban el respeto a la naturaleza. También los indios se comportaban inescrupulosamente. En la petición de licencia para vaquear que hiciera en 1792 Juan Bautista Dargain, este expresaba que

"...se impedirá el destrozo del ganado hembraje, que sin consideración hacen los faeneros changadores con el fin de aprovecharse del cebo y grasa, particularmente los indios que no habiendo quien lo impida matan las bacas preñadas sólo con el fin de comer el ternero a que son apasionadísimos",

en lugar de matar los toros crecidos "...que no sirven para otra cosa que para consumir los pastos, y aún impedir los procreos".¹⁰ Las arreadas de ganado hechas por los Administradores de las Temporalidades en la Banda Oriental lo fueron "...sin reservar ybierno o berano pues cuanto llega una tropa con ganado cojido, sale otra tropa a hacer otra cojida, lo que no han dejado de hacer muchos años há".¹¹

El mercado del cuero.

En lo que hace a la naturaleza del mercado del cuero, los precios se fijaban generalmente por adelantado mediante operaciones de crédito notarialmente escrituradas. Tanto la fijación de los precios como la cláusula de exclusividad durante el término del plazo contraído en los créditos de compra o habilitaciones, confería a las relaciones sociales y económicas en la producción de cueros, una naturaleza oligopsónica.¹² De esta forma, la especulación creaba, parafraseando a Hilferding (1910), un precio para cada pesada del cuero y para cada momento del año, al extremo de convertirse en un mercado a término que le daba al acopiador "...la posibilidad de beneficiarse de las consecuencias eventuales del movimiento de los precios, y de cargar a la especulación el riesgo por los cambios de precio".¹³

Para la determinación del precio de los cueros existían en la segunda mitad del siglo XVIII dos tipos de mercados, el de contado o de ajuste rápido y el mercado de futuros o a término, o de ajuste lento. En el primero, las partes acordaban la entrega de una cantidad de cueros a un precio, realizando la entrega en forma inmediata o efectiva. En el segundo, las partes acordaban entregar o recibir una cantidad de cueros en un momento específico del futuro.¹⁴

El mercado a término del cuero.

Las primeras experiencias de mercado a término en la producción pecuaria se habían observado ya en el siglo XVII. Gonsález (1957) relata cómo se comienza a comercializar el cuero a entrega futura, es decir, antes de la corambre, colocando la producción a los dueños de los navíos de registro. Esto es aceptado por los capitanes de los barcos puesto que se aseguraban la puntualidad de la entrega y el conocimiento del costo de sus insumos.

Los precios de futuro tendían a ser más elevados que los de contado debido a gastos extras en intereses y almacenamiento. Por ejemplo, si bien los cueros de 25 y 40 libras tomados en marzo de 1772 para dentro de 6 y 12 meses de plazo costaban a razón de 4 y 11 reales, aquellos tomados un mes antes para dentro de 10 y 21 meses costaban a razón de 6 y 15 reales respectivamente.¹⁵ El premio o diferencia entre el precio actual en efectivo y el precio de los futuros, obedecía a oscilaciones en: 1) la oferta y la demanda del cuero; 2) la provisión de carretas y lanchones; y 3) la oferta y demanda de bodega marítima. En el ejemplo mencionado, la prima o premio entre ambas contrataciones alcanzaba a dos reales por 4 y 10 meses de diferencia que había entre una y otra compra a término. Al acercarse la fecha término, ambos precios se iban igualando por cuanto los costos de almacenamiento y la tasa de interés iban perdiendo importancia. Si los precios de los meses más lejanos se cotizaban más alto que los cercanos, se podría decir que existía un mercado normal, por reflejar éste los costos de almacenamiento e interés. En cambio, si ocurría lo contrario, se podría decir que existía un "mercado invertido". Esto ocurría sólo en casos de fuerte presión de la demanda en el corto plazo.

Observando detenidamente la Tabla X-I, descubrimos que a diferencia del estancamiento sostenido por Romano (1963), se produce a mediados del siglo XVIII un sostenido aumento del precio del cuero, partiendo en 1745 de un precio de 15 reales para el cuero de toro y 12 reales para el de novillo (ambos de 3 varas de longitud por 2 varas de ancho), hasta alcanzar en 1753 los de 20 y 16 reales respectivamente, o el 33 por ciento de aumento. Estos precios tienen la virtud de mantenerse hasta la entrada de España en la Guerra de los Siete Años a fines de 1761, fecha en que sufren una caída vertiginosa.

Con la Paz de París declarada en 1763 el precio del cuero experimenta un "boom" que supera los precios alcanzados en la preguerra. Efectivamente, de acuerdo a la Tabla X-II, el cuero de toro de 40 libras, equivalente al que mide 3 varas por 2 varas, alcanzaba el precio de 23 reales, mientras que el de 30 libras, equivalente al de novillo de 3 por 2 varas, alcanzaba el precio de 20 reales. Estos precios, a medida que la intensa demanda de post-guerra se fué cubriendo, en lugar de mantener su nivel sufren un progresivo descenso, hasta tocar en 1769 el piso más bajo, con 9 reales el cuero de 40 libras y 3 1/4 reales el cuero de 25 libras, es decir, una baja del orden del 61 y 86 por ciento respectivamente. Al año siguiente, en 1770, el precio del cuero sube, a 5 1/2 reales el de 25 libras y 14 reales el de 40 libras, es decir, un alza con relación al año precedente del orden del 50 por ciento. A partir de dicho año y hasta la participación de España en la Guerra contra Inglaterra o de la Independencia de Estados Unidos en 1779, el precio del cuero se mantuvo estancado debido aparentemente a la intervención del mercado de futuros. Con la participación de España en la guerra de la Independencia de Estados Unidos, el precio del cuero cayó a ocho reales el de mayor calidad. Finalmente, durante las guerras Napoleónicas, debido al permiso real de comercio con colonias extranjeras y en buques neutrales, su valor se mantuvo en los doce reales por unidad.¹⁶

En el precio de exportación del cuero debían computarse los costos de transacción incurridos por los acopiadores, pues los fletes terrestres y fluviales (un real o el 12 por ciento en concepto de flete para aquellos cueros transportados en lancha desde Buenos Aires hasta Montevideo) incluían aquellos gastos mecarios para poder acondicionar los cueros en los puertos de salida. Cada carretero que

transportaba los cueros hasta los puertos de cabotaje debía llevar guías del número de cueros que condujere cada carreta, precaviendo de ese modo que se extrajese ilegalmente ningún cuero por el camino de tránsito. Más aún, a fines de siglo se estableció por bando que las guías debían llevar consignadas las marcas de los cueros respectivos. En el caso de los cueros puestos en Montevideo, el acopiador debía pagar: 1) el flete mencionado, 2) el derecho del Ramo Municipal de Guerra (dos reales), el cual suponía un 25 por ciento del valor del cuero, aforado a un peso cada unidad (que no se cobró en Montevideo hasta 1779), y 3) el Ramo de Alcabala (un 4 por ciento).¹⁷ Juntas, las tres partidas mencionadas constituían un 41 1/2 por ciento del valor del cuero a su salida en América. En el caso de los cueros remitidos desde Buenos Aires a Montevideo, era preciso que antes de embarcarlos en las lanchas del río se reconociera si estaban de recibo y se practicara además su pesaje y romaneaje. Para esta tarea se requería que al menos hubiesen pasado tres días desde la última lluvia de modo que los cueros presentaran menos del 10 por ciento de humedad.¹⁸ Por cueros a estilo de embarque se entendía aquellos de 40, 50 y hasta 70 libras, pues nunca "...se ha tenido por cuero comerciable los de becerro, respecto a ser chicos, y no tener peso regular".¹⁹

Costos de comercialización.

Si a su vez, estos cueros querían ser exportados a España, el comerciante exportador y no ya el acopiador, debía pagar los gastos por: 1) el arrumaje y acomodo de los cueros hecho por los estibadores en la bodega de los barcos; 2) el flete Río de la Plata-Cádiz; 3) el derecho de entrada en España; 4) la comisión; y 5) el seguro.²⁰ Teniendo en cuenta que:

- a) el flete del cuero del Río de la Plata a Cádiz oscilaba entre 4 reales plata por pesada de 35 libras en tiempos de paz, que corresponde al 50 por ciento del valor del cuero a su salida en América aforado a un peso (8 reales) cada cuero, y 24 reales plata en tiempos de guerra;
- b) el derecho de entrada en España alcanzaba a 2 1/5 reales por pesada de 35 libras (4 maravedíes de vellón por libra, o 140 maravedíes, o 4 reales y 4 maravedíes de vellón por pesada de 35 libras), que corresponde a algo más del 25 por ciento aforado a peso cada cuero;
- c) la comisión respectiva se estilaba en el 4 por ciento sobre su precio en el puerto de salida (16 reales plata) o 3/4 de real por cada unidad, o el 9 por ciento;

y d) el seguro alcanzaba al 3 1/2 por ciento sobre un aforo de 18 reales provinciales o 14 1/2 reales plata, igual a 1/2 real de plata o 6 1/4 por ciento, siempre con referencia a la unidad; concluimos que los gastos de comercialización (derechos de entrada más comisión y seguro) de un cuero de 35 libras que costó en el mercado a término 12 reales plata, alcanzaba promedio entre 8 reales plata o el 90 por ciento en tiempos de paz y 27 reales plata en tiempos de guerra.²¹

Asimismo, si se quería reexportar dicha mercancía a reinos extranjeros se debía pagar: a) el derecho de salida de España a razón de 9 reales de vellón por cuero, o el 15 por ciento sobre el avalúo de 60 reales de vellón por cuero; y b) el flete de Cádiz al puerto extranjero, que sumado a los derechos de entrada, comisión y seguro alcanzaba al 97 por ciento del valor del cuero. Sumando al costo del cuero sus gastos de comercialización, que oscilaban entre 13 y 37 reales plata, y considerando que el precio del mismo en España fluctuaba alrededor de los 30 reales plata debemos concluir que la exportación legal de frutos del país sólo era lucrativa en tiempos de paz.²²

Por cierto, considerando estos altos costos de comercialización, sólo en tiempos de guerra, mediante faenas clandestinas o exportando ilegalmente a los reinos extranjeros (Brasil), es decir, con operaciones donde se salvaban todos los gravámenes fiscales, podía alcanzarse una tasa de ganancia razonable. En un documento de época se aclara que los cueros extraídos por los Portugueses y fraudulentamente conducidos hasta Río de Janeiro, y de ahí a Lisboa, pagaban el 4 por ciento por un derecho que llamaban de baldeación, y luego el quinto por el derecho de los géneros que se embarcaban, que correspondía al 20 por ciento,

"...con que importando las dos partidas 24% es visto que los extranjeros ahorran por aquella vía [fraudulenta], un 15 o 16%, y que el Real Erario y los ramos particulares se privan de un 39 o 40% que se dejan de contribuir por prohibir tan estrechamente estas faenas".²³

El mercado de trabajo rural.

Como consecuencia directa de la vigencia de un mercado a término para la fijación del precio del cuero, los empresarios de vaquerías o corambres se vieron obligados a maximizar la rentabilidad de sus empresas satelizando el mercado de trabajo rural, dividiendo la fuerza de trabajo a su cargo según las diversas tareas que las comprendían, y pagándolas a destajo. Para los representantes de concepciones dualistas, como Prado Junior (1961), el trabajo a destajo, era una relación capitalista disfrazada o encubierta, pues los aparceros, vaqueros en nuestro caso, no pasarían de ser meros asalariados que recibían salarios de manera indirecta, normalizando (standardizando) la producción directa per cápita. Sin embargo, para Dos Santos (1972), un representante de la tendencia estructuralista, la aparcería sería visualizada no como una relación capitalista disfrazada sino como una relación de producción precapitalista y semiservil; la cual por apoyarse en una división del trabajo entre productores familiares que producían para el autoconsumo, y no expropiaban al trabajador el fruto total de su trabajo, no generaba plusvalía. Por ello, para Dos Santos (1972), la producción capitalista sólo surge con la gestación de plusvalía y con la existencia del trabajador libre, esto es, el trabajador que vende su fuerza de trabajo al propietario de los medios de producción, percibiendo un salario por el alquiler de la misma.²⁴ Para el caso Colombiano, Kalmanovitz (1983) sostiene que las nuevas aparcerías que surgieron en la Nueva Granada "...podían utilizar parcialmente trabajo asalariado", lo que aproximaba al aparcerero "...a la figura del burgués agrario al contratar trabajo asalariado libre y abonar una renta al terrateniente".²⁵ El trabajo a destajo y la aparcería o mediería en el nivel de la producción rural se habría desarrollado entonces como alternativa más extendida para maximizar beneficios y minimizar riesgos. En la opinión de Brown y Salvatore (1987, 1989) la irrelevancia o ineficacia que los mecanismos extraeconómicos tuvieron para retener y disciplinar la mano de obra rural en la Banda Oriental durante el siglo XVIII obedecía no sólo a la resistencia de los trabajadores pre-capitalistas (gauchos) a desprenderse de los medios de subsistencia, sino también a la resistencia cultural a cambiar el estilo de vida, los hábitos de trabajo, y la conciencia de la noción del tiempo y de la naturaleza del ocio.

Si bien diversos autores reconocen que en la mayor parte de los casos los acopiadores o contratistas que implementaban el trabajo a destajo eran empresarios no encomenderos, sólo los dependentistas se atreverían a aseverar que estos últimos fueran capitalistas. De igual manera, en lo que hace a la calificación del salario, si bien es indudable que la relación social que prevalecía en la producción de bienes exportables (cueros) era el trabajo a destajo, sólo los dependentistas se animarían a asegurar que la naturaleza de ésta relación social fuera la de un salario capitalista. A diferencia de lo que sostienen Sala, Rodríguez y de la Torre (1967), creo que hay una distinción sustancial entre la condición del peón contratado para una corambre y la del peón de estancia; pues si bien el tipo de

remuneración era similar (en dinero o en especie), lo que se remuneraba era notoriamente distinto. Mientras que a un puestero de estancia se lo contrataba en forma permanente y se le pagaba un salario por tiempo (un promedio de \$8 por mes), a un peón changador se lo contrataba transitoriamente y se le pagaba, según la propia Sala de Tourón reconoce, un salario o jornal por pieza faenada; con el cual, como veremos, a veces doblaba el sueldo mensual de un peón y podía llegar a doblar el sueldo mensual de un capataz de estancia; quien nunca ganaba más de doce pesos mensuales.²⁶

La naturaleza de enclave de las vaquerías también especializaba el mercado de trabajo rural. Tan era así que la fuerza de trabajo de una vaquería se componía esencialmente de: a) baqueanos, b) desjarretadores, c) caballerizos, d) desolladores, e) barraqueros, f) bomberos, y g) achuradoras. El personaje central en esta empresa era indudablemente el vaquero. Este era un hombre libre, por lo general mestizo, de origen rural, cuya función principal consistía en desjarretar o faenar el vacuno. Por vaquería se daba un promedio de dos o tres vaqueros, acompañados por un sólo peón caballerizo, que degollaba al animal una vez desjarretado, y entre tres y diez peones que lo desollaban.²⁷ La retribución de cada una de dichas tareas variaba por cuanto el tiempo y la habilidad requeridas para desempeñar cada una eran también distintas.

La diferenciación salarial.

La desigual inversión en tiempo y habilidad para cada tarea hacía necesario entonces una primitiva diferenciación salarial; aquellas tareas más riesgosas y que requerían de mayor vaquía (calificación) como la del vaquero que desjarretaba y acodillaba el animal, debían ser mejor pagadas que las de menor riesgo, como por ejemplo la del peón que sólo cuereaba al vacuno y estaqueaba y marcaba al cuero, o la del barraquero que simplemente recogía, desgarraba, limpiaba, clasificaba, apilaba, y prensaba los cueros.²⁸ Si bien aparentemente el vaquero recibía por unidad de cuero producida menor jornal (1/2 real por cuero) que el peón o el barraquero, quienes cobraban entre un real y medio y dos reales por cuero construido o fabricado, en la totalidad de la jornada el vaquero doblaba o triplicaba los ingresos del peón. Los sueldos de los peones barraqueros se pagaban unas veces por plata y otras en papeletas que los acopiadores les daban por el tiempo de sus servicios expresando en ellas lo que habían invertido, a razón de cuanto por mes o por cuero, y qué número de cueros habían tenido a su cargo.²⁹ Por ejemplo, en la estancia "La Calera" cada peón desollador recaudaba entre 8 y 18 pesos por mes, mientras que el vaquero Martín Cuello, el que menos toros había desjarretado, recaudó \$19 y 3 reales, y Tomás Díaz, quien había alcanzado el record, recaudó \$33 y 3 reales por mes.³⁰

La diferencia entre peón y vaquero obedecía al hecho de que la cantidad de animales que cada vaquero desjarretaba en una jornada de labor, doblaba o triplicaba la cantidad de animales que un peón caballerizo podía alcanzar a degollar, cuerear y apilar en el mismo tiempo. Como promedio cada vaquero desjarretó en 1769 en la estancia mencionada de los Jesuitas Expulsos, entre 200 y 600 toros por mes. El record fué alcanzado por el vaquero Tomás Díaz quien desjarretó 1069 toros en tres meses, seguido por Pascual Moroti con 894 toros, y por quien menos cueros hizo, el vaquero Martín Cuello con 620 toros, todos en igual período.³¹

Como a los peones se les pagaba por cuero, ya fuese de toro o novillo, y chico o grande, es muy probable que los vaqueros prefirieran reducir sus riesgos y acelerar la faena aprovechando los días o semanas de buen tiempo, desjarretando aquellos vacunos que les ofrecían menor resistencia y esfuerzo; en otras palabras, la velocidad de la faena dependía de la consistencia del suelo y de la edad y gordura de los vacunos. Es sabido que lluvias excesivas provocaban tal humedad en el suelo que impedían que

los vaqueros maniobraran con soltura sus cabalgaduras. Por otro lado, el ganado joven y gordo, le exigía al vaquero mayor velocidad y destreza.

Núcleos o reservorios de mano de obra semi-esclava.

Asimismo, la naturaleza de enclave de las vaquerías satelizaba el mercado de mano de obra rural. En efecto, los acopiadores preferían aminorar sus costos, haciendo recaer el peso del trabajo en núcleos o reservorios de mano de obra semi-esclava, conchabando en forma colectiva partidas de indios Guaraníes, Tapes o Minuanes, o cuando el acopiador era un militar, recurriendo al auxilio de milicianos y oficiales en lugar de changadores mestizos a los que había que pagar con jornales individuales.³² Así por ejemplo, en 1730 el Capitán Luis de Sosa Mascareñas, Alcalde de la Santa Hermandad, declaró ante el Cabildo de Montevideo que las ranchadas de los changadores atraían hacia ellos a muchos de los indios reducidos en Santo Domingo Soriano, con sus mujeres e hijos, para peones de a pie y cocineras y lavanderas; y al no faltar los cielitos (bailes) y los beberajes, "...empezaban las mujeres a descomponerse con los troperos".³³ En dichas ranchadas o puestos, como el de la Rinconada de Martínez de Haedo, donde regían la institución de la poliandria y un peculiar código moral llamado Instrumentos de Haedo, sólo se castigaban dos delitos "...que son el que se lleva una china por la falta que hace a otros, y el matar un buey porque hace falta para acarrerar los cueros que se hacen en los campos".³⁴ Por el primer delito de "llevarse chinas", el Juez Subdelegado Gabriel de la Quintana manifestaba en 1784, que el Administrador General de las Misiones Gregorio Soto "...ha llegado los casos de hacer castigar con azotes, y cortar el pelo [a] algunos españoles hijos de hombres honrados".³⁵ Hubo según Quintana, pobre "...que por no sufrir tal afrenta después de atado a sacado un cuchillo de su bota, y se ha despansado y muerto".³⁶

Se sabe también cómo las vaquerías o corambres, donde se retribuía con un jornal a destajo, contribuyeron en gran medida a la disolución de las escasas reducciones indígenas existentes aún en el siglo XVIII. Ya a comienzo de siglo, el Procurador General llamaba la atención del Cabildo de Buenos Aires sobre una estancia poblada por Portugueses; y declaraba que los mismos por ser inhábiles para vaquear se valían de los indios Minuanes y de los peones de Santa Fé, llegando incluso a valerse de peones Tucumanos.³⁷ Al entregarse a la matanza de ganados para servir a los intereses mercantiles de los acopiadores de cueros y obtener en retribución toda suerte de abalorios, los indios de las Misiones Jesuíticas

"...no atendieron ya sus telares, siembras, y otros trabajos establecidos y todo lo que antes se llevaba y gobernaba, por unas muy escrupulosas reglas, se redujo a confusión y trastorno y aún se acreditó, que en los años de 1768 y 1769 no enviaron efectos algunos para el pago de tributos y demás indispensables gastos, sino once pueblos, y estos en muy corta cantidad".³⁸

En el caso de las vaquerías y recogidas de ganado alzado de la banda occidental del Río de la Plata estas se frustraban cuando existían rumores de malones indígenas o escasez de caballos; y en esos casos se extraía siempre el ganado de las estancias, aunque sus dueños se quejaban de que contaban con escaso ganado y que era flaco el poco que tenían. La extracción la practicaban los matanzeros o compradores de reses formando cinco partidas para cada uno de los cinco partidos (jurisdicciones) de la campaña; comenzando con el pago más próximo (La Matanza), y a medida que los pagos más cercanos eran trajinados, le seguían los demás pagos más lejanos, de modo que una vez abastecida la ciudad con reses del primer pago, "...días antes que se experimentase el clamor del pueblo estuviese proveída con las del segundo pago, y así hasta el último".³⁹

Las medias lunas o desjarretadoras.

Por otro lado, la relación que mantenían el personal de las vaquerías o corambres con los medios de producción era desigual, por cuanto cada uno de ellos poseía con intensidad diversa algún medio de producción. En las corambres o faenas de hacer pieles, los vaqueros eran provistos por el empresario acopiador con medias lunas para desjarretar los animales, con cañas tacuaras para calzar las medias lunas, y con espadines para acodillarlos, pero no de los caballos, que eran de su propiedad. Las cañas tacuaras en que se engarzaban las medias lunas eran producidas en Corrientes, donde la Mayordomía de la Iglesia Catedral se encargaba de su distribución, vendiéndose a tres reales cada una. Mas no siempre era este el precio normal. En los reparos puestos por el Cabildo de Corrientes a la rendición de cuentas que hiciera en 1781 el Mayordomo de la Iglesia Catedral Dr. Don Antonio Martínez, los cabildantes le reprochaban que en tiempos pasados se vendían las tacuaras "...cuando más caras, a 20 pesos o 160 reales cada carretada de a 50 tacuaras", o tres reales cada una. Dicho párroco, según los cabildantes,

"...no sólo carga a 4 reales cada tacuara, sino también carga el costo de peones, gastos de yerba, tabaco, alquileres de bueyes, caballos, y erramientas, de manera que cada tacuara sale cuando menos a dos pesos, siendo constante que el vecindario acarreo a su costa dichas tacuaras hasta la cercanía de esta ciudad cuio exceso en el valor de las tacuaras es tan perjudicial a la Iglesia, que se conoce palpablemente el artificio con que fundó dichas cuentas, esparciendo en diferentes partes el costo de dichas tacuaras, para no ser conocido esta maldad".⁴⁰

El caballo.

Los caballos eran su principal instrumento de trabajo al cual adiestraban y enseñaban especialmente para la tarea de faenar, enlazar, y pechar; en la cual ganaban a razón de medio real por cuero pagaderos en especie (yerba, tabaco). Incluido en el salario por cuero producido estaba la reposición por el desgaste o amortización sufrido por su instrumento de trabajo: la tropilla de caballos. Por el contrario, los peones destinados a desollar los animales carecían de caballos propios y operaban como caballerizos cuidando de las cabalgaduras de los vaqueros y ganando a razón de dos reales por cuero desollado. Aquellos peones que estaquillaban, apilaban, sacudían y prensaban los cueros también ganaban a razón de dos reales por cuero.⁴¹ En cambio, los peones caballerizos y a veces los peones barraqueros ganaban un salario por tiempo entre ocho y diez pesos cada mes. Las achuradoras eran casi siempre las mujeres y los niños que acompañaban a los peones en las carretas de cada expedición montada al efecto, las que asimismo operaban como cocineras y lavanderas.

Si bien el caballo era un instrumento de trabajo para vaquear, recoger, apartar, enlazar, bolear, arriar, pechar, pisar ladrillo, vender al menudeo o moler trigo, cuya propiedad convertía a su poseedor en un propietario de medio de producción, también es cierto que el caballo era un medio de transporte individual que le permitía a su propietario gozar de una mayor movilidad para vender, ocasionalmente, su fuerza de trabajo.⁴² Poseía a su vez el caballo, cuando no era castrado, la ventaja de poder reproducir su fuerza de trabajo en forma natural sin requerir de gasto alguno, salvo el fondo de reposición por la brevedad de su ciclo de vida útil.

Como es sabido, el acopiador o capitalista pagaba por la fuerza de trabajo contratada mucho menos que el valor producido por dicho trabajo. Aquellos acopiadores de cueros que supieron valerse de los reservorios de mano de obra indígena o miliciana acumularon grandes diferencias con las cuales engrosaron las filas de la nueva burguesía naciente. En nuestro caso de la corambre, por cada cuero producido y apilado en la barraca, el acopiador obtenía entre 10 y 23 reales según su peso o tamaño, y

desembolsaba por él una suma de costos fijos y variables. Los costos fijos estaban constituidos por los medios de producción (desjarretadores, espadines, cuchillos, y estacas), los cuales se prorrataban entre la totalidad de las unidades producidas. Por ejemplo, en la hechura o construcción de 2350 cueros se insumieron en 1769 tres carros completos de estacas; y en 1784, para la construcción de 1031 cueros se insumieron 4 1/2 docenas de cuchillos, y solamente una media luna a un costo entre 12 y 21 reales cada docena de cuchillos.⁴³ El costo variable estaba constituido por la fuerza de trabajo incorporada al producto, consistente en los vaqueros, los peones, y los barraqueros, trabajando a razón de medio real por cada cuero los primeros, y dos reales por unidad los otros; más el costo de las vituallas (yerba y tabaco), que oscilaba con el número de peones empleados, y el costo de flete, fluctuando este último con la mayor o menor distancia a los embarcaderos más cercanos.⁴⁴ Los costos variables estaban constituidos por el alquiler de las carretas o flete.⁴⁵

Las provisiones de las vaquerías.

Las provisiones mediante las cuales se avituallaba al personal de las vaquerías promediaba a razón de una libra de yerba de palos y dos libras y media de tabaco colorado por mes por peón, por un precio que en 1769 estaba a 20 reales cada arroba de yerba y \$4 1/2 cada arroba de tabaco.⁴⁶ Los volúmenes de tabaco y yerba consumidos por la población de la campaña, se pueden estudiar en forma indirecta a través de la estadística anual de los cueros producidos y/o exportados. Si tenemos en cuenta que el precio de la yerba fluctuaba entre 5 reales por arroba, o \$4 1/2 cada tercio en 1757; y 20 reales por arroba en 1765 o \$16 cada tercio en 1773; y que el precio del tabaco fluctuaba entre 16 y 32 reales la arroba; y que entre todos vaqueros, caballerizos, y peones barraqueros (habría 2000 hombres en la campaña de la Banda Oriental en 1784), alcanzaban a recibir cerca de \$40.000 anuales en retribución de su trabajo en las corambres, que se consumían en un 60 por ciento en yerba de palos y en un 40 por ciento en tabaco colorado, podríamos decir que las regiones rioplatenses productoras de cuero demandaban anualmente entre 100.000 y 200.000 arrobas de yerba y entre 40.000 y 80.000 arrobas de tabaco.⁴⁷ Esta primitiva estimación no resultaría antojadiza si observamos que el mismo Azara menciona un promedio de 196.000 arrobas que salen de Asunción en el quinquenio 1788-1792.⁴⁸ Considerando que cada peón acondicionaba entre 50 y 100 cueros por mes, según la intensidad de la vaquería, consumiendo en víveres en dicho período una libra de yerba de palos y 2 1/2 libras de tabaco en rama, y que una libra de yerba costaba entre 1/5 y 4/5 de real y que 2 1/2 libras de tabaco costaban entre 1 1/2 y 3 reales, concluimos que el acopiador insumía como gasto variable para manutención de cada peón mientras durara la vaquería entre 1 7/10 real y 3 4/5 real cada 50 o 100 cueros. La provisión de vituallas era imprescindible, al extremo que lo primero que hacía un hacendado para iniciar una tarea, ya se tratase de un rodeo o una corambre, era arracionar sus peones con tabaco y yerba, pues de lo contrario no hallaba jornaleros.

Entre las causas por las cuales la campaña se hallaba en 1783 con muy pocos hacendados que tuviesen rodeos mansos un Fiel Ejecutor denunciaba: 1) la escasez de mano de obra, y 2) la destrucción del terneraje. La primera, que es la principal de las causas, se debe al hecho de no hallarse peones que se quisieran conchabar por meses corridos, debido a que "...sólo se conchaban cuando los conductores del abasto van a correr el ganado alzado".⁴⁹ Esto ocurría por cuanto los hacendados

"...los abrigan dándoles de comer, teniendo 4, 5, y 6 en su casa, sin destino alguno, manteniéndose estos dichos peones de robos de ganados y caballos"⁵⁰

Careciendo los hacendados de mano de obra fija,

"...para entregar los novillos se ven en la precisión de pagarles a los referidos peones a 10 y 12 reales al día, de los que se ocupan en dicha corrida, que con estos costos que tienen el riesgo de la pérdida del ganado, sobre el abono que hacen aquí de \$2 por cada novillo, les suele salir puestos en los corrales muy cerca de 43 se manifiesta los perjuicios que a la causa pública infieren los que abrigan dichos peones y son causa de que no se conchaven por años o temporadas".⁵¹

La corambre de hacienda alzada.

El problema se presentaba cuando las corambres eran practicadas por los mismos hacendados con hacienda alzada, ya sea en campos propios o realengos. El resultado de estas corambres era, para cada hacendado que la practicaba, inmensas pilas de cueros sin marcar, y lo que era peor, herradas con marcas heterogéneas. En la estancia de La Mariscala, la hacienda no se herraba y los cueros hechos (construídos) se admitían por orejanos por sobreentenderse la imposibilidad de herrarlos dado el inmenso número de los ganados alzados y la enormidad de las distancias a recorrer. Por otro lado, en tiempos de seca y falta de pastos aún en las estancias más próximas a los pueblos los ganados se alzaban y se marchaban a las serranías donde abundaban los pastoreos y aguadas y donde era imposible la yerra. De modo que las autoridades civiles admitían la posibilidad de otorgar guías a los cueros orejanos cuando estos procedían de ganados alzados. Pero este no era el caso cuando al cuestionarse la naturaleza alzada o realenga del ganado, los cueros resultantes podían considerarse mostrencos y no orejanos. Los primeros, a diferencia de estos últimos, debían ser comisados y rematados al mejor postor en almoneda pública. En estos casos se estaba a el diezmo que cada uno pagara, por lo que se nombraba por parte del Juez personas inteligentes en la materia.⁵²

La mano de obra a destajo.

Si bien los jornales de la mano de obra a destajo empleada en las vaquerías sufrió una notable mejoría, de cuatro reales al día en tiempos del Virrey Ceballos (1778) a seis u ocho reales doce años después, no podríamos afirmar con certeza por carecer de la información respectiva, que los jornales rurales siguieran las oscilaciones del precio del cuero.⁵³ El jornal por cada mil cueros faenados aumentó de \$50 a comienzos del siglo XVIII (1723) a \$62 1/2 en el año de mayor baja del precio del cuero (1769).⁵⁴ Es decir, el jornal aumentó en medio siglo \$12 1/2 sobre un básico de \$50, lo que es decir un 25 por ciento. Quince años después (1784), los salarios rurales experimentaron un nuevo repunte aún más considerable. Felipe Flores y Francisco Sandoval (alias Chumingo), socios de ejercicio baqueros faenaron por orden de Antonio Pereyra a favor de la Administración de los Pueblos de Misiones y en el paraje El Daymán 6285 cueros cotizados a 3 reales cada uno, en los cuales trajinaron tres barraqueros a \$10 mensuales cada uno, insumiendo \$888 que deducidos de los \$2357 que importaron los cueros significaron \$739 para cada uno de los dos vaqueros, o el equivalente a \$225 cada mil cueros, más del triple de lo devengado por un baquero quince años atrás.⁵⁵

Pero si bien hemos comprobado que en la campaña de la Banda Oriental existió una inflación del salario a destajo o por piezas no lo hemos comprobado aún con respecto a los salarios fijos. De todos modos, la inflación del salario a destajo fué función del boom del cuero. Pero tan pronto como se fueron agotando las existencias de ganados orejanos la demanda de mano de obra estacionaria se fué reduciendo precipitadamente, y por consiguiente se fué deprimiendo el salario a destajo. Con el agotamiento de las haciendas orejanas creció enormemente el abigeato o cuatrерismo así como la necesidad de poblar las tierras realengas.⁵⁶ En 1799 el Capitán Jorge Pacheco,⁵⁷ propuso un famoso plan para terminar con los robos de ganados,⁵⁸ y en 1801 encaró la conocida expedición contra los indios

Charrúas y la fundación del pueblo de Belén.⁵⁹ Un año más tarde, en 1802, un numeroso grupo de hacendados de Gualeguaychú dá cuenta también de los robos de ganados y pide que se adopten medidas para evitarlos.⁶⁰

Reglamentación de la marca y la contramarca.

Estos cambios de la realidad rural exigieron reglamentar la marca y la contramarca, y perseguir el cuatreroismo. En el caso de corambres con hacienda de marcas heterogéneas, al ser vendidos los cueros a los acopiadores, se prestaban a ser denunciados por los dueños de las marcas al extremo de serles secuestrados los mismos por la autoridad respectiva. Por cierto que, de esta mescolanza de cueros con marcas distintas, quienes sacaban ganancias extraordinarias eran los faeneros clandestinos, los gauderios, y los pulperos sin escrúpulos, que reducían cuanto cuero les llegaba a sus manos. Para combatir este caos, las autoridades dictaron en 1791 un bando exigiendo a los compradores de cueros la contramarca correspondiente en cada cuero adquirido.⁶¹ Esto les significaba a los comerciantes una dificultad imposible de remontar. Indignado por los perjuicios que le irrogaba este bando un comerciante declaraba en 1792 que

"...el comercio de los cueros se hace comprando a los criadores a 4, a 6, a 8, o a más número y que estos tienen sus estancias en las dilatadas campañas de aquel territorio distantes unas de otras 15, 20 o 30 leguas, y que le es imposible al comprador andar con los cueros que a comprado de estancia en estancia para contramarcarlos sin hacer unos gastos que importan diez tantos más que el valor que tengan estos cueros conducidos a esta Capital y así o le sería indispensable al comprador abandonarlos por inútiles o conducirlos para ser secuestrados sin haber delinquido en su adquisición".⁶²

Finalmente, debemos concluir que el motivo fundamental de la crisis en la Banda Oriental residió en el estado de la economía pecuaria. En esta última, la clase acopiadora o contratista no llegó a poblar las estancias y se redujo sólo a vaquear o cuerear los ganados alzados, no sólo por el bajo costo de la fuerza de trabajo que los reservorios de mano de obra indígena o mestiza y el trabajo a destajo hacían posible, sino esencialmente por la creciente estructura oligopsónica del mercado del cuero. Mientras los comerciantes exportadores les otorgaran crédito a los acopiadores y empresarios de vaquerías, a través del mercado a término, para que mantuvieran en actividad las vaquerías o corambres, los acopiadores y empresarios de vaquerías se resistían a invertir en tierras, a poblar estancias, y a contratar mano de obra asalariada por tiempo. La clave del origen de la crisis en la Banda Oriental residiría entonces del lado de la oferta de mano de obra rural, debido al fácil acceso que dicha mano de obra tuvo a otras alternativas de subsistencia (contrabando de tabaco, abigeato, faenas clandestinas de cueros, etc.), y en consecuencia, a diferentes medios de producción y sobrevivencia (caballos, ganados, tierra, y provisiones como tabaco, sal, y yerba). Dicho fácil acceso a fuentes alternativas de subsistencia generó una suerte de superpoblación relativa proveniente de regiones satelizadas (Corrientes, Entre Ríos, Santa Fé, Misiones); y la consecuente irrelevancia o ineficacia que los mecanismos extraeconómicos tuvieron para retener y disciplinar dicha mano de obra.

NOTAS

¹ Brito Stéfano, 1953.

² Gelman, 1987, 1989; y Salvatore y Brown, 1987, 1989.

³ Assadourian, 1983, 285.

⁴ Barrios Pintos, 1983, I, 60-62; 1989, I, 71-86; y Morquio Blanco, 1990, 29-37 y 47-52.

⁵ Assadourian, 1983, 289.

⁶ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 66, Exp.1769, fs. 1.

⁷ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 24, Exp. 569, fs. 14.

⁸ Sala de Touron, 1967, 40.

⁹ acerca del cardo, ver Amaral, 1990.

¹⁰ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 66, Exp. 1769, fs.1.

¹¹ AGN, Sala IX, División Colonia, Tribunales, Leg.261, Exp.5, fs.14.

¹² Las diferentes series de precios habrán de ser promediadas mediante el método de los números-índice o mediante tasas. Hamilton (1947) y Levene (1962) calcularon sus números índice a través de la simple media aritmética. En su lugar, Broide (1951) utilizó el promedio geométrico por ser menos sensible a los desvíos extremos. Por el contrario, Nadal (1959) empleó medias móviles, donde las variaciones las refiere no a un punto fijo inicial, sino a los períodos precedentes en cada caso. Los números índices o relativos simples dan la evolución en el tiempo del cociente de los valores de cada serie dividido por el valor correspondiente a un período que se toma como base. Como base de los índices habremos de tomar los valores que no ofrezcan alteraciones bruscas con respecto al promedio de la serie. Los criterios metodológicos a instrumentar en la selección del período base varían según el interés perseguido por el investigador. Para Levene (1962) los precios base son los precios correspondientes a los períodos de paz que sirven de punto de comparación con los precios de los años de guerra. Las guías marítimas, las escrituras de factoraje, y las facturas incorporadas en los litigios judiciales nos brindan una información invalorable. De aquí que a los efectos de poder seleccionar el período base más útil para el estudio de las crisis cíclicas sea preciso volver al método instrumentado por Levene (1962), manteniendo el año calendario como la unidad de análisis cronológico más operacionalizable. Para calcular el movimiento estacional mediremos los desvíos estacionales y los desvíos mensuales medios. Los primeros tratan de los desvíos entre la media mensual más baja y la media mensual mas alta, y los segundos consisten en las desviaciones de las medias mensuales respecto de las medias anuales. Respecto a la ponderación, los criterios para seleccionar el método más conveniente para estimar series incompletas, varían de acuerdo a los intereses metodológicos de cada investigación en particular.

En virtud de la naturaleza incompleta de la estadística del comercio exterior porteño, Broide (1951) eligió una ponderación conjetural de tipo directo, que consiste en suponer, fundándose en los calculos de Burgin (1946), que los cueros formaban aproximadamente la mitad de los envíos al exterior, dividiéndose la otra mitad entre astas, cerdas, lanas, sebo y tasajo. Respecto a la composición de los cueros, Broide (1951) calculó un índice de precios del cuero integrado por las subseries de los cueros de buey, yeguarizo, y vaca, que los promedió con el término medio de los índices de los otros productos. En su lugar, en nuestra serie de precios del cuero la información se encuentra desagregada en cueros de toro y novillo. Cada una de las mismas se encuentra a su vez desagregada a comienzos del siglo XVIII a tenor de la dimensión de cada unidad (largo por ancho) en varas, y a partir de mediados

del mismo siglo a tenor del peso en libras castellanas. De un total de 604 cueros vacunos obtenidos en una vaquería practicada en la Banda Oriental se obtuvieron a fines del siglo XVIII 247 cueros de 40 libras o el 41%, 169 de 35 libras o el 28%, 94 de 30 libras o el 16%, y 94 de menos de 30 libras o el 16% (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.6, Exp.120).

Para prolongar la línea que ilustra la tendencia de este fenómeno particular, debemos adoptar entonces como supuesto las proporciones mencionadas, aunque estén apoyadas en una fuente que atañe a una sola parte de la región rioplatense. En efecto, extrapolando para el resto de la estadística anual de cueros exportados la distribución de cueros por escala de peso hechos en una corambre específica de un año en particular, estaremos en condiciones de justipreciar el valor verdadero de las exportaciones de cueros hasta hoy conocidas. La Tabla ilustra estos mismos valores.

¹³ Hilferding, 1985, 164.

¹⁴ Ignoramos si este embrionario mercado a término era implementado como seguro o cobertura contra las oscilaciones del precio del cuero.

¹⁵ AGN, Sección Tribunales, Protocolos, Registro 5, 1772, fs.96, 112v., 109v., 152v., 166v., y 180.

¹⁶ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 97, Exp. 2521, fs. 87.

¹⁷ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. T-6, Exp. 5.

¹⁸ "...respecto de que el crítico de la estación del tiempo no permite perder minuto bueno para pesar y embarcar en dichas urcas que resultaría en grande perjuicio de la Real Hacienda pesarlos en el segundo o tercer día de haber llovido por la mucha humedad que en el invierno conserva este género como en el día se vé pues después de tres días buenos de Pamperos no he permitido se pesen hoy porqué aún tiene mas de 10% los cueros de humedad de lo que ha llovido" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 28, Exp. 696)

¹⁹ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-11, Exp. 8, fs. 46.

²⁰ Gelman, 1983, 114-115; y AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. T-6, Exp. 5.

²¹ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 26, Exp. 653, fs. 10; Tribunales, Leg. T-6, Exp. 5, y Garavaglia, 1977, 93.

²² Gelman, 1983, 114-115.

²³ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. T-6, Exp. 5.

²⁴ Dos Santos, 1972, 146.

²⁵ Kalmanovitz, 1983, 74.

²⁶ Sala de Tourón, et. al., 1967, 156.

²⁷ Archivo General de la Nación (AGN), Sala IX, Hacienda, Leg.4, Exp. 61, fs. 329.

²⁸ Según Coni (1930) el Real Asiento de Inglaterra declaraba como gasto el salario de un vaquero, el cual desjarretaba a razón de \$50 (400 reales) cada mil toros, o 2/5 de real cada cuero.

²⁹ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 73, Exp. 1945, fs.2; y Tribunales, Leg.261, Exp.5, fs.7.

³⁰ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 61, fs.329.

³¹ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 61, fs.329.

³² Porto, 1943, 207-15; y Pérez Colman, 1937, III, 79-81.

³³ Assuncao, 1978, 392.

³⁴ AGN, Sala IX, División Colonia, Tribunales, Leg.261, Exp.6, fs.36.

³⁵ AGN, Sala IX, División Colonia, Tribunales, Leg.261, Exp.6, fs.36.

³⁶ Ibidem.

³⁷ Assuncao, 1978, 392.

³⁸ Memoria de los Virreyes del Río de la Plata, (Buenos Aires,1945), pp.112-113, citado por Barrios Pinto, 1967, 71.

³⁹ Idem.

⁴⁰ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. M-13, Exp. 7, fs.16.

⁴¹ Respecto a los jornales pagados por cada cuero ver AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 6, Exp. 120. En las satisfacciones dadas al Ramo de las Temporalidades, por cargos suspendidos a las cuentas que tenía rendidas Don Pedro Díaz de Vivar, éste declara en 1803 a nombre de María Antonia de Achucarro, viuda de Melchor de Viana, Administrador que fué de dicho Ramo, que: "Es del cargo de todo hacendado entregar al Baquero dos medias lunas para que desgarrate el animal: asimismo se le administra dos hojas de espadón con las que forman igual número de chusas para que lo acodillen y le den muerte: consiguientemente se le pasan uno o dos peones destinados de caballerizos para el cuidado de las cabalgaduras de los baqueros que estos traen suyas propias, y mudan alternativamente pues no cualquiera sirve a ese efecto, y es urgente esté diestra y enseñada a él, por ser contingente y peligrosa esta operación: conseguida la acción de desgarradores y muerto el animal, envían los peones a sacar la piel de él, administrándoseles los cuchillos necesarios, siendo de la obligación de este individuo el estaquearla y figurarla. Luego entra el individuo o individuos de idoneidad que se titulan Barraqueros, al recojo y reconocimiento de las pieles, si están bien acondicionadas y enjutas, y de recibo, y estándolo se le abona al peón, haciéndole conducir de cuenta del dueño de la faena a la barraca del depósito, donde también los barraqueros aprensan las pieles y acondicionan. Todo lo expuesto es indispensable y urgente, y de práctica, y para dichas operaciones el gasto de yerba mate y tabaco en rama; y si no véase los documentos referidos de fs. 476 y 477, que son los contratos" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 44, Exp. 1159, fs.22).

⁴² En las recogidas de ganado o rodeos prevalecía también una primitiva división del trabajo, según que se marcara, apartara, castrara, señalara, curara, o simplemente revisara o contara. El caballo para trabajar en rodeo también debía ser adiestrado en enlazar, echar al medio, y pechar. Cada paisano llevaba su remuda pues el continuo correr a toda rienda, pararse, tornear, pechar, aguantar cimbrones de lazo, cansaban mucho al animal. Término medio, cada yeguarizo aguantaba dos o tres horas según

fuera la edad de los vacunos a trabajar, el estado de gordura, y la consistencia del suelo. Tengamos en cuenta, que como bien lo explica Terrera (1970), apartar un ternero era una cosa, y apartar novillos gordos otra; y que el cansancio de los caballos aumentara o disminuirá según la hacienda y el mismo terreno. A animales gordos y jóvenes, mayores corridas; a hacienda flaca y vieja, menor esfuerzo. Lo propio ocurre con el terreno: si esta blando será más pesado y si seco, menor esfuerzo para el caballo que trabaja (Terrera, 1970, 342).

⁴³ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 4, Exp. 61, fs. 329; Leg. 29, exp. 747, fs. 17; Leg. 42, Exp. 1075.

⁴⁴ Si tenemos en cuenta que por cada cuero producido que el acopiador vende a 12 reales, tuvo que desembolsar 8 1/2 reales en concepto de costos variables y 1 1/2 reales en concepto de costos fijos, habrá entonces obtenido un plusvalor del orden de los dos reales. De aquí entonces que si quisiéramos medir la tasa de explotación o proporción del valor generado por el trabajo que es apropiada por el acopiador debería de medirse la relación entre el plusvalor y el capital variable. Pero, cuando las calificaciones laborales son heterogéneas, las tasas de explotación son desiguales. Estas habrían de medirse entonces dividiendo el plusvalor generado con el capital variable desembolsado correspondiente a cada categoría laboral incorporada en el producto final.

⁴⁵ El flete de los cueros lo fija Azara en 1801 en cuatro reales, y Concolorcorvo en seis reales desde Córdoba, desde Santa Tecla costaba cinco reales, desde las puntas del Tacuarí costaba 2 1/2 reales, descendiendo a medida que las distancias se acortaban (Sala de Touron, et. al., 1967, pp. 71 y 62-63). De aquí que, el costo del flete estaba en relación directa con la distancia entre el lugar de producción del cuero y el punto de salida. Donde por la distancia extrema, el costo del flete se devoraba las eventuales ganancias, como era el caso del Tucumán o Cuyo, el cuero se lo procesaba en curtiembres, como materia prima para la fabricación de suelas y cordobanes. El flete fluvial a través de lanchones desde Paysandú o Arroyo de la China hasta Buenos Aires, alcanzando promedio entre real y real y medio por cuero (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 41, Exp. 1038, fs. 2.) y el flete marítimo de Buenos Aires a Cádiz, fluctuaba desde cuatro reales plata por cuero de 35 libras en tiempo de paz, hasta veinte reales plata en tiempos de guerra (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 26, Exp. 653, fs. 10.).

El recargo del flete en las carretas y luego el de una navegación larga eran inconvenientes muy grandes que no podían remediarse dado el bajo valor relativo del grano. El alto costo del flete para los que sembraban en tierras realengas, alejadas de los centros urbanos, hacía que muchos labradores prefirieran afrontar el pago de arrendamientos en tierras próximas a los centros poblados, antes que migrar a la frontera. El pago del arrendamiento rural estaba expuesto también en ese entonces al mecanismo de la renta diferencial. Este mecanismo, en lugar de funcionar con el precio de venta del cuero, operaba a través del precio del arrendamiento. El costo del arrendamiento de la parcela más próxima regulaba los arrendamientos y por consiguiente la rentabilidad neta de todas las otras parcelas de los alrededores. El arrendatario de la parcela más próxima consideraba que podía obtener un beneficio equivalente, pagando un arrendamiento mayor que el que pagaban los arrendatarios de parcelas más alejadas de Buenos Aires. Estos últimos se veían pronto obligados a pagar similares arrendamientos, aunque no estuvieren en condiciones de hacerlo por el alto costo del flete, y aún cuando al continuar subiendo los arrendamientos les privara de todo su beneficio. Algunas parcelas muy alejadas se abandonaban por completo, y otras, al no suministrar renta, y sí un corto beneficio, únicamente podían ser explotadas por sus propietarios. Ya en 1635 Diego de Roxas Briones, quien también adquiriera una regiduría, arrendó una chacra en el pago de Monte Grande (actual San Isidro) de manos de Domingo Griveo, el tutor de los hijos de Isidro Cebrián, por el término de cinco años (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v.21, fs. 401). La extensión del contrato de arrendamiento

afectaba también el nivel de las inversiones. Cuanto más largo era el contrato, mayor era la oportunidad de evitar un incremento en el pago del arrendamiento, posibilidad ésta que podía revertir en cierta clase de inversión. El chacarero que logró arrendar una chacra por el período más extenso fué Diego Freire en 1636. Freire arrendó a Domingo Santos una chacra en Monte Grande en \$10 anuales por el término de diez años (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v.22, fs. 477). También en este mismo período se registró una intensa especulación en tierras de "pan llevar", al extremo de incrementarse su renta más del 100% en menos de una década. Lamentablemente los archivos notariales guardan muy pocos ejemplares de estos contratos. La mayoría de estos contratos se registraban en la Alcaldía de Hermandad (Justicia de Paz). Por ejemplo, en 1630 una chacra fué arrendada en \$20 anuales por el término de cuatro años (AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, v. 16, fs. 252). Diez años mas tarde, en 1640, Isidro Cebrián de los Cobos arrendó una chacra mas chica en Monte Grande a Juan de Pintos en \$50 por el término de un año. Supuestamente, aquellos terratenientes que no eran capaces de operar sus chacras por sí mismos elegían arrendarlas o darlas en aparcería antes que venderlas. Pero estos arrendatarios tampoco solían ser los productores directos pues, por lo general, se trataba de comerciantes que a los efectos de la producción agrícola contrataban mano de obra asalariada. Por ejemplo, Diego de Roxas Briones, el arrendatario citado, no trabajaba su tierra con su propia fuerza de trabajo familiar. En cambio, Roxas trabajó su chacra empleando entre 1635 y 1638 seis trabajadores indígenas (Saguier, 1986, Tabla 3). No obstante esta aparente relación social capitalista Roxas Briones fracasó en volverse un auténtico arrendatario capitalista. Este fracaso era debido a la imposibilidad de disminuir la renta fundiaria y en super-explotar el trabajo indígena. Más aún, cuando los precios del trigo y la harina cayeron debido a la quiebra de relaciones con Portugal y sus colonias, las ganancias también cayeron. Como la tasa de ganancia media disminuyó drásticamente los arrendatarios no pudieron pagar ni la renta ni los salarios de los indígenas. Consecuentemente, los terratenientes debieron comenzar a trabajar las tierras por sí mismos. (Acerca de las razones del fracaso de una típica clase arrendataria en el Buenos Aires colonial, ver Manso, et. al., 1983, 33).

⁴⁶ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg.4, Exp. 61, fs. 329.

⁴⁷ En su correspondencia con el Virrey Loreto del 12-IX-1781, Juan Angel Lazcano asegura que en la faena que se hacía de ganados misioneros en la Banda Oriental "...pasaban de mil hombres los que empleaba en hacer faenas de cueros" (Pereda, 1938, 188-218, citado por Pivel Devoto, 1957).

⁴⁸ Garavaglia, 1983, 84.

⁴⁹ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 23, Exp. 555, fs.55.

⁵⁰ *Ibíd*em,

⁵¹ *Ibíd*em,

⁵² AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-5, Exp. 9, fs. 50v.

⁵³ Levene, 1962, 328.

⁵⁴ Coni, 1930.

⁵⁵ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 38, Exp. 973, fs. 5.

⁵⁶ Pivel Devoto, 1952,1957, 30; Brito Stéfano, 1953, 331, 339, 356, 358-59 y 365; y Sala de Tourón, et. al., 1968, capítulo IV.

⁵⁷ Hijo de Francisco Pacheco y Ceballos y de Joaquina Martín Camacho; hijastro de Antonio Fernández de Bobadilla; marido de Dionisia Obes; con cuñado del miembro de la primer Corte de Justicia Julián Álvarez, de Nicolás Herrera, del Comandante Bernardo Bonavía, de Juan A. Gelly, de José Ellauri, y del Sargento Mayor Luis Perichón; y suegro del Diputado Benito Chain Troitiño (Goldaracena, 1976, 184 y 195; y Fernández de Burzaco, V, 104).

⁵⁸ AGN, División Colonia, Sala IX, Criminales, Leg.44, Exp.11.

⁵⁹ Gomensoro, 1950, 398-432; y Marilúz Urquijo, 1952, 53-93.

⁶⁰ AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.110, Exp.2817.

⁶¹ Pivel Devoto, 1952,1957, 31.

⁶² AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 64, Exp. 1730.

TOMO XIII

CAPITULO 4

La Crisis Agraria. La Economía de Trueque del Litoral Rioplatense.

El error de quienes han incursionado en la temática sobre el medio rural colonial paraguayo ha sido no tomar en cuenta la región litoraleña (Misiones, Paraguay, Corrientes, Santa Fé, Entre Ríos, y la Banda Oriental) en su conjunto. Ella estaba constituida por economías agrícolas de plantación en crisis crónica y por polos o enclaves estacionales de producción de bienes para la exportación (yerba, tabaco, cueros, etc.). Los pueblos de indios de Misiones aseguraban --parafraseando a Assadourian-- el proceso de reproducción de la energía campesina destinada a ser empleada estacionalmente en yerbales y vaquerías.¹

Las economías de enclave, como fué el caso de los beneficios de yerba en el Paraguay y las corambres o vaquerías (auténticas factorías) de la Banda Oriental, estaban sistemáticamente asociadas en lo que respecta a la mano de obra insumida, con una oferta y una demanda estacionales, una incipiente división técnica del trabajo, y una remuneración a destajo o por piezas; y en lo que respecta a la comercialización de su producto, con un mercado oligopsónico a término. En un comienzo, la importancia de estas economías de enclave estaba en relación directa con la cantidad de indígenas que primero los Padres Jesuitas y luego los Corregidores, Administradores, Cabildos de Indios, y Subdelegados de las ex-Misiones Jesuíticas o Administración de Temporalidades estaban dispuestos a permitir circular desde las mismas Misiones a los yerbales silvestres del norte Paraguayo y a las corambres de las rinconadas del Litoral y la Banda Oriental.² Cabe señalar entonces que, tal como Assadourian lo destacara para el mundo andino, los actores más activos en la movilización de la energía campesina hacia la producción mercantil (beneficio de yerbales y corambres), en las antiguas Misiones Jesuíticas, fueron los Corregidores, más luego llamados Subdelegados y Administradores.³

Pero las diferentes economías agrícola-ganaderas que se complementaban entre sí en la región litoraleña requerían permanentemente de ajustes que paliaran las alteraciones climáticas, políticas y sociales. Estos ajustes se practicaban en los intercambios comerciales mutuos mediante las tres monedas verdaderas que constantemente se registraban, la moneda metálica, las especies monetizadas y el circulante escriturario. Pero para Spooner (1972), sólo la moneda de cuenta, y por implicación los diferentes tipos de instrumentos de crédito, tenían la necesaria unidad y continuidad (homogeneidad), sin duda con motivo de su neutral relación con las otras tres monedas mencionadas. Pero por debajo de las oscilaciones, la moneda metálica restaba siendo la fuerza más estable.⁴ La velocidad de rotación del circulante variaba entonces según la naturaleza de la moneda. La moneda metálica tenía un recorrido y

una duración diferentes del de las especies monetizadas y el circulante escriturario.

En consecuencia, no todos los frutos de la tierra producidos en provincias apartadas, como era el caso del tabaco en el Paraguay, alcanzaban los mayores precios en puertos de salida como Buenos Aires. En muchos casos la demanda era mayor, y por ende, su precio, en regiones o ciudades que no eran, precisamente, puertos de salida. Tal era el caso, por ejemplo, con el lienzo de algodón, los ponchos cordobeses, el aguardiente riojano y catamarqueño, el azúcar, la cera y la coca. Se vió en 1800

"...que por la escasa cosecha que ha habido en la Provincia del Paraguay de algodón y azúcar se ha vendido en la ciudad de la Asunción el lienzo a precio igual y aún mayor que el que se ha vendido en esta capital (Buenos Aires) sucediendo casi lo mismo con la azúcar blanca, y ya se ve que no sería buena conducta hacer venir aquí aquellos renglones cuando en un lugar más inmediato a los Pueblos tenía igual valor y menos gastos en la conducción".⁵

Como consecuencia del alto precio de los paños, en tiempos en que privaba una escasez causada por las crisis del comercio exterior, los administradores de las comunidades indígenas del litoral rioplatense suministraban a los indios, cantidades de algodón en rama al fiado "...para el entretenimiento de las tareas [hilado y tejido] de las mujeres".⁶

También era el caso en el Paraguay, del ganado mayor criado en Corrientes. En el juicio ejecutivo que se iniciara contra Joseph de Martín Gonsález en 1788, Miguel Rodríguez entró a beneficiar los efectos embargados

"...a cambio de toros, yeguas, caballos, y mulas, que es el tráfico general y negocio que se hace en el referido destino [Corrientes], con el objeto de pasar dichas especies a la Provincia del Paraguay donde vendidas producen más de un 200%".⁷

Si bien era regular en Paraguay la tardanza y morosidad en los tratos, también era, según Eufasio Boyzo --procurador apoderado del comerciante porteño Manuel Antonio Warnes, en su litigio con José Herze y Taboada acontecido en 1765--

"...constante la ganancia y utilidad que proporciona a los comerciantes, pues dan a los efectos que llevan desta ciudad [Corrientes], una estimación que pasa de un 200% y muchas veces 300%, sobre el principal de su compra, principalmente si los fían a los troperos y fabricantes de la yerba".⁸

Las oscilaciones en la velocidad de rotación del circulante.

Con respecto a las cosas vendidas al fiado y en especie, por lo general costaban mucho más que las vendidas al contado.⁹ Esto ocurría por cuanto la competencia entre los varios tipos de moneda (moneda metálica, especies monetizadas y circulante escriturario) era algo usual; la abundancia o superabundancia de uno de ellos modificaba las estructuras de la actividad económica. Pero las oscilaciones en la velocidad de rotación del circulante deben ser calculadas también ponderando tanto la relevancia de los términos crediticios (plazos y condiciones de pago) como la de las cesiones de crédito. La explotación a que se veían expuestos los productores Paraguayos mediante estos instrumentos crediticios le generaban al capital comercial ganancias extraordinarias que alcanzaban a más del 200%. Estas altas ganancias obedecían a que como hemos dicho las cosas vendidas al fiado valían mucho más que las vendidas al contado.¹⁰

Oscilaciones en la oferta y demanda de dinero.

Es sabido que el valor de los diversos tipos de moneda, pese a su equivalencia general, sufría de oscilaciones en su oferta y demanda y en su velocidad de rotación que provocaban fluctuaciones en los premios o primas con que unas monedas se canjeaban por otras. De ahí que, el lugar geográfico elegido para cancelar los compromisos adquiridos incidía en el valor del tipo de moneda utilizado. Cuando la paga era hecha en el Alto Perú por lo general era en moneda columnaria o doble, si en Chile en doblones de oro, si en Tucumán o Córdoba en moneda corriente o sencilla, y si en el Paraguay o Corrientes en especie monetizada (yerba, tabaco, algodón). Premios en la oferta de plata por oro, de moneda sencilla por moneda dura o doble, de especie monetizada por moneda metálica, y de circulante escriturario por especie monetizada y/o circulante metálico, oscilaban según el lugar elegido para la transacción.

En aquellas regiones donde se padecía de penuria de metálico (Corrientes y Paraguay), el pago en especie de los tributos fiscales que debían abonar los indios se hallaba fundado en una copiosa legislación colonial.¹¹ En virtud de ella, cuando obligados a cancelar sus deudas, los indios, y por extensión los deudores en general, pagaban mediante un equivalente particular (especie monetizada o moneda de la tierra) que no era aceptado, la especie monetizada era evaluada por una junta de tasadores, elegida judicial o extra-judicialmente. Los precios fijados por dichos tasadores a la especie monetizada debían corresponder a las exigencias del mercado interno y representaban generalmente los precios oligopsónicos con que el capital comercial explotaba a las clases productivas. Como podemos observar, esta explotación era doble. Por un lado, fijaba los precios de venta de la mercadería importada y la tasa de interés por el riesgo y la mora. Por el otro, fijaba también los precios de los frutos de la tierra adquiridos en el interior.

Desvalorización de las especies monetizadas.

Con la creciente penuria de metálico, provocada por la crisis minera del siglo XVII, la moneda metálica se valorizó y las especies monetizadas entraron a desvalorizarse. Originariamente, a la moneda de la tierra Felipe II le fijó por Real Cédula de Octubre de 1618 un valor en pesos huecos, equivalentes a seis reales de plata, diferenciándose en consecuencia del acuñado en dos reales.¹² Cada peso hueco, o seis reales de plata, se componía o bien de 6 1/4 libras [un cuarto de arroba] de algodón, o de 6 1/4 libras de tabaco, o de 12 1/1 libras [media arroba] de yerba.¹³ Cada arroba [25 libras] de tabaco y algodón estaba regulada entónces a cuatro pesos huecos, equivalentes a tres pesos corrientes de plata o 24 reales, y cada arroba de yerba estaba regulada a dos pesos huecos, equivalentes a 12 reales de plata.¹⁴

La paridad entre el peso hueco y el metálico.

Para unos años más tarde, el de 1621, Garavaglia (1983) descubre que la moneda de la tierra se desvalorizaba aún más, alcanzando una paridad de uno a tres. Para un período aún más posterior, ocurrido en 1642, y con motivo de la crisis comercial provocada por la expulsión de los Portugueses de los puertos españoles de América, la paridad entre el peso hueco y el metálico se vuelve aún más desigual.¹⁵ La variación de estimación del peso hueco en frutos del siglo XVII, a los de los frutos del siglo XVIII fué tan notable

"...que se ha reducido a una tercia parte de los seis reales de plata en que lo gradúa la ley, pues

comunmente no se aprecia en más que en dos reales,..e igual valor se le reputa en la Tesorería principal y en los juzgados de provincia".¹⁶

De esta reducción del valor del peso hueco los principales afectados fueron la Real Hacienda y la Iglesia Católica. Como los deudores eran libres de satisfacer las costas judiciales, los derechos reales y los aranceles eclesiásticos en cualquier especie monetizada sin que pudiera obligárseles a pagar en las especies de mayor o mediana estimación

"...de aquí es que pagándose en las especies de ínfima estimación se causó a los jueces y escribanos...un perjuicio que alcanzó a las dos tercias partes de la cuota pues el peso no ha excedido del valor de dos reales de plata que es la tercia parte de los seis reales de la Ley".¹⁷

Pagándose los aranceles y derechos incluso con gallinas también se obtenían jugosas diferencias. Puesto que los dos reales en que se tasaba una gallina, que era la cuarta parte de un peso hueco, componían medio real, al comprarse comúnmente las gallinas a un real de plata, deducían los deudores "...que pagando con ellas los derechos al respecto de dos reales el peso hueco lograrían la ventaja de un 100% menos de lo que realmente valen".¹⁸

Pero cuando en Corrientes las cosechas de algodón fracasaban, los derechos reales y eclesiásticos y las deudas para con los comerciantes porteños debían ser pagados en yerba y tabaco procedente del Paraguay y las Misiones. Justamente, más de una docena de los grandes hacendados correntinos representaban en 1722 que si se les prohibía el llevar sus vacas a vender al Paraguay, por más que optaran por vender otros efectos "...no hallarían quien se los comprase por ser de mejor calidad y tenerlos de cosecha el Juez Eclesiástico".¹⁹ A mas no poder se debían valer entónces los Correntinos

"...de lo que produce su trabajo en recogidas y pasajes de ganado, este si no lo permuta y reduce a lienzo y otros efectos del Paraguay, ¿como podrá mantenerse con la decencia correspondiente a su estado, remitir las partes que tocan al Ilmo. Obispo, mesa capitular, y Real Caja ni proveer la Iglesia de lo necesario para el Culto divino ni como adquirirán forma para con sus limosnas mantener las Religiones de San Francisco y Nuestra Señora de la Merced, ni los religiosos cobrar su pie de altar dellos si se les prohíbe el comerciar con sus haciendas?".²⁰

Provisión de bastimentos a los estancieros.

Los mercaderes se obligaban a suministrar a los estancieros y plantadores de algodón bastimentos, yerba, lienzo de algodón, herramientas y otros insumos.²¹ Eventualmente, tomaban a su cargo todo el pasivo de la actividad ganadera: pago de jornales, de transporte, y de flete en los plantíos. Quienes en Corrientes, por parentesco y medios económicos tenían la posibilidad de trasladarse a Buenos Aires para avituallarse de cuanto necesitaban para mantener las estancias se endeudaban en sumas considerables al proveerse directamente de los comerciantes que llegaban de España. La Tabla U-I enumera una lista de 124 vecinos correntinos que a lo largo del siglo XVIII concurrieron a Buenos Aires para proveerse de los insumos necesarios para operar sus unidades productivas y practicar repartos de mercancías en los Pueblos de Indios.²² Cruzando el listado de esta Tabla con el valioso Apéndice II que elaboró Maeder (1981), descubrimos que 45 de dichos vecinos comerciantes, o el 36%, fueron o se volvieron ganaderos, estancieros, criadores o hacendados. Algunos actuaron en la carrera mercantil luego de haber acumulado un capital en tierras y haciendas. Siete de los 45 comerciantes listados en la Tabla mencionada, o el 15%, se volvieron comerciantes de larga distancia después de haber operado con hacienda en pie.²³ Una mayoría de los mismos, es decir 37 comerciantes

sobre los 45 mencionados, o el 85%, adquirieron el status de hacendados luego de haber activado en el comercio. Sebastián de Casajús,²⁴ quien contrajo en Buenos Aires entre 1744 y 1769 una decena de operaciones por valor de \$15.138,²⁵ llegó a poseer extensas propiedades rurales en Saladas para la época de la Revolución de los Comuneros (1764). Justo García de Zúñiga,²⁶ yerno de José de Acosta y López Lisperguer,²⁷ quien contrajo entre 1770 y 1778 media docena de operaciones por valor de \$13.463, operó con hacienda en pie recién en 1777. Algunos otros comerciantes, se vincularon con la industria del transporte fluvial. Ignacio Belando, quien contrajo en 1773 y 1783 un par de operaciones por valor de \$3.021, devino luego propietario de barcos de la carrera del Paraná.

La velocidad de rotación del circulante.

Como entre las regiones que padecían penuria de metálico, como lo fueron Paraguay, Misiones y Corrientes, existieron diferencias estacionales en la producción de las especies monetizadas -- alimentadas asimismo por factores extra-económicos tales como exceso de lluvias, sequías y plagas de langosta o gusano, y prohibiciones gubernamentales-- el intercambio entre las mismas y la velocidad de rotación de su circulante se vió también profundamente afectado.²⁸ Es Garavaglia (1983) quien menciona, para el caso de regiones que sufrían una penuria crónica de metálico, que la velocidad de rotación del circulante sufría el impacto estacional propio de la producción misma de moneda de la tierra.²⁹ La poca plata que entraba al Paraguay era inmediatamente canjeada por yerba o tabaco, vicios de los cuales nadie podía desprenderse y sobre los cuales recaía una demanda inelástica, al extremo de que antes de privarse de los mismos "...primero tolerarán sus habitantes la falta de pan, carne, y vestuario".³⁰ Las diferencias en el intercambio entre regiones distintas obedecían al hecho de que las regiones que vivían dedicadas a la elaboración de yerba, algodón y tabaco, como el Paraguay y las Misiones, carecían de vacas, cueros, miel de caña o azúcar, y las regiones que producían estos últimos productos, como Corrientes, solían estar escasos de yerba y tabaco.³¹ El Cabildo de Corrientes alegaba en 1722 que lo que Corrientes producía para la conservación de sus habitantes eran vacas, carretas, miel de caña, cueros de ante y maíz. Por el contrario, el Paraguay y las Misiones, excepto las vacas, cosechaba y fabricaba "...estos [mismos] efectos en tanta manera que ha llegado el caso de que estos vecinos [Paraguayos] excepto el maíz y cueros de ante compren de aquellos [Correntinos] todo lo demás", pero que sólo con las vacas los Correntinos podían conseguir la yerba y el tabaco.³²

De no fracasar la cosecha de algodón, cuando en Asunción estaba la vara de lienzo --como en 1716-- a un peso, en Corrientes se vendía a cuatro reales, "...por cuiá razón no se trae [del Paraguay] sino la yerba".³³ Y por el contrario, fracasando las cosechas, por las epidemias y fatalidad de los tiempos, el Paraguay se surtía de algodón desde Corrientes "...que se ha vendido a cinco y siete pesos arroba, cuando antes su precio fijo hera, el de un peso o doce reales quando mucho".³⁴ De aquí que cuanto hacendado había en Corrientes en el siglo XVIII participaba de las arrias colectivas de ganado al Paraguay, de las cuales ni siquiera la Iglesia secular estaba exenta. El Cura Rector de la Catedral de Corrientes, Dr. Marcos Rodríguez de Figueroa, cuando fué al Paraguay en 1716, confesaba haberse visto precisado a reducirlo todo a yerba

"...por tener ésta más cuenta en ésta [Corrientes], y perderse en aquella [especie (lienzo de algodón)] la mitad del valor pues vale un peso cada vara de lienzo, y en ésta [Corrientes] apenas se reduce a cuatro reales".³⁵

También el Maestro Ignacio Ruiloba, Cura y Vicario de Corrientes, fué denunciado en 1736 por numerosos testigos de haber "...echo distintas vaquerías y embiádoles al Paraguay a venderlas por yerba y que las porciones que della a remitido proceden de ésta", sin el consiguiente pago de sisas y alcabalas.³⁶ Tan frecuentes fueron estas vaquerías y arreos, que en 1750 el Gobernador José de

Andonaegui se vió precisado a prohibir la saca de ganado de Corrientes.³⁷ Maeder (1981) atribuye la penuria de ganado en Corrientes no sólo a las ventas al Paraguay, sino también a las sequías y depredaciones de los indios del Chaco, y de los indios Charrúas y Guaraníes fugitivos de las Misiones.³⁸ Pero no siempre resultaba más rentable a Corrientes vender vacas.

Diferencias estacionales entre regiones.

En tiempos en que en Paraguay fracasaba la cosecha de algodón, por epidemias o la fatalidad de los tiempos, como fué el caso del año 1803, los paraguayos se surtían del algodón de Corrientes, cuyo precio se llegó a quintuplicar, vendiéndose a \$5 y hasta \$7 cada arroba, con lo que a los correntinos les resultaba en dichas coyunturas mucho más rentable vender algodón que vacas.³⁹

Asimismo, existieron diferencias estacionales entre las regiones que producían yerba y las que producían tabaco, que afectaban también su mutuo intercambio. Las regiones dedicadas a la elaboración de yerba solían carecer de tabaco, y viceversa. En un litigio ocurrido en Asunción en 1789, un testigo interrogado certifica que el tabaco colorado traído en la piragua de José Coene y el cosechado en la estancia de Juan José Gonsález

"...lo han permutado los capataces por la especie de yerba, dando cada arroba de tabaco por ocho de yerba, siendo lo corriente dar una de tabaco por cuatro de yerba, o a lo sumo, 5 arrobas y 8 libras".⁴⁰

Uno de los capataces implicado responde más adelante, que ha vendido de 14 a 15 arrobas de tabaco por yerba, al precio de 7, 8, 10, y 12 pesos huecos la arroba de tabaco, donde el tabaco vendido a \$8,5 correspondía a 8 libras de yerba, y el vendido a \$10,6 correspondía a 18 libras de yerba, "...valiendo cada una de ellas 12 reales huecos, que se reputan por 3 reales de plata".⁴¹ También existieron diferencias entre regiones tabacaleras propiamente dichas. Las zonas dedicadas a la elaboración de tabaco de pito, de escasa aptitud para conservarse en el tiempo, como lo era la región de Villa Rica, carecían de tabaco de hoja, de mayor capacidad para dicho propósito, ubicadas en los alrededores de Asunción, y viceversa.⁴² El tabaco de pito carecía de aptitud para conservarse por falta de goma "...pues la misma humedad, que se necesita para el enmanejo, lo pudre ordinariamente, de suerte que muy poco tabaco de la mencionada clase produce aquel temperamento de calidad conservable".⁴³ Por el contrario, la clase de tabaco llamado de hoja, al componerse de las primeras hojas que produce la planta en su mayor vigor, al atraerse "...toda la escasa goma que produce aquel territorio es de calidad y conservación regular y hermoso a la vista".⁴⁴

La introducción de moneda metálica.

Las desigualdades regionales se vieron alteradas con la introducción de moneda metálica. Este proceso de monetización tuvo principio, a juzgar por el texto de la Visita de 1802, con la residencia de las Partidas de la Expedición para la Demarcación de los Límites con Portugal, ocurrida en la década de 1750 (repetida en 1790),⁴⁵ incrementándose luego con el establecimiento de la Factoría de Tabacos, verificado en 1779, y con la fundación de los Fuertes de Frontera (Villa Real de Concepción), y de las fábricas de cables y amarras.⁴⁶ Aparentemente, el proceso de monetización metálica se vió reforzado con ciertas medidas limitacionistas en el cultivo de tabaco. Por providencia del Virrey Marqués de Loreto, la siembra y cosecha anual de tabaco colorado se limitó a la suma máxima de 9000 arrobas.⁴⁷ En efecto, Martín José de Aramburu y Juan José González, Contadores de las Reales Cajas, manifiestan en Asunción en 1793 que no estaba en su ánimo obligar a los contribuyentes a que paguen los derechos en plata pues

"...sería gravosa en un país como éste en que casi al mismo tiempo de introducirse el uso de la moneda se han escaseado los medios de su adquisición con la supresión del tabaco negro, y limitación del colorado por lo que nos parece justo quedase al arbitrio de los contribuyentes el pagarlos en plata o en frutos del país según su justa estimación actual".⁴⁸

El almacenamiento de las especies monetizadas.

Pero no solo la producción de las especies monetizadas sufría de oscilaciones que afectaban su intercambio y velocidad de rotación, sino que también su almacenamiento provocaba las consiguientes mermas. Si bien las especies monetizadas, al igual que las monedas metálicas, eran homogéneamente divisibles o fraccionables, las primeras carecían de las virtudes de la durabilidad y alto peso específico. En efecto, diferentes especies que se envasan y almacenan por más de un año tienen de merma porcentajes distintos. El tabaco tiene de merma el tercio por ciento, el algodón el ocho por ciento, el azúcar el quince por ciento, y el lienzo de algodón cuatro varas por ciento si es doblado, y cinco varas por ciento si es sencillo. La evaporación o merma de tabaco difiere también según la calidad del mismo. En un mismo mes, semana, o día puede haber diferencias en la merma de dos libras de tabaco,

"...pues no transpira lo mismo el tabaco malo, y desecado, que el húmedo y resinoso, y así se ve cada año muy diferente merma, por que ésta depende del más o menos tiempo que habra tenido de almacén, de la maior o menor calor del año, de la maior o menor humedad del aire, proveniente de las más o menos aguas del año, cuías circunstancias son sumamente varias en esta ciudad".⁴⁹

Igualmente si se ponen a prueba dos libras de tabaco, uno húmedo y resinoso, y otro malo y resecado "...habría en un mismo mes, o día notable diferencia de merma entre los dos, porque también depende la evaporación de la constitución actual y habitual de cada cuerpo".⁵⁰

La yerba ensacada y pesada en los percheles o en los almacenes del pueblo, al poco tiempo de haberse conducido, es también motivo para la variación de peso. Aunque en un principio hubiera sido disecada con la mayor delicadeza, siempre conserva la yerba alguna humedad,

"...que es la que le mantiene la virtud y el espíritu que la continuación del tiempo le disipa, quedando en este caso desvirtuada, sin sustancia y con menos peso del que tuvo cuando estuvo en su fuerza".⁵¹

Cobrándose la yerba en la playa y recogiendo dentro de la casa que la cobra

"...tiene seis por ciento de merma, y estando dentro de la casa que la tiene recibida un año o seis meses a lo menos por ensacar tiene de mermas otros cinco por ciento de cesto y hoja".⁵²

Para ensacar la yerba, el cuero del saco se remojaba, conservándose su humedad mucho tiempo, por lo cual si con ella se romaneaba es evidente que pesaba más que después de haberse secado. Los sacos de yerba sufrían además en su peso la estacionalidad misma del propio cuero, por ser de una materia porosa, el cual acrecienta o disminuye su peso según la humedad o sequedad reinante, "...atribuyéndose a este motivo el aumento de peso, y otras veces mermas, que se nota en la yerba que se recibe en estos almacenes".⁵³ Finalmente, la variación de peso de los sacos de yerba puede ser atribuída a las mismas romanas,

"...porque lo gastado de los ejes con el uso, el inconsiderado manejo del pilón arrastrándolo por la balanza y perdiendo su asiento, algún golpe, y otras causas quedan para el desarreglo de estas piezas,...y careciendo los pueblos de Misiones de inteligentes [maestros de herreros] que reparen estos defectos, no extraño que se adviertan variaciones en los pesos de mas o de menos".⁵⁴

La monetización de los frutos de la tierra.

La monetización de los frutos de la tierra se lograba no sólo mediante la imposición realenga de un precio de monopolio al tabaco o a la yerba, sino también mediante el control de su calidad. Cuando a fines del siglo XVIII fué introducido por el mercader Tomás Antonio Romero en el mercado porteño el gusto del tabaco negro torcido del Brasil, desplazando del consumo al tabaco negro del Paraguay, las autoridades del Estanco se vieron en la necesidad de idear un método fraudulento para dar salida al acopio de tabaco Paraguay. ⁵⁵ En efecto, cuando las existencias de tabaco Paraguay sobreabundaban, para que su salida se lograra en forma rápida y lucrativa se proyectó sigilosamente su mezcla con el tabaco del Brasil en la proporción de tres partes por una a favor de este último. ⁵⁶ Para proporcionar entónces salida al tabaco negro del Paraguay camuflado con el del Brasil se alzó el precio de este último de \$25 la arroba a \$37 1/2

"...con el doble objeto de que el aficionado se retrajese en algún modo de comprarle y prefiriese a beneficio de la mayor comodidad los cigarrillos, en cuyo consumo recogía la Renta a más de la ventaja de la elaboración la utilidad de reducir a dinero un genero inútil por sí sólo".⁵⁷

En conclusión, así como hemos evaluado la importancia que tuvo el alto grado de endeudamiento de los hacendados correntinos también hemos analizado los efectos de arrastre: en Asunción, una lucha facciosa entre la élite mercantil de origen peninsular partidaria del estanco de la yerba y el tabaco, y una élite productora criolla partidaria de la libertad de comercio; en Corrientes, una crisis en la producción de ganado;⁵⁸ y en la Banda Oriental, un boom en la producción de cueros,⁵⁹ seguido de una generalizada depredación pecuaria, denominada desarreglo de los campos, que sin duda contribuyeron a generar las condiciones objetivas para desencadenar un proceso revolucionario.

NOTAS

¹ Assadourian, 1983, 285.

² Barrios Pintos, 1983, I, 60-62; 1989, I, 71-86; y Morquio Blanco, 1990, 29-37 y 47-52.

³ Assadourian, 1983, 289.

⁴ Spooner, 1972, 74.

⁵ AGN, Sala IX, Leg. 98, Exp. 2558.

⁶ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 100, Exp. 2612; Leg. 97, Exp. 2539, fs. 1-5.

⁷ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 7, Exp. 1, fs. 67v.

⁸ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. V-4, Exp. 2, fs. 106.

⁹ "...a la verdad que cuando no se califique por excesivo el precio de cinco reales y medio por cada vara de ropa en que estimó Juan Francisco Alvarez Campana la que mutuó a Garamendi, no se puede negar que éste fué el precio supremo de aquella especie, que por lo regular se ha estimado aún por menos de cuatro reales y que sin duda se consideró legítimo por que en el concepto de los comerciantes se juzga comunmente que las cosas vendidas al fiado valen mas que vendidas al dinero de contado" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. A-10, Exp. 5, fs. 26v.)

¹⁰ Entre los factores determinantes de la velocidad de rotación del circulante se suele mencionar: a) el estado de desarrollo del sistema financiero y crediticio y su grado de utilización; b) el grado de separación entre el atesoramiento y el ahorro, entre el ahorro y la inversión, y entre la inversión y el consumo; c) el sistema de pagos vigente, y d) las expectativas respecto a futuros ingresos y precios.

¹¹ "...La oposición se funda en las Leyes 7, título 24, libro 4, y en la Ley 7, título 17, libro 6 de las Recopiladas de Indias que gradúan al peso en frutos por seis reales plata: en la Real Cédula dada en Villaviciosa a 24-XII-1758: en la Real Provisión de Su Alteza dada en la Plata en 14-X-1755: en la sentencia pronunciada por este Gobierno en 14-XI-1782: en el pleito seguido por el Procurador Síndico desta ciudad, y los Escribanos della, y últimamente en la Real Provisión expedida por la Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires a instancia de Don Pedro Hurtado de Mendoza en 18-II-1794" (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp.7).

¹² Burzio, 1958, 122.

¹³ Cada peso hueco se componía también de una fanega de maíz, o de cuatro almudes de frijoles o porotos, o de una vara de lienzo, o de tres libras de garabata (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7).

¹⁴ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7.

¹⁵ Garavaglia, 1983, 393.

¹⁶ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7.

¹⁷ Idem.

¹⁸ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7, fs. 33v.

¹⁹ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. L-2, Exp. 3.

²⁰ Idem.

²¹ ver las Relaciones entre precios de tres productos básicos: yerba mate de palos, res vacuna y lienzo en Tablas X-1A y X-1B (Carbonell, 1992, 230-232).

²² El endeudamiento coactivo o reparto forzoso y el adelanto fiado de géneros a los que van a los verbales es explicado por Garavaglia, 1983, 376-377.

²³ José Luis de Acosta, quien entre 1786 y 1789 opera con ganado, contrae en 1793 y 1795 un par de

operaciones por valor de \$2.471; Domingo Arizaga, quien en 1786 vende animales en pié, en 1792 contrae en Buenos Aires una obligación mercantil por valor de \$1.486. Angel Escobar, quien entre 1785 y 1793 opera con hacienda en 1800 contrae una obligación con comerciantes porteños por valor de \$2.019. Miguel Gerónimo Gramajo, quien entre 1788 y 1791 trafica con ganados, en 1795 contrae una obligación mercantil por valor de \$7.738. José Pablo Insaurralde, quien sufriera el embargo de sus tierras durante la Revolución de los Comuneros (1766), contrae una obligación en 1768 por valor de \$6.837. Felipe Ignacio Iturrino, quien entre 1785 y 1791 opera con hacienda, en 1787 contrae una obligación por valor de \$3.216. Ignacio Rolón, quien en 1782 opera con ganados, en 1791 contrae una obligación por valor de \$1.405.

²⁴ Era hijo de Pedro Bautista de Casajús y de Ursula Fernández, hermano de Bernardo y Gregorio de Casajús, y casado dos veces, una con Micaela Carvallo y Maciel y la otra con Margarita Pessoa y Figueroa.

²⁵ AGN, Protocolos, Reg.2, 1744, fs.473; Reg.3, 1746, fs.418v.; Reg.5, 1752, fs.68v. y 58v.; Reg.1, 1752, fs.92v.; Reg.4, 1752, fs.71v.; Reg.6, 1767, fs.348v.; y Reg.2, 1769, fs. 58, 53v., y 167.

²⁶ Hijo de Alonso Mateo García de Zúñiga y de Juana de Lisola y Escobar, y marido de María del Carmen Acosta (Fernández de Burzaco, III, 153).

²⁷ Yerno del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio, concuñado de Nicolás Patrón y de Ziprián de Lagraña, y suegro de León Martínez de Ybarra y Acosta, de José Justo García de Zúñiga, y de Fernando Gramajo y Argañaráz.

²⁸ "No ha llegado a mi noticia que algún mercader hubiese traydo a esta ciudad no digo mil pesos, ni quinientos, ni ciento a venderlos por efectos de la tierra, ni habrá quien diga lo contrario, que la plata que corre, no es otra, que la que ganan los dependientes del estanco y la poca que los peones de los Barcos del Paraguay traen de regreso de Río arriba, y la venden a las mujeres pobres, por faxas, sinchones, ataderas, y maletas, y que caudal es este, que apenas los que le alcanzan tendrán que llevar al Estanco tabaco, quedandose la mayor parte de la gente con la misma necesidad sufriendo la falta del vicio, el que en la gente ordinaria es puro vicio, pues teniéndolo en la boca se pasan el día sin que les haga falta la comida, como sucede lo mismo a los Indios Peruanos con la Coca" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 18, Exp. 422).

²⁹ Garavaglia, 1983, 393.

³⁰ Idem.

³¹ Idem, fs. 35v.

³² AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. L-2, Exp. 3, fs. 17.

³³ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-4, Exp. 5, fs. 8.

³⁴ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.230, Exp.2, fs.6.

³⁵ Idem, fs. 4.

³⁶ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. R-8, Exp. 8, fs. 46v.

³⁷ Maeder, 1981, 223.

³⁸ Maeder, 1981, 222.

³⁹ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 130, Exp. 3263, fs. 5v.

⁴⁰ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 56, Exp. 1428, fs. 83v.

⁴¹ Idem, fs. 87v. En otras oportunidades "...lo que podía conseguir por \$2 al cambio de yerba y algodón, no se lo daban a \$4 por tabaco" (Arias Divito, 1976, 4)

⁴² Mientras la arroba de tabaco de hoja valía a razón de 14 reales cada una, cada arroba de tabaco de pito valía 10 reales (Arias Divito, 1978, 180).

⁴³ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 67, Exp. 1791.

⁴⁴ Idem. En cuanto la planta de tabaco se halla bastante crecida, y antes de que sus hojas tengan 2 cm. de longitud, es preciso descogollarla o desbotonarla, para dar mayor alimento posible a las hojas, haciendo que a ellas refluya la savia que se dirigía a las flores. De esta manera, las hojas que se dejan, que generalmente varían de 8 a 16, han de pesar más que las 20 o 24 menos desarrolladas que produciría la planta si no se hubiese descogollado. Esta operación debe repetirse cada ocho o quince días, esto es, de dos a cinco veces hasta el momento de la recolección, y esta operación exige de 4 a 8 jornales por hectárea (Diccionario Enciclopédico Hispanoamericano).

⁴⁵ De acuerdo con la información obtenida de los Resúmenes Generales de los caudales de los Ramos de la Real Hacienda, el Ramo de la Divisoria de Límites recaudó durante los 18 años que transcurrieron entre 1749 y 1767 la suma de \$3.641.261; y gastó entre 1794 y 1802 la suma de \$287.449.

⁴⁶ AGN, División Colonia, Expedientes-Hacienda, 1758-1806, Sala IX, 10-1-2, fs. 6v.; Cooney, 1979, 105-126; y Garavaglia, 1987, 246.

⁴⁷ Idem.

⁴⁸ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 176, Exp. 7.

⁴⁹ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 63, Exp. 9, fs. 24.

⁵⁰ Idem.

⁵¹ AGN, División Colonia, Expedientes, 1784-1810, Sala IX, 9-3-6, fs. 208v.

⁵² Idem.

⁵³ Idem, fs. 209.

⁵⁴ Idem, fs. 208.

⁵⁵ La inutilidad del tabaco negro del Paraguay obedecía a la escasez de goma reinante en ese suelo. El tabaco de pita de Villa Rica "es comunmente de mala calidad por falta de goma, y por lo mismo se

inutiliza y no se conserva; pues la misma humedad, que se necesita para el enmanejo, lo pudre ordinariamente, de suerte que muy poco tabaco de la mencionada clase produce aquel temperamento de calidad conservable. Por el contrario, la clase de tabaco llamado de hoja, "que se compone de las primeras que produce la planta en su mayor vigor, y se atraen comunmente toda la escasa goma que produce aquel territorio, es de calidad y conservación regular y hermoso a la vista" (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 67, Exp. 1791).

⁵⁶ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 68, Exp. 1819.

⁵⁷ Idem.

⁵⁸ Maeder, 1981, capítulo VI.

⁵⁹ Saguier, 1991.

TOMO XIII

CAPITULO 5

El mercado inmobiliario rural y su incidencia en la estructura social Rioplatense (siglo XVIII).*

* una versión anterior de este trabajo fué presentada en los paneles de Discusión La Historia Rural, Hoy, auspiciados por el Centro de Estudios Histórico Rurales, celebrados en la Facultad de Humanidades, de la Universidad Nacional de La Plata, el viernes 11 de Junio de 1993; (publicado en 1993 en forma de libro, con el título Mercado inmobiliario y estructura social. El Río de la Plata en el siglo XVIII, por el Centro Editor de América Latina [Buenos Aires: Colección Los Fundamentos de la Ciencia del Hombre, n.108], 187 pags.);

Con respecto a la movilidad social en la América Latina colonial, la tradición historiográfica (García, 1900; Ingenieros, 1918; y Bagú, 1952) había señalado repetidamente la estabilidad asfixiante de su estructura social. Sin embargo, admitida la inevitable movilidad social existente en el comercio, algunos historiadores,¹ han insistido últimamente, refiriéndose a Chile, México y Perú pre-revolucionarios, que en el agro Latinoamericano se había dado también una intensa movilidad social.² Refiriéndose a la Francia revolucionaria, Béaur (1993) sostuvo que si bien la venta de los llamados bienes nacionales, equivalentes a nuestras Temporalidades, le dieron un impulso al mercado inmobiliario rural y tuvieron un impacto psicológico superior, el proceso de ruralización o de redistribución de la tierra no es comprensible, si no se tiene en cuenta el dinamismo del mercado inmobiliario tradicional.³ A diferencia de Lefebvre (1963) quien sostuvo que el despegue de la pequeña propiedad, la preservación de los bienes comunales y la defensa de los derechos de uso fueron frenos a la penetración del capitalismo en la campaña, Soboul (1977) ha sostenido la tesis de la vía campesina del desarrollo del capitalismo agrario, y últimamente Clère (1988), que el origen del capitalismo agrario no está reñido con la consolidación de la pequeña propiedad y el desarrollo de grupos de pequeños productores.⁴

Con respecto a los territorios que constituyeron el antiguo Virreinato del Río de la Plata,

mientras Sebill (1989), Presta (1989), Jackson (1988), Jackson y Gordillo (1993), Cornejo (1945), Mata de López (1989,1990), Yofre (1904), Maeder (1981), Calvo (1993) y Sala, Rodríguez y De la Torre (1967,1968), refiriéndose a La Paz, Tarija, Cochabamba, Salta, Córdoba, Corrientes, Santa Fé y la Banda Oriental respectivamente, certificaron el tipo de gran propiedad que en ellas existió; López Godoy (1973), Marquiegui (1990), Mayo (1991), Fradkin (1993), Mayo y Lastrubese (1993), Gelman (1992) y Garavaglia (1987,1993), refiriéndose a la región Bonaerense alejada de la frontera, nos informan que en ella existieron una gran cantidad de vecinos que eran terratenientes, pero pequeños propietarios. Para el caso de las estancias de vieja población y alejadas de la frontera, censadas en 1789, Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac (1989), reconocen que necesariamente deben haberse fragmentado, y para el caso de las estancias próximas a la frontera, le admiten cierta tendencia al aumento de sus dimensiones.⁵ En forma semejante, mientras García Belsunce (1988), Garavaglia (1987), Gelman (1989), y Halperín Donghi (1992) sostienen que en la campaña de Buenos Aires la agricultura fué más relevante que la ganadería, Ghío (1987), Amaral y Ghío (1990) y Gresores y Martínez Dougnac (1992) sostienen lo contrario.

En ese mismo sentido, la distribución de tierras rurales en las regiones de frontera de las pampas Argentinas había dado origen a un debate que subsiste hoy en día.⁶ A comienzos de siglo, Coni (1920,1927) enfatizó la influencia que la propiedad privada --y consecuentemente el mercado inmobiliario rural-- tuvo en la definición del patrón dominial de las tierras de cultivo, no así en las tierras de pastoreo.⁷ Más luego, Oddone (1930), González (1957), y últimamente Sábato (1989), remarcaron el rol que los factores políticos e institucionales pudieron haber tenido en la inicial distribución de la tierra pública, la misma que había dado lugar a la formación de la llamada por algunos burguesía criolla y por otros oligarquía Argentina. En ese sentido, para Pastore (1991) --a la luz de las teorías de Baysinger (1981)-- los mecanismos compulsivos en el comportamiento de los mercados le garantizaban al estado colonial mercantilista, la maximización de sus rentas y la disminución de sus costos de transacción.⁸ Siguiendo estos argumentos, la escasez de tierra rural habría requerido, aunque infructuosamente, de restricciones en su circulación, mediante el derecho de abolengo (tanteo y retracto),⁹ y el régimen capellánico,¹⁰ a los efectos de impedir el excesivo fraccionamiento de las unidades productivas. En este trabajo, trato de aprovechar ambas perspectivas, con el fin de estudiar la estructura social colonial, analizando el volumen y la intensidad del mercado y la subdivisión de tierras en la campaña de la provincia de Buenos Aires, durante el siglo XVIII.

En la perspectiva apuntada por Coni, la tradición historiográfica liberal advirtió que en el Buenos Aires del siglo XVIII, como consecuencia del desarrollo del mercado inmobiliario rural y la presencia del capital comercial, había nacido una contradicción entre terratenientes y comerciantes, que desestabilizaría la estructura social colonial. Esta contradicción habría sido asimismo heredera de la antigua contradicción estamental entre encomenderos y mercaderes.¹¹ Esta tesis no prosperó, por cuanto Balmori y Oppenheimer (1979) descubrieron que los primeros no habrían sido otra cosa que un grupo subalterno de los segundos. La presencia del mercader-estanciero, una suerte híbrida que conjugaba ambas realidades, es la que habría amortiguado dicha contradicción, sin por ello haber logrado la estabilidad de la estructura social.¹² La burguesía comercial local habría buscado en el grupo subalterno de los terratenientes, grandes o pequeños, apoyo contra la gran burguesía

consignataria del capital monopolista, aliada del capital minero, a fin de controlar una cuota mayor del comercio ultramarino.

Para el análisis diacrónico que aquí nos propusimos hemos procesado la información de diversos procesos judiciales, de padrones de época, de actas capitulares, y de centenares de cédulas catastrales, aún inéditas, reconstruirlas por mí a partir de miles de escrituras de compraventa, cesión, donación, dote y trueque, todas ellas depositadas en el fondo notarial existente en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires. También nos hemos servido de la información genealógica que nos proveen diversos tratados,¹³ así como de los testamentos protocolizados en Buenos Aires.¹⁴

El mercado inmobiliario rural de Buenos Aires

La inversión en bienes inmuebles rurales (chacras y estancias) en tiempos coloniales revelaría, a semejanza de la inversión en bienes inmuebles urbanos, la crónica inestabilidad de la estructura social existente, es decir lo frecuente de la movilidad social ascendente y descendente vigente en ese entonces y la amplitud geográfica de su mercado. Durante el siglo XVIII el mercado inmobiliario rural (MIR) del litoral del Río de la Plata se mantuvo con algunos altibajos en una tónica por demás modesta. Mientras en Corrientes, desde 1771 hasta 1809 se registraron en total sólo 222 operaciones notariales, sobre chacras y estancias,¹⁵ en Buenos Aires, en igual período se registraron más del triple (713 operaciones), y desde 1701 hasta la misma Revolución de 1810 se registraron un total de 1.684 operaciones notariales sobre chacras y estancias. El Gráfico C-I, fundado en la Tabla D-I, nos revela las fluctuaciones del MIR de Buenos Aires.¹⁶ En ocasión de la primera confiscación del Real Asiento de Inglaterra (1721), el número de operaciones inmobiliarias se incrementó de 10 en 1720, por valor de \$4.325, y correspondientes a 23.750 varas lineales, a 21 por valor de \$49.960 en 1721, correspondientes a 50 mil varas lineales. Y en ocasión de la participación de España en la Guerra de la Revolución Americana (1781) el valor de las operaciones se sextuplicaron de un total de 18 operaciones por valor de \$5.862 en 1780, correspondientes a 10 mil varas lineales, a 20 operaciones por valor de \$29.915 en 1781, correspondientes a 23.641 varas lineales. Pero a fines del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX el mercado creció de un total de 22 operaciones por valor de \$26.494, correspondientes a 16 mil varas lineales, en ocasión de iniciarse las Guerras de la Revolución Francesa (1790), a un total de 24 operaciones por valor de \$40.353 en 1802, correspondientes a 47.157 varas lineales; y de 9 operaciones por valor de \$6.795 en 1807 a un total de 23 operaciones por valor de \$144.554, en 1808.¹⁷

Amén del estudio del mercado inmobiliario rural es preciso también estudiar la rotación o cambio de dueño sufrida por cada predio en forma individual en un determinado período de tiempo. Borde y Góngora (1956) en su estudio del Valle de Puangue, en Chile, concluyeron que las 15 haciendas bajo la lupa de su investigación fueron vendidas en el período colonial unas 44 veces.¹⁸ Taylor (1972), fundado en la elaboración propia de un catastro rural del Valle de Oaxaca, en México, descubrió que las haciendas del siglo XVIII cambiaron de dueño un promedio de veces mayor que en Chile, cinco veces en lo que fué del siglo.¹⁹ Ramírez (1991) estableció que en Lambayeque, costa norte del Perú, el 62% de las haciendas habían sido adquiridas por compraventa y sólo el 22% por herencia. Y Brading (1973), en su estudio de León, también en México, descubrió

una rotación algo menor, pues alcanzó a sólo cuatro veces en un período mucho mayor, 1700-1860.²⁰ De ahí que Van Young (1983) concluya, a diferencia de Grosso (1992) en su estudio sobre Tepeaca, que el alto grado de inestabilidad dominial fuera más la regla que la excepción.²¹ En forma semejante a como concluyera Van Young, debido a un factor de sesgo estructural, uno podría permitirse entonces dudar de la representatividad de los análisis sincrónicos, tales como los practicados por Halperín Donghi (1975), Salvatore y Brown (1987), Gelman (1989), y Birocco (1992a).

Para lograr el ascenso social en el Río de la Plata se ensayaron entonces distintas estrategias. Aquellos que no deseaban seguir una carrera mercantil terminaban invirtiendo sus capitales en predios rurales agrícolas (chacras) o ganaderos (estancias). El pasaje de una categoría de comisionistas o habilitados del comercio o de arrendatarios del agro, a otra de dueños de chacra o estancia se sucedía de una forma ininterrumpida en el espacio colonial Rioplatense. Los futuros hacendados, primero acumulaban habilidad, ya sea en el comercio como mozos, mancebos, dependientes o habilitados, o en el agro como arrendatarios, para luego invertir sus ahorros en la adquisición de tierras.²² Personalmente participo de la posición de Ghío (1987), Amaral y Ghío (1990) y de Gresores y Martínez Dougnac (1992), que sostienen la preeminencia de la ganadería sobre la agricultura en la campaña bonaerense del siglo XVIII, pues los hacendados por lo general se rehusaban a pagar el diezmo de cuatropea. Este diezmo ofrecía mayores problemas para su cobro que el diezmo de granos, según las regiones, pues para recaudarlo era preciso parar rodeo, y además caer en tiempo oportuno ya que, habitualmente, los hacendados encontraban siempre alguna excusa en las lluvias, las sequías, las epidemias, los cardos, o las pariciones. El diezmero Juan Martín Dupon se presenta y dice en 1797 "...aber hallado un intolerable abuso en los hacendados, pues varios no me han querido pagar".²³ El juez Don José Fontesli

"...mandó al alférez Alcorta pusiera el diezmo en la estancia en el Arroyo Negro [Banda Oriental], éste no ha cumplido siendo que también es Juez Comisario, está bien lejos de dar buen ejemplo se mantiene obstinado en no pagar el diezmo a la Iglesia de Dios, Don Pablo Ribera...es un hacendado que obstinadamente hase insufribles detrimentos no sólo a mi sí a los demás diezmeros pues del año 96 no a pagado como es constante."²⁴

El noveno y medio de los diezmos perteneciente a los Hospitales también se veía afectado por la resistencia que ofrecían los hacendados al pago de dicho tributo. En el caso de Santa Fé, el Obispo Manuel Antonio de la Torre proveyó en una Visita un auto mandando

"...que desde aquel año en adelante luego que el Juez Hacedor percibiese esta parte de Diezmos la entregase al Cabildo, y éste la pusiese inmediatamente a intereses, en sujeto abonado, y que al año siguiente, los réditos de aquel principal con el producto del noveno y medio, se pusiesen asimismo a intereses, y así se siguiese sucesivamente, con el objeto de formar un fondo considerable, para la fundación del Hospital".²⁵

Dicha idea, "...aunque tan proporcionada, no tuvo efecto alguno en lo principal, así por la omisión del Juez Hacedor, como del Cabildo y Procurador, que en tantos años, no exigieron al cumplimiento del citado auto, perdiendo aquel ramo por esta razón una cantidad considerable".²⁶ Pero nombrados

como Procuradores Generales José Ignacio Uriarte primero, y Juan Crisóstomo Pérez después, se empezó al menos a indagar el monto de lo adeudado por los principales contribuyentes del Ramo, entre ellos el Teniente Gobernador de Santa Fé Melchor de Echagüe y Gaete,²⁷ dueño de estancias en la Costa del Añapiré, actual Entre Ríos, quien debía más de \$3.000 al Ramo.²⁸ Sin embargo, al ver los deudores la firme actitud de Pérez, "...y que no me podían contrastar, tuvieron poder para conseguir la revocación [del Auto], con lo que cesó la persecución [de los recaudadores] y quedaron [los deudores] como antes".²⁹ Si bien antes y después ha habido Procuradores, los nombran "...de los que les son parciales, o uno de los mismos deudores, como en el día, para de este modo entorpecer el asunto, y estar privando a los pobres del socorro en sus enfermedades".³⁰

Una prolongada transición entre la encomienda y la hacienda fué avizorada por diversos autores. En Jujuy, Rutledge (1987) y Madrazo (1990), refiriéndose al Marquesado de Tojo, y siguiendo las huellas de Burga (1976), alcanzaron a entrever una transición entre la encomienda y la hacienda.³¹ Las enormes invernadas de mulas practicadas en las haciendas del Totoral, ubicadas en la Quebrada de Humahuaca, sólo las podían emprender los grandes comerciantes y hacendados. Ello era así porque su extracción para las provincias del Perú

"...se hace imposible en no llevando plata sellada y géneros con que poder haviar los capataces y peones que las an de conducir y arrear y para pagar el derecho de la sisa en la Real Caxa de Jujuy",³²

porque para su conducción necesitaban "...de comprar otras mulas mansas que sirven de madrinas a las chúcaras para que no disparen, las cuales se compran a los vecinos de Salta y Jujuy con dinero y mercancías de contado",³³ y porque "...es necesario poner para el reparo soldados con boca de fuego porque los bárbaros no hagan hostilidades y roben la hacienda".³⁴

La Subasta de las Tierras Jeúíticas

También ensayaron los terratenientes su influencia en el poder político. Ya a mediados del siglo XVIII, un numeroso grupo de estancieros criollos se coaligó estrechamente con vecinos comerciantes, detrás del Comandante de la primera Expedición Demarcadora de Límites a las Misiones, Marqués de Valdelirios,³⁵ y del Gobernador de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán Francisco de Bucarelli y Ursúa.³⁶ Y cuando en 1767 la monarquía Borbónica expulsó a los Jesuitas de toda América, las Juntas Municipales de Temporalidades, instaladas en cada ciudad de provincia, y que contaban con representantes de los cabildos seculares y eclesiásticos, fueron las encargadas de subastar las valiosas tierras que aquellos poseyeron, vendiéndolas en grandes dimensiones a particulares estrechamente vinculados con las autoridades locales.³⁷ Sin embargo, algunas jurisdicciones se salvaron del atropello. En Tarija, cuando los Franciscanos suplicaron a la Corona que pusiese un Administrador en la estancia y demás tierras de la Misión de las Salinas y que a los Misioneros se les dejase la casa, Iglesia, y una huertecilla contigua, para que sólo se ocupasen de lo espiritual, corriendo el Administrador con lo temporal, el Fiscal de la Real Audiencia de Charcas Tomás Álvarez de Acevedo se negó respondiendo

"...que prosiguieran los Misioneros en el cuidado de lo temporal de la Misión pues de lo contrario sucedería lo que en otras Misiones, que fueron de Jesuitas, las que estaban perdidas, y asoladas por causa de los Administradores, y por la codicia de los Doctrineros".³⁸

Gran parte de las grandes unidades de producción rural, pertenecientes a la Compañía de Jesús, fueron subastadas al mejor postor. En Salta, una vez producida la expulsión, las tierras de la Compañía de Jesús fueron subastadas. El Comandante de Armas Coronel Antonio de Figueroa,³⁹ adquirió a las Temporalidades en 1786 la hacienda El Bañado, ubicada en el Valle de Lerma;⁴⁰ Pedro Castellanos Zerda,⁴¹ las estancias La Cámara, La Hoyada y Barraza;⁴² Agustín Erquicia la hacienda La Isla;⁴³ Francisco Manuel Costas,⁴⁴ en 1795 las estancias Despensa, Porongos y Mosquera;⁴⁵ y Mateo de Saravia y Jáuregui la estancia El Carmen en los confines con Santiago del Estero.⁴⁶ Y en Tucumán, gran parte de la élite capitular, cuya base económica fundamental era el comercio a larga distancia entre Buenos Aires y el Alto Perú, participó de los despojos de los esclavos y las tierras de los Jesuitas, próximas éstas a los centros urbanos.⁴⁷ En un principio, lo que estaba en juego era la extensión de los arrendamientos. En una larga misiva firmada por Vicente Escobar,⁴⁸ Francisco Javier Sánchez de la Madrid,⁴⁹ Francisco Texerina,⁵⁰ Gabriel Rubert,⁵¹ y Gerónimo Romano,⁵² le aclaran al Presidente de la Superior Junta Provincial de Temporalidades del Tucumán, a fines de 1771, que a excepción de la hacienda de Los Lules, que tiene dos paradas de molinos y curtiduría, y otros beneficios, como el de estar cercana a la ciudad, y la hacienda de Vipos, por tener una corta viña, y ser de pan llevar,

"...todas las demás haciendas son tierras sin beneficio, sólo Tafí, San Xavier, y Raco ocupan ganados, y sea en cualquiera de ellas es preciso que el arrendador entre haciendo costo en muchos menesteres precisos y urgentes, que no se los podrán reponer en un año, ni dos sino se les concede por más tiempo el arrendamiento".⁵³

Dos años después, en diciembre de 1773, Luis de Aguilar le adelantaba al nuevo Presidente de la Junta Provincial Fermín Ruiz Poyo,⁵⁴ el perjuicio que acarrearía a las haciendas "...la anticipada enajenación del ganado manso que había en el rincón", pues la destrucción de éste "...imposibilitaría el recojo del ganado alzado".⁵⁵ Un año más tarde, en 1774, habiéndose reducido los ingresos por arrendamientos se resolvió enajenar dichas tierras. En ese sentido vemos como Julián Ruiz de Huidobro,⁵⁶ quien entre 1767 y 1773 contrajo en Buenos Aires una decena de operaciones de fiado por valor de \$22.606,⁵⁷ adquiere en el Valle del Tafí, en 1774, la estancia "El Rincón" (6 leguas cuadradas); Juan Antonio Aráoz,⁵⁸ la estancia "Carapunco" (4 1/2 leguas cuadradas), en Monteros; Francisco Javier Sánchez de la Madrid, quien había concertado en 1773 en Buenos Aires una sola operación por valor de \$9.246,⁵⁹ adquiere el potrero "Río Blanco" (7 1/2 leguas cuadradas); y Juan García Cárdenas,⁶⁰ quien entre 1768 y 1774 contrajo en Buenos Aires ocho operaciones de fiado por valor de \$18.204,⁶¹ adquiere en 1774, entre Lules y Famaillá, el Potrero de San Jenuario y la suerte de Los Cardones de 1 1/2 legua cuadrada, uno de los tres desprendimientos del Potrero de Tafí.⁶² Asimismo, Juan López Ríos,⁶³ adquiere el Potrero de San Javier; José Silvestre de Ojeda,⁶⁴ el Potrero Raco, en Trancas; y Fermín de Paz,⁶⁵ los Potreros de Las Tipas y Angostura, también en Trancas.⁶⁶ En las declaraciones y diligencias reservadas que en 1780 hizo Francisco José Marcano y Arizmendi, un cura apóstata, también se denunció que las demás tierras de los Jesuitas "...dicen las repartieron de Limosna a los sobrinos de la mujer de Poyo, y del Vicario".⁶⁷ Tal fué la repartija que

Marcano exclamaba

"...el Alcalde Provincial, [Fermín] Poyo, [José Antonio] Molina, Juan García [Cárdenas], José Thames, Julián Ruiz [Huidobro], los Arauses, [José Antonio] Elguero, José Ojeda, Francisca Xaviera Ramírez [mujer de Salvador Díaz de la Peña], el Comendador de la Merced Fr. Policarpo, los Villafañes (menos Don Xavier, todos son de una [misma] casa, y también Don Pedro Antonio Araus".⁶⁸

Sin embargo, Rosenzvaig (1987), fundado en la riquísima información que brinda Schleh (1955), acerca de los orígenes del Departamento de Cruz Alta, nos informa que el proceso de fragmentación territorial, en que se inició el campo tucumano a fines del siglo XVIII, se va acentuando progresivamente hasta alcanzar en vísperas de la formación del ingenio moderno, en el último tercio del siglo XIX, un verdadero minifundio y un punto de inflexión.⁶⁹ También en Catamarca, a juzgar por la información que brinda Guzmán (1985), el Valle de San Fernando se vió pronunciadamente fragmentado. Pero si bien predominaba en ella la pequeña propiedad, la estancia "Guazán", se caracterizó por su gran extensión y por el mayorazgo que llevaba consigo, fuente de larguísimos pleitos.⁷⁰ Asimismo en La Rioja, Castilla y Sod (1990) y Castilla y Adams (1990), en unos estudios sobre el origen del albinismo en Aicuña, probaron la íntima conexión que se dió entre la consanguinidad y la distribución de la tierra.

También en Córdoba, la gran propiedad afectó gran parte de la gobernación-Intendencia. Yofre (1904) y Barrionuevo Imposti (1949) nos informan de la distribución de la tierra en Río Cuarto y Traslasierra, respectivamente. En aquellos pedanías donde los Jesuitas poseyeron grandes estancias, sus tierras fueron subastadas al mejor postor por las Temporalidades. Francisco Antonio Díaz adquirió de las Temporalidades la estancia de Santa Catalina,⁷¹ José Rodríguez la estancia de Alta Gracia,⁷² José Antonio Ortiz la estancia San Ignacio en Calamuchita,⁷³ Félix Correa la estancia de Jesús María,⁷⁴ y Francisco Pérez Salcedo,⁷⁵ y José de Isasa y Ayesta, la estancia de La Candelaria, en Cruz del Eje.⁷⁶ Las Temporalidades también afectaron las finanzas de la Universidad y especialmente las del Colegio de Monserrat.⁷⁷

No sólo las enormes extensiones de tierras de las Temporalidades fueron subastadas en grandes dimensiones entre los miembros de las élites próximas a los Cabildos de todas las ciudades, sino también aquellas otras tierras que siendo realengas se hallaban próximas a centros urbanos.⁷⁸ En Buenos Aires, por ejemplo, se comercializaron no solo las tierras de la banda occidental del Río de la Plata, sino gran parte de las tierras de la Banda Oriental. Sala, Rodríguez y De la Torre (1967) señalaron que una fuerza política importante la constituían en Montevideo los hacendados del litoral de origen bonaerense como Cerro Sáenz, Milá de la Roca, Azcuénaga, Escalada, etc.⁷⁹ En 1772, los apoderados de Santo Domingo Soriano, un pueblo de indios, protestaban porque el porteño Julián de Gregorio de Espinosa,⁸⁰ había establecido faenas de cueros en las zonas de salida de sus ganados y dificultaba los cortes de leña.⁸¹ Un año antes, en 1771, el Cabildo de Montevideo había hecho oposición a las denuncias de tierras del Registrero Francisco de Alzáybar, alegando que por pertenecer las mismas a su jurisdicción debían quedar reservadas a su vecindario.⁸² Y treinta años después, en 1802, el pueblo de las Víboras se debatía contra las pretensiones del terrateniente y

Administrador de la Real Renta de Correos Melchor de Albín,⁸³ los vecinos de San José contra los herederos de Miguel I. de la Quadra y Mateo Gallego; los de Cerro Largo contra la casa Viana-Achucarro; los de Porongos contra los Quadra-Durán; y los de la región entre el Yí y el Negro contra Feliciano Correa, etc.⁸⁴ Para el Paraguay, Aguirre (1948-51) relata la influencia de las grandes estancias en la colonización.⁸⁵ Como encomenderos, los vecinos de Asunción se habían repartido la mayor parte de las tierras cultivables. La región del Tebiquarí, Quyuquyó e Itauguá era del dominio de los Yegros y Ledesma, la de las Cordilleras de los Cabañas y Ampuero, la de Paraguarí y Carapeguá de los Bareiro, la de Pilar de Ñeembucú de los Rojas de Aranda, la de Misiones de los Rivarola y los Bogarín, la del Valle de Barsequillo de los Cañete y Domínguez, la del Río Tobatí y el Río Salado de los Larios Galván, la de Tapúa de los Casal y Sanabria y los León y Zárate, la de Concepción de los Espínola y Peña, y la de Ycuamandijú de los Lacoizqueta.⁸⁶ Aguirre destaca que en la estancia de Carandaipirí, probablemente ubicada en el Cerro de Aparipí,⁸⁷ la familia Recalde poseía "...Pacobal y Piñal, grandes cañaverales, huerta, buenas casas y oratorio, y aguadas permanentes, unas artificiales y otras naturales".⁸⁸ Para Corrientes, Maeder (1981,1992) nos provee la cantidad de ventas de chacras y estancias efectuadas entre 1771 y 1809.⁸⁹ Asimismo, nos ofrece la nómina de los beneficiarios de tierras realengas y el estudio de un caso.⁹⁰ En Curuzú Cuatiá, Francisco Benigno Martínez alegaba en 1799 en su reclamo por un sacerdote que oficiara misa, que

"...aunque allí existan muchas estancias, y crecido número de haciendas, los dueños habitan en la Ciudad, y algunos en esta Capilla [de San Roque], sin que en aquellas recidan otros que los capataces y peones, gente toda miserable, que no puede sufragar a la congrua de un sacerdote, ya por la citada indigencia; y ya por que las estancias se hallan dispersas por necesidad, hallándose por esto en distancia de 20 o más leguas sólo siete u ocho estancias de consideración".⁹¹

En la Villa de Gualeguaychú, su Cabildo querelló en 1784 al terrateniente Justo Estéban García de Zúñiga,⁹² quien poseyendo la estancia Campos Floridos, que iba desde el Gualeguay al Gualeguaychú, se resistía a parar los rodeos que pedían los vecinos.⁹³ Un año más tarde, en 1785, el mismo Cabildo de Gualeguaychú, liderado por Tomás de Rocamora,⁹⁴ se oponía a que una estancia, que se extendía hasta cerca de una legua de Gualeguaychú, fuera entregada al terrateniente Juan Carlos Wright, alegando para ello que el campo era realengo, y que las principales poblaciones de Entre Ríos estaban cercadas por terratenientes.⁹⁵ Asimismo, en Nogoyá, la corriente inmigratoria que afluyó desde la Ensenada hacia el este fué menos importante que la corriente del Norte, debido a los obstáculos que le pusieron a su poblamiento el hacendado Francisco J. Crespo,⁹⁶ y el Administrador de los Pueblos de Indios de Santa Fé José Teodoro Larramendi,⁹⁷ quienes habían logrado del Cabildo de dicha ciudad el reconocimiento de sus derechos a una gran extensión de tierras en esa región.⁹⁸

La Conexión Militar

Los propietarios de los grandes predios se caracterizaban por detentar en el siglo XVIII simultáneamente la Comandancia de los Fuertes próximos a sus propiedades.⁹⁹ En la zona de frontera con el Chaco Salteño, el Comandante del Fuerte de Nuestra Señora de Rosario de

Ledesma,¹⁰⁰ Diego José de Pueyrredón,¹⁰¹ era en 1802 "...dueño de los terrenos donde está el Fuerte principal de Ledesma", donde pone "...mulas a invernar, mantiene ganados y hace labranzas, principalmente para el cultivo y plantío de caña dulce, en lo cual ocupa la Tropa y en continuos enviados a Jujuy, de donde es vecino".¹⁰² A más de ello, tiene Pueyrredón "...a los dos costados vecinos, otras dos haciendas de cañaverales de su suegra,¹⁰³ proveídas de indios convertidos e inconversos, que facilita con su comando".¹⁰⁴ Más aún, Pueyrredón

"...tiene interés en el abasto de la carne, pero lo que es más escandaloso, es el tabaco que siembra públicamente con su suegra, sin licencia, hace muchos años, con lo cual abastece la tropa, y a los Indios, y vende a los abastecedores de aquella Frontera".¹⁰⁵

Asimismo, las tierras del Fuerte de San Fernando del Río del Valle,¹⁰⁶ eran poseídas por su Comandante Juan José Cornejo,¹⁰⁷ quien era dueño

"...no sólo de las tierras donde está el Fuerte de San Fernando, sino también de otras estancias en aquella Frontera del Río del Valle, de que se hizo dueño con poco dinero que dió a la Real Hacienda al amparo del Asesor de esta Intendencia, su suegro Dr. [José] Medeyros".¹⁰⁸

Recibía Cornejo en "...dichas tierras crecido número de mulas en invernada".¹⁰⁹ Con el servicio de los soldados, Presidarios e Indios infieles, Cornejo hacía "...mucho grangería, no sólo en dichas invernadas, sino también en sementeras, curtidurías de suelas, y fábricas de xabón".¹¹⁰ Fue precisamente en este lugar donde a fines del siglo XVIII, y muy probablemente provocada por las prácticas del Comandante Cornejo, se desencadenó una de las más sangrientas y prolongadas rebeliones indígenas. Por el contrario, cuando un Comandante de Armas perdía el mando de su guarnición por lo general también perdía la propiedad de sus estancias. En Tarija, en 1782, en los cargos que el Cabildo levantara contra el Comandante de Armas Luis Hurtado de Mendoza,¹¹¹ por su desempeño en la Expedición contra los indios Chiriguano, un testigo declaraba que

"...es cierto que por despojar al Sr. Comandante del empleo de Coronel y mando militar a experimentado las persecuciones que a padecido en años pasados de suerte que se ha quedado sin las estancias de los Toldos y Baritu que poseía antes y le remataron sus ganados y demás muebles, asta que lo an puesto en precisión de hacer dimisión de las casas que poseía por no poder contribuir al senso que cargan al Convento de San Agustín desta Villa".¹¹²

Si bien en la Banda Oriental también existió la pequeña propiedad,¹¹³ la mayor parte de su territorio se caracterizaba fundamentalmente por dar lugar a la cría extensiva y la recolección de ganado vacuno.¹¹⁴ Según Brito Stéfano (1953), cuanto "...mayor es la estancia más [ganado] coge; y mientras menos gente, y menos ganado manso hay en ella, más entra del cimarrón".¹¹⁵ Tan era así, que por la apropiación de este ganado orejano se libraban verdaderas guerras, entre las peonadas de diversos hacendados. Aún diez años después de producida la Revolución, en 1823, Juan Miguens, segundo marido de Rita Balderas, viuda de Juan Noario, libraba con Agustín Lastra y otros hacendados escaramuzas armadas por la propiedad de los ganados de la Bahía de Samborombón.¹¹⁶

La Cría del Ganado Mular

Por el contrario, en la provincia de Buenos Aires, las rinconadas que formaban las desembocaduras de los ríos Conchas, Luján, Areco, y Arrecifes, y el Arroyo del Medio, con el río Paraná, y las estancias que bordeaban el río Matanzas, se caracterizaron siempre por la cría de ganado mular.¹¹⁷ El debilitamiento de los lazos con la metrópoli española durante la guerra de Sucesión de España (1700-1713) obligó a los comerciantes-hacendados porteños a buscar un sustituto al comercio con mercadería importada. Si bien ya era tradicional durante el siglo XVII el comercio de mulas y hacienda en pie al Alto Perú, a comienzos del siglo XVIII creció un 26% respecto del período anterior.¹¹⁸ En efecto, según la Tabla D-II, los hacendados exportaron al Alto Perú 63.186 vacunos por valor de \$94.779 y 36.381 mulares por \$145.524. En 1714, al tiempo de sustanciarse el embargo de la sucesión de Don Miguel de Riglos, existían en sus cuatro estancias del llamado Rincón de Riglos, en la desembocadura del río Areco, un centenar y medio de burros hechores y miles de yeguas cimarronas.¹¹⁹ Francisco de Suero, Defensor judicial de los bienes de Miguel de Riglos, afirmaba en 1728, en su crítica a la administración de las tierras embargadas, llevada durante catorce años por Don Pedro de Saavedra, que "...no hubo en dichas estancias la aplicación y asistencias necesarias para tener sujetas las crías, retovar y amamantar burros y domar potros".¹²⁰ Con que no solo se siguió de lo dicho un gran menoscabo "...sino el no haberse aumentado dichas crías así de mulas como de yeguas y potros".¹²¹ A juicio de Suero, el aumento del ganado mular no se podía dar sin los burros hechores correspondientes, que "...si se han de retobar y amamantar aora es necesario passen mas de tres años para que sea provechosa esta disposición".¹²² Con que al entender de Suero era mejor

"...comprar hasta ciento de ellos [burros] que me dicen balen a seis pesos poco mas o menos solicitándolos dicho administrador de mano de persona que no lo engañe con burros que no sean apartados de manadas de cría con la esperanza de que en los años que habían de tardar en criarse otros de nuevo se reintegre este gasto del aumento que producirán de mulas".¹²³

No obstante la compra de burros, Suero aconsejaba que no se omitiera "...el amamantar y criar con todo cuidado en cada una de las cuatro estancias a lo menos 25 burros al año y domar todos los Potros y novillos que sea posible".¹²⁴ Y a comienzos de la década del 50 el Cabildo de Buenos Aires otorgaba a José Antonio Ortiz, a Santos Pérez, a Antonio Figueroa y a Francisco Pinto Villalobos, diversas concesiones para exportar gran cantidad de mulas a Córdoba, Salta y los dominios de Portugal.¹²⁵

El control por la distribución del agua de riego fué en algunas regiones el origen de la gran propiedad rural. En Cuyo, el Noroeste y el mundo andino en general, la gran propiedad se garantizaba mediante el control de la distribución del agua.¹²⁶ El caso más relevante de monopolización del agua que se conoce ocurrió en Catamarca y tuvo por protagonista al Pbro. Pedro Ignacio de Arce, quien sustraía las aguas al pueblo de indios de Choya.¹²⁷ En Mendoza, las tierras de las Temporalidades fueron arrendadas a numerosos vecinos miembros del Cabildo.¹²⁸ Pero posteriormente, algunas de dichas tierras fueron subastadas al mejor postor.¹²⁹ En Buenos Aires, en

el mismo sentido apuntado por Balmori, la Tabla D-III, que aquí producimos, nos ilustra la nómina de mercaderes estancieros que se dieron a lo largo del siglo XVIII, quienes se caracterizaban por la gran propiedad.

El régimen del derecho de abolengo.

Otras formas de garantizar la gran propiedad, que finalmente en Buenos Aires resultaron infructuosas, la ofrecían el régimen del derecho de abolengo, manifestado a través de las prácticas del tanteo y el retracto, y el régimen capellánico. Por medio del tanteo y del retracto, cuyos orígenes se remontan a la antigua Grecia, ya oportunamente tratadas por Weber, y que también se dieron en el mundo anglosajón,¹³⁰ el estamento patricio o nobiliario sustraía del mercado tierras, casas y solares.¹³¹ Este derecho, típicamente feudal, tuvo mayor predicamento en el interior del espacio colonial. En efecto, se practicó sobre una chacra en Montevideo, sobre los Potreros de Zapata y Chilcas y la estancia del Rodeo Grande, en Ambato, Catamarca; sobre la estancia la Pampa Grande en Salta; y sobre casas, solares y estancias en Córdoba.¹³² En Catamarca, el Pbro. Pedro Ignacio de Arze demandó a Domingo Carrizo, a su yerno Mauricio Rivero, y a Ramón Ramírez de Arellano, vecinos de Copacabana, la validación de la compra del Potrero de Zapata que hiciera a su prima Flora Carrizo y su consorte Domingo Núñez.¹³³ En Salta, Andrés José de Acosta, a nombre de Pedro Arias Rengel, alegó en su litigio --celebrado en 1806-- con Pedro Pablo Arias Velásquez, sobre el derecho de retracto a la estancia de la Pampa Grande, que se vendió en pública almoneda para el pago de deudas fiscales, que cuando son muchos los retrayentes en igual grado y privilegio y es imposible la comunal posesión porque produciría en vez de frutos discordias;

"...es claro que debe concederse a los que son hombres, a los que son hijos y en caso de preferencia *ceteris paribus*, no sería conforme a los objetos del derecho concederla a una sola hija de Francisco Borja Arias, y negarla a tres hijos juntos, concederla a una mujer y negarla a los varones, concederla a la menor y negarla a los mayores, concederla a la que ni aún conoce la finca apetecida por que la apetece su marido, y negarla a los que la han cultivado y trabajado desde sus primeros años".¹³⁴

Y el Dr. José Antonio Arias Hidalgo, en nombre de José Gabriel, Nepomuceno y Pedro Arias Rengel, hermanos legítimos e hijos de los finados Francisco Borja Arias Rengel y Petrona Castellanos, alegaba que Pedro Pablo Arias Velásquez

"...no es de la sangre ni descende del mismo tronco que nosotros, y por que cuando contase con el mismo origen, tenemos a nuestro favor cuantos apoyos se necesitan, para el logro de la preferencia que apetecemos pues somos varones, que constituímos la línea de agnación, preferente para las Leyes: estamos en quasi posesión y somos los mayores en edad con opción declarada en la materia".¹³⁵

El caso de retracto ocurrido en Montevideo, que iniciara Juan Martínez contra Nicolás Zamora, por la chacra que le vendiera Luis de Chávez, fué por el derecho de comunidad y/o vecindad y no por derecho de abolengo.¹³⁶

El régimen capellanico, con sus instituciones de la primogenitura, el grado, la línea sucesoria y el sexo, esgrimidas en los litigios por la sucesión de los Patronatos y los beneficios capellánicos, era otro mecanismo que favoreció la concentración de la propiedad rural. Bajando del Perú, de norte a sur, en el Cuzco, por el testamento que en 1760 otorgara Doña Juana de Oquendo y Enríquez, viuda consecutivamente del General Gaspar de Zedillo y de Manuel Vásquez Meléndez, consta que entre los numerosos legados que dejó gravados sobre el famoso obraje y haciendas de Pichuichuro,¹³⁷ ubicados en la Doctrina de Suriti, y sobre la Hacienda de Guascarpampa, del distrito de Limatambo, provincia de Abancay, se hallaban afincadas once capellanías por valor de \$46.000, cuyos patronos y capellanes detalla con extrema minuciosidad, y a falta de estos los lega en el Padre Rector del Colegio de la Compañía de Jesús.¹³⁸ En La Paz, Alto Perú, se siguió en 1780 un dilatado pleito, que llegó a la Real Audiencia de Lima, entre Marcelina de las Cuentas y Sayas y el Lic. Fernando Valverde de Contreras y Ampuero sobre la propiedad del Patronato de las memorias pías, que fundó en el siglo XVII el Deán de la Catedral de La Paz Don Pedro de las Cuentas y Valverde, tío abuelo de Marcelina.¹³⁹ El patronato se fundó, entre otras numerosas propiedades, sobre la Hacienda nombrada Sapan, cita en el Valle de Carabillo, donde se impusieron \$3.195 al 3%; y sobre otra Hacienda cita en la Villa de Pisco, de \$2.000, a favor de las buenas memorias de Dotes para remediar Doncellas, impuestas por el Alf. José Rodríguez Calero, y en nombre de Doña Lorenza de las Casas su mujer, que luego fuera de Juan Cabero.¹⁴⁰ El Patronato de dichas capellanías quedó en manos del Obispo de Popayán Don Basco de Valverde, con facultad de nombrar a quienes lo sucediesen, para lo cual nombró al Maestre de Campo y Caballero de Santiago Francisco de Balverde Contreras y Solórzano, y este a su vez nombró a sus cuatro hijos. Habiéndose extinguido la línea correspondiente a los dos primeros hijos José y Sebastián, pasó la sucesión a la línea que al momento del pleito se hizo primera, que era la de Francisca de Balverde y Contreras, quien tuvo por hijo mayor a Francisco de Balverde y Ampuero, quien casó en el Cuzco con María Teresa de Balverde y Costilla, padres del Lic. Fernando de Valverde y Ampuero.¹⁴¹ De resultados del pleito, el Tribunal de Lima declaró que el Patronato pertenecía al Lic. Fernando Valverde y mandó que a Doña Marcelina se le enterasen \$3.000 con descuento de lo que había percibido.¹⁴²

En Jujuy, Agustín Arismendi y sus herederos, litigaron contra Francisco Javier del Portal,¹⁴³ acerca de la capellanía fundada en 1699 por el Maestro Juan Rodríguez Viera,¹⁴⁴ sobre las tierras del Totoral.¹⁴⁵ Mientras Arismendi, con el patrocinio letrado del Dr. Mariano Pérez de Saravia, insistía que las tierras del Totoral nunca formaron una unidad con las de San Juan, que sí estaban gravadas por dicha capellanía, y que entre estas y las tierras de Amuzátegui promediaban las de los Salcedo Poblete, Portal aseguraba, defendido por los Dres. Juan José Castelli y Miguel Villegas, que

"...el territorio de la capellanía o Potrero del Pongo señalado por fundo empieza desde las juntas que forman el un cauce o brazo del río de Perico con el de Humaguaca hasta la unión del otro brazo de aquel con el Siancas, que es el territorio llamado de San Juan que fué dado de Merced a el Capitán Pedro Godoy a fs.103 quad.2o. que pasó a ser de Amuzátegui por el compromiso de fs.95. Pero de ninguna manera consta que entre la ubicación del dicho territorio, y el de las tierras del Totoral deva mediar la dada de merced a el Sr. Salcedo: por que siendo cierto que la merced echa a Godoy abraza el territorio de San Juan con expresión de que tuviese ocho leguas de extensión se reconoce por los articulados de fs.128 a 142 que

de las juntas de los ríos Humaguaca y Perico hasta las de ese con el de Siancas sobre que cae el Totoral, no hay tales ocho leguas de que se infiere que aquí no está comprendida la merced de Salcedo sino en la parte que viene del Serro de Zapla para dichas juntas primeras".¹⁴⁶

En Salta, en la fundación que impuso en 1769, por cláusula testamentaria, el albacea de Hernando Hervas, Pedro Díaz de Loria, sobre la estancia y potreros de la Alemania, litigaron entre sí el Pbro. Dr. José Gabriel de Hoyos, el Pbro. Mro. José Domingo de Hoyos, el Dr. Mariano Gordaliza y Hoyos, y Don Manuel Fernando Aramburú.¹⁴⁷ La fundación que el Mro. Juan José Arias Renjel impuso a favor de su medio hermano seminarista Pedro Arias Torino, sobre el Potrero y Estancias que llamaban de la Silleta e Incahuasi, que heredó de su padre el Cap. Tomás Arias Rengel,¹⁴⁸ fué litigada a comienzos del siglo XIX entre el R.P. Hermenegildo Arias Renjel y Don Mateo Fernández, como apoderado de su hijo el Cura de Rosario de Lerma, Pbro. Isidro Fernández.¹⁴⁹ En Tucumán, en la capellanía fundada en 1797 por Juan Bautista del Campo y Paz,¹⁵⁰ fincada sobre la estancia de la Reducción, el Promotor Fiscal Eclesiástico creía que el motivo de la prelación del Maestro Francisco Texerina, sobrino del fundador, al patronato de la misma, "...es haber estado más próximo a recibir los sacros ordenes o haberlos recibido".¹⁵¹ Por el contrario, el Dr. Pedro Ignacio Acuña,¹⁵² letrado de los herederos de Micaela del Campo, llamados por la escritura de fundación a ser los patronos de la misma, rebatía las razones del Promotor Fiscal aduciendo que esta prelación se habría dado "...cuando la capellanía que se disputa fuese sacerdotal, o el fundador exigiese en el llamado el presbiterado".¹⁵³ En La Rioja, Pomer (1985) halló en un Informe del Marqués de Sobremonte, que las numerosas familias de la Villa de Guandacol se vieron precisadas a emigrar o a servir de colonos de las tierras de un Brizuela y Doria, por cuanto las mismas eran indivisibles debido a un vínculo de mayorazgo.¹⁵⁴ En la gobernación de Córdoba, se registraron entre 1643 y 1884 un centenar de fundaciones, de las cuales 15 correspondieron a La Rioja, 5 a San Juan, 3 a Salta, 2 a Mendoza, 1 a Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy, respectivamente, y el resto a Córdoba.¹⁵⁵

Del centenar de fundaciones registradas en la Tabla D-IV, correspondientes a la gobernación de Córdoba del Tucumán, 12 fueron impuestas sobre estancias, 3 sobre haciendas, 1 sobre chacras, 1 sobre quintas y fincas respectivamente, y la inmensa mayoría sobre casas y solares urbanos. En Santiago del Estero, se disputó en 1782 entre los hijos del General Juan José de Paz e Ibáñez del Castrillo y de María Antonia Salvatierra,¹⁵⁶ albacea del tío político Dr. Juan Tomás López de Velazco, la Capellanía fundada sobre la estancia de Tenené.¹⁵⁷ Y en 1800, Juan Gregorio Rizo Patrón, en representación del Maestro Casimiro Agüero, su cuñado, le disputó al Protector de Naturales, Nicolás de Ojeda, representante del pueblo de indios de Alijilán, las tierras de una capellanía que poseía el Cura de Soconcho (jurisdicción de Santiago del Estero), Maestro Felipe Hernández, quien las hubo por herencia de sus antepasados, quienes a su vez la habían adquirido del encomendero de dichos indios, Claudio Medina.¹⁵⁸ En Catamarca, Pedro Lucas Herrera y Manuel Montero, herederos del Maestro Nicolás Herrera, dueño de la Hacienda del Portezuelo y fundador de la capellanía con que se hallaba gravada, y Andrés Aumada, censuario enfiteútico del Convento de Santo Domingo, litigaron en 1797 sobre los réditos adeudados procedentes de una capellanía de \$1.300 de principal y sobre la indivisibilidad de la hacienda.¹⁵⁹ En La Rioja, en 1739, el cura de San

Blas de los Sauces Manuel de Villafañe y Tejeda,¹⁶⁰ compra a los herederos de Juan Gregorio Bazán de Pedraza la hacienda de Anillaco, lugar del pueblo de indios Tinogastas, con el gravámen capellánico incluido.¹⁶¹ A mediados del siglo XVIII, el Pbro. Juan Ignacio Rodríguez,¹⁶² debió litigar con el Director de la Real Renta de Tabaco y Naipes de Córdoba Coronel Manuel de Castro,¹⁶³ por el patronato de la capellanía fundada por su bisabuela Gerónima Tineo de Peñaloza, viuda de Diego Gutiérrez Gallegos, sobre la hacienda llamada la Chacra Grande, en La Rioja.¹⁶⁴ Doña Gerónima llamaba para patronos de dicha capellanía "...a sus consanguíneos desde el primer grado hasta el último procediendo por todos grados y líneas hasta dar con el más ínfimo según la ley de sucesión".¹⁶⁵ Sólo una vez extinguida su estirpe, la fundadora concedía a los Obispos la facultad "...para que nombren Patronos ad libitum".¹⁶⁶ Según Rodríguez, la naturaleza de esta cláusula inhibía a Castro para ser Patrono de dicha capellanía "...por no ser consanguíneo de la fundadora".¹⁶⁷

En Córdoba propiamente dicha, el Alcalde Provincial Domingo Garay,¹⁶⁸ poseía por herencia paterna y materna, y por herencia de su suegra Tadea Echenique y Garay, Señora de la Capellanía de Copacabana, tres haciendas de campo, una de ellas llamada de Ansacate y otra San Clemente.¹⁶⁹ También tuvo un célebre litigio con su prima María Catalina de Tejeda, viuda de Luis de Aguirre y Dorado, acerca del derecho de propiedad de los Puestos de Minas, Quebrachos, y Chocaya, de la estancia de San José, que había heredado de su tío Pedro Garay, marido de Agueda Granados.¹⁷⁰ A su vez, su madre Petronila Molina Navarrete, era dueña de la estancia llamada Nono, la cual se disputó judicialmente entre sus herederos Domingo y Fernando Garay, José de Ariza, Francisco Armesto, y Fernando de Arce y Bustillos.¹⁷¹ Finalmente, las tierras de la Estancia Nono, y la de Guadalupe, con sus tres puestos denominados Minas, Chocaya y Quebrachos vinieron a quedar en propiedad de Domingo Garay.¹⁷² Con motivo de numerosos procesos que se le incoaron por numerosos crímenes cometidos contra la vida de diferentes personas se le embargaron los bienes, al extremo que su mujer, Isidora Zamudio, se vió obligada a pedir permiso para rifar su casa.¹⁷³ En Santa Fé, Juan Bautista Iguren impuso en 1808 una capellanía a favor de Pedro José Crespo, hacendado con grandes extensiones en la actual Entre Ríos.¹⁷⁴ En Buenos Aires, entre la clase agrícola-ganadera, se registró una docena de casos relevantes, destacándose Domingo de Acassuso, Gaspar de Bustamante, y María Verdún de Villaysán, en el pago de Monte Grande; Gerónimo de Avellaneda y Pablo y Antonio Barragán, en el pago de la Magdalena; los Alzáibar, en la Banda Oriental; Mariano Andrade, Jacinto Piñero y Juan de San Martín, en el pago de Arrecifes; Sebastián Delgado, en el pago de las Conchas; Gabriel de Alza y Juan Antonio Peña, en el pago de la Matanza; Teresa de Armaza y Arregui, viuda de Juan de Arozarena, en los pagos de Magdalena y Matanza; y Fermín de Pessoa, en el pago de Escobar. El hacendado Juan Ignacio de San Martín,¹⁷⁵ dueño de estancias en el pago de los Arrecifes, primero fundó una capellanía en 1750 a favor de su hijo el Pbro. Carlos San Martín y luego otras dos en 1757 a favor de su hermano Fr. Pedro San Martín. Isabel Gámiz de las Cuevas, viuda de Francisco Ruiz Gómez, fundó primero en 1753 y 1761 sendas capellanías a favor del alma de sus dos hermanas mujeres,¹⁷⁶ y luego en 1764 una capellanía a favor de su sobrino Juan Francisco Bolaños.¹⁷⁷ Con respecto a la capellanía fundada por Antonio Barragán, el Dr. Miguel Antonio Escudero y Cossio,¹⁷⁸ otorgó un poder en 1778 al comerciante y estanciero Felipe Arguibel para que se presentase ante el Tribunal Eclesiástico de Buenos Aires "...pidiendo que a mi nombre se les dé colación y canónica institución de la capellanía que fundó Antonio Barragán".¹⁷⁹ Este último había fundado la capellanía sobre una estancia ubicada en Luján,

que había sido de Juan Bautista Herrera de los Ríos y Lóyzaga.¹⁸⁰ Pablo José de Eseyza, un poderoso hacendado del litoral, dejó en 1809 como congrua sustentación de un capellán, la increíble suma de \$400 anuales, equivalente a un principal de cuatro capellanías, o lo que era lo mismo \$8.000,

"...para que mis hijos criados y otros dependientes como los vecinos que están en el distrito de mi estancia nombrada la Pura y Limpia Concepción de Jacinta, jurisdicción de la Villa de San Antonio de Gualeguay, logren del beneficio de oír misa los días festivos en el oratorio que he conseguido poner en dicha mi estancia".¹⁸¹

Asimismo, la imposición de censos y reconocimiento de censos contribuyeron a la indivisibilidad y a la alta rotación de la gran propiedad inmueble rural. En el caso de Buenos Aires, por cuanto la mayoría de los reconocimientos de censos celebrados fueron practicados simultáneamente con las compraventas o traspasos de dominio de los inmuebles, la cifra del total de estas operaciones no refleja el número real de las mismas. De estas últimas operaciones dobles o combinadas (compraventas y reconocimientos) hemos podido ubicar sólo unas 25 operaciones sobre bienes inmuebles rurales, los cuales se hallan incluidos en la Tabla D-V. Treinta y tres grandes hacendados y chacareros, productores de mulas para el Alto Perú, de cueros para Europa, y de granos para el mercado interno local, detallados en la Tabla D-V, formalizaron a lo largo del siglo XVIII 37 operaciones de censo, con instituciones eclesiásticas, por valor de \$42.480, sobre un total de 1.063 operaciones con instituciones de igual índole, por valor de \$1.094.332, es decir apenas el 4%. Entre los hacendados, los más asiduos usuarios del crédito eclesiástico fueron, según la Tabla D-V, Rafael Aguiar, dueño de una estancia en el pago de los Arroyos, quien contrajo en 1747 un censo por \$190; Felipe Arguibel y Juan Antonio Peña, del pago de la Matanza, quienes contrajeron censos en 1764 y 1770 por valor de \$700 y \$4.840 respectivamente; Bernardo Muñoz de la Rosa, Clemente López Osornio, Juan Noario y Pedro Nolasco Escribano, vecinos del pago de la Magdalena, quienes contrajeron censos en 1728, 1742, 1757, y 1795 por valor de \$500, \$400, \$2.100 y \$2.000 respectivamente; Manuel Pinazo, de los pagos de Luján y las Conchas, quien contrajo un censo en 1753 por valor de \$225; José Gutiérrez de Paz, Antonio Rodríguez y Mariano Andrade, del pago de Arrecifes, quienes reconocieron y contrajeron censos en 1723 y 1796, por valor de \$1.000, \$2.350 y \$400 respectivamente; y el Dr. Pedro García de Zúñiga, con extensísimas tierras en la Banda Oriental, quien contrajo un censo en 1787 por valor de \$3.500.

La pequeña propiedad rural

Pero la gran mayoría de los propietarios rurales Bonaerenses de tiempos coloniales, debido al bajo valor de la tierra, no podían gravar sus campos con censos y capellanías, y a diferencia de los que acabamos de reseñar, no se caracterizaban por la gran propiedad ni por su alta rotación. De todas maneras, para poblar tierras con ganados era preciso tener tierras propias. Este requisito se remontaría al menos a 1759, quince años antes de lo señalado por González (1957) como inicio de la Junta General de Hacendados.¹⁸² En un documento recientemente hallado, Silverio de Melo,¹⁸³ y Carlos Romero,¹⁸⁴ declaran en 1759, confidencialmente, que en marzo de dicho año compraron a José Seliz o Celis 200 varas de tierra de estancia en Luján, a dos reales cada vara, pero que dicho

instrumento de compra-venta obedeció a que

"...les mandaban salir del partido de Luján en donde están asentados por no tener tierras propias y para que no experimentasen perjuicio y extracción de sus haciendas en la mudanza que hiciesen dellas a otro territorio".¹⁸⁵

¿Quiénes podían mandarlos salir del partido sino una Junta de Hacendados fundada en un Bando semejante al de 1757?. Pero amén de las restricciones referidas a la propiedad y a su extensión mínima para ser considerado hacendado, con derecho a recoger hacienda realenga, los Lujanenses, en dicha época embarcados en un frustrado intento de autonomía regional, vieron limitado por las autoridades centrales el uso de los llamados bienes comunales.¹⁸⁶ En 1751 los vecinos de Luján y la Cañada de Escobar denunciaron que los Padres Belermos o Betlemitas les impedían cortar leña, paja y estacas en la costa del río Paraná.¹⁸⁷ Un año más tarde, los vecinos de Luján denuncian los perjuicios que se les origina al considerar tierras de pan llevar a las de la Cañada de Escobar.¹⁸⁸ Tres años después, en 1755, los vecinos de Luján se quejaron de que Fermín de Pesoa, un fuerte hacendado de la zona, no los dejara cortar madera en los montes del río Paraná.¹⁸⁹ Y seis años más tarde, en 1761, los vecinos del pago de la Costa de San Isidro se quejaban de las extorsiones a las que estaban siendo objeto, por el uso de sus canoas, por parte del Cabo de la Guardia de las Conchas José Robles.¹⁹⁰ Con más detalle aún, en un documento recientemente hallado, se destaca que entre los pobladores de pueblos de frontera, que gozaron de suertes de tierras, otorgadas en merced u obtenidas en moderada composición, había diferentes clases, aquellos

"...que nunca las beneficiaron, otros que lo verificaron por algún tiempo; otros que en ellos hicieron algunas obras y plantíos pero después lo abandonaron, o dejaron sin continuar su cultivo ni reparo de lo hecho, otros que la tienen sin cultivo alguno, otros que sólo se lo dan a una parte quedando sin él, el restante terreno, y otros que sólo sirve para darlo en arrendamiento o préstamos para hacer el uso que les acomode a quien lo recibe".¹⁹¹

Tampoco los propietarios rurales Bonaerenses de tiempos coloniales constituían una clase étnicamente homogénea. Había en el Río de la Plata, al igual que en el sur de los Estados Unidos, señalados por Schweninger (1989), propietarios grandes y pequeños; blancos, indios, mestizos y mulatos. Azcuy y Martínez Dougnac reconocen su existencia, aunque subestiman su relevancia.¹⁹² El pardo libre Lorenzo Juárez,¹⁹³ vendió en 1709 al Cap. Cristóbal Escandón 300 varas de chacra en el pago de la Matanza.¹⁹⁴ El pardo libre Antonio Márquez,¹⁹⁵ compró en 1709 al Cap. Juan de San Martín 3.000 varas de estancia en Areco, y uno de sus trece hijos, llamado Santiago, de color pardo, declaró quince años después, en 1734, que vendía 500 varas en Areco al Gral. José Ruiz de Arellano.¹⁹⁶ Las 2.500 varas restantes se presume las heredaron sus otros doce hijos. María de Campos, de color pardo, adquirió en 1735 a Julian Tamayo y Josefa Leguizamo 400 varas de tierra en Lujan.¹⁹⁷ El Alferez Pablo López,¹⁹⁸ de color pardo, adquirió en 1705 al Teniente Fernando Monzón, en el pago de la Costa de San Isidro, una chacra de 350 varas de frente; y su hija Isabel López, mujer de Alonso Díaz, indudablemente parda, aunque a diferencia de los casos anteriores, su status racial no se aclara en la transacción, vende en 1752 a Basilio de Pesoa dicha chacra.¹⁹⁹ María de las Nieves y Mariano Andújar, pardos libres, herederos del Deán José de Andújar, venden en 1787 a Cipriano Peñalva una estancia de 5.125 varas de frente al Río Paraná, en el paraje del

La movilidad y la persistencia en la propiedad rural

Aplicando la metodología inaugurada por Borde y Góngora, por Taylor y por Brading, reconstruimos la historia dominial de 965 predios rurales, correspondientes a catorce pagos o partidos del Buenos Aires del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, cuyas transacciones de dominio habían transcurrido en un total de 1.684 compraventas, protocolizadas entre 1701 y 1810.²⁰¹ Sobre la base de esta reconstrucción, el Cuadro B-I demuestra que el pago con más transacciones venales promedio, es decir el pago cuyos predios cambiaron de manos más veces, fué el de la Costa de Monte Grande o San Isidro, un partido totalmente compuesto por chacras, con una media de 10,0 (número de transacciones en Monte Grande/total de transacciones); y el pago de menor promedio de transacciones fué el de Areco, un partido totalmente reservado para estancias, con una media de 2,1. En la banda sur del pago de las Conchas, un distrito reservado legalmente para chacra, la media de transacciones alcanzó un promedio de 4,7; en la banda norte de la Matanza a 8,7; en las cabezadas de la Magdalena, a 7,0; en la banda sur del pago de Luján, a 10; y en el pago de San Andrés de Giles, a 2,1.

No obstante lo infrecuente de las propiedades o predios que padecieron una persistencia en el dominio que sobrepasara la de una sola generación, hemos podido reconstruir en el Cuadro B-II el número de generaciones por predio por pago. La persistencia en el dominio estaba dada por la cantidad de parcelas que entre 1700 y 1820 se mantuvieron en manos de las mismas familias, en la mayoría de los casos considerablemente fragmentadas. Birocco (1992a) ha sido el primero que intentara una aproximación al tema de la familia en la campaña bonaerense del siglo XVIII, aunque reducido a una sola jurisdicción. En nuestro trabajo, los nueve (9) Cuadros, correspondientes a distintas jurisdicciones o pagos, demuestran cómo numerosas parcelas, se mantuvieron en las manos de una misma familia durante dos o más generaciones. También se registran en dichos Cuadros aquellos casos en que algunas ramas familiares, descendientes de antiguos pobladores, se mantuvieron en las mismas parcelas por cinco, seis o siete generaciones. En Areco, según el Cuadro B-III, 19 parcelas, que sumaron 56.000 varas, se mantuvieron en manos familiares. Por tres o más generaciones, 16 parcelas; y por dos generaciones, tres parcelas. Los descendientes de Francisco Gaete Izarra, representados por José y Antonio Bague, se mantuvieron por seis generaciones. En el pago de los Arrecifes, según el Cuadro B-IV, 29 parcelas, que sumaron 155.000 varas, se mantuvieron en manos familiares. Por tres o más generaciones 22 (veintidos) parcelas; y por dos generaciones 7 (siete) parcelas. Los descendientes de Bartolomé Sánchez, representados por los Agüero Linares, y los de Juan del Pozo y Silva y Ana Garro de Aréchaga, representados por Manuel José de Lavalle y Mercedes González Bordallo se perpetuaron por cinco generaciones. En el pago de los Arroyos, según el Cuadro B-V, 20 parcelas, 6 por tres o más generaciones, y 14 por dos generaciones. La extensa familia de los Castro y Borda, en varias de sus ramificaciones, se perpetuó hasta el siglo XIX. Y en el paraje de los Hornillos, ubicado en el mismo pago de los Arroyos, los descendientes de Diego Ruiz de Ocaña y Elena de Vivancos, pobladores de comienzos del siglo XVII, representada por la familia de los Leyva y Souto, se mantuvo en el lugar por cuatro generaciones, hasta mediados del siglo XVIII. En Cañada de la Cruz, según el Cuadro B-VI, 19

parcelas, que sumaron 51.000 varas, se mantuvieron en las mismas manos familiares. Por tres o más generaciones 23 parcelas, algunas como subdivisiones de parcelas madres. Algunas familias, descendientes de viejos pobladores, tales como Domingo Griveo, Andrés Gelves, Juan de Monsalve y Juan Gutiérrez Morejón, se perpetuaron hasta por seis generaciones. En los Rincones de San Pedro y Zárate, en la costa del Río Paraná, los descendientes de Juan Gutiérrez de Paz, Francisco Díaz de Perafán y Gonzalo de Zárate se mantuvieron hasta fines del siglo XVIII. En el paraje de la Cañada Honda, se perpetuaron algunos descendientes de la familia de Juan de San Martín. En el paraje de la Cañada de Giles, la familia Suero, descendiente de Pedro Giles y Paula Remón, se perpetuó en el pago hasta después de la Revolución de Mayo, tras sostener un prolongado litigio con los descendientes de Lorenzo de Lara.²⁰² En el pago de las Conchas, según el Cuadro B-VII, 42 parcelas, que sumaron 41.000 varas, se mantuvieron en manos de las mismas familias. Por tres o más generaciones, 29 parcelas, y por dos generaciones 13 parcelas. Los descendientes de Amador Báez de Alpoin se perpetuaron por cuatro generaciones, los de Alfonso Caraballo por cinco generaciones, y los de Domingo Gribeo y Cristóbal Naharro por seis generaciones. En Luján, según el Cuadro B-VIII, 66 parcelas, que sumaron 78.500 varas, también se perpetuaron. Por tres generaciones 27 parcelas, y por dos generaciones 39 parcelas. Las familias descendientes de Antonio Pérez de Leguizamo y Margarita de Escobar, más conocidos por el apellido Leguizamón; la de Pedro Lobo Sarmiento y Melchora Díaz de Meneses; la de Marcos Rodríguez Flores y Catalina Martínez de Saravia; y la de Bernabé González Filiano y Francisca Trigueros alcanzaron a perpetuarse hasta seis generaciones. En Magdalena, según el Cuadro B-IX, 70 parcelas, que sumaron 243.000 varas, también se perpetuaron. Por tres o más generaciones 62 parcelas, y por dos generaciones ocho parcelas. Algunas ramas de las familias Arroyo, Avellaneda, Gómez de Saravia, López de Osornio y Lozano de Saravia, también se perpetuaron por más de cuatro generaciones. En Matanza, según el Cuadro B-X, 43 parcelas, que sumaron 125.000 varas, también se perpetuaron. Por tres o más generaciones 31 parcelas, y por dos generaciones 12 parcelas. Los clanes familiares de los Fernández de Agüero, González de Acosta, Gutiérrez de Paz, y Naharro de Humanes también alcanzaron a permanecer hasta fines del siglo XVIII. Y en la Costa de San Isidro, conocida más antiguamente por el pago de Monte Grande, según el Cuadro B-XI, 69 parcelas, que sumaron 21.000 varas, también se perpetuaron. Por tres generaciones, 21 parcelas, y por dos generaciones 48 parcelas. Las respectivas familias de Herrera y Verdún fueron las únicas que alcanzaron a permanecer por más de tres generaciones.

El derecho de abolengo también se practicó sobre varias chacras, estancias, y esclavos de Buenos Aires.²⁰³ En esta última provincia, las tierras que podían dar lugar al derecho de abolengo eran sólo aquellas ubicadas en pagos cuya colonización era de larga data, tales como Areco, Arrecifes, Conchas, Lujan, Escobar, Magdalena, Matanza, Monte Grande, Exaltación de la Cruz, y Morón. En 1770, Antonio Velázquez, inició juicio de retracto a Marcos Míguez, por las tierras de estancia en el pago de la Magdalena, que pertenecieran a sus padres el Cap. Isidro Velasquez e Isidora Josefa de Peralta. Velasco alegó que faltó al plazo perentorio de los nueve días por cuanto

"...en ese tiempo no me opuse por hallarse mis bienes todos secuestrados y reducido a una total inopia experimentando en mi persona una dilatada prisión".²⁰⁴

En la misma década del 70, cuando María de las Nieves Díaz, mujer de Francisco Márquez, quiso vender sus tierras de chacra en el pago del Monte Grande, heredadas de su tía abuela María Ignacia Rodríguez de Figueroa, viuda del Capitan Juan de Melo Coutiño y Agüero, hizo oposición a ello Pedro Marín Mercado, su yerno, pretendiéndolas por el tanto contra su otro yerno Vicente José Basconcelos.²⁰⁵ En 1801, cuando Don Matías García Pérez, uno de los herederos de Bernardo García e Isidora Pérez, quiso vender al Cura Párroco de San Nicolás, Pbro. Julián de Gainza, una chacra en la Costa de San Isidro, su hermano Blas García Pérez, con dineros de Don Gaspar de Santa Coloma, se opuso con éxito pues la quería por el tanto para él.²⁰⁶ En 1819, Juan Almeida, heredero de Gregoria Zárate, vendió a Mariano Palacios y Rodríguez y Luis Zárate unas tierras para estancia sobre el Río Paraná, en el Rincón que llaman de Zárate, con la condición

"...que si algún día determinasen vender el todo de ambas suertes o parte de ellas han de preferir a los parientes que procedan de los abuelos Doña Gregoria Zárate y Don José Rodríguez".²⁰⁷

En 1825, José María de Achával, a nombre de Mercedes Madariaga, solicitó infructuosamente retraer la venta de una chacra en el pago de la Matanza, fundándose en que la finca era patrimonial y aboenga.²⁰⁸ El mismo año, cuando José Antonio Fillol, residente y vecino de los Santos Lugares, trató la venta de unos terrenos de chacra en el partido de Cañada de la Cruz, con Don Enrique Almada, los hijos de Fillol "...salieron oponiéndose a ella manifestándole que ellos heran preferidos por el tanto que aquél les diese".²⁰⁹

La herencia y el loteo como mecanismos de fragmentación

La fragmentación de la propiedad inmobiliaria rural bonaerense, fuente de una profunda inestabilidad social, operó a través de la herencia y el loteo. En cuanto a la herencia, como mecanismo redistribuidor de la tierra, los Cuadros mencionados ilustran sobradamente esta problemática.²¹⁰ Dichos Cuadros también revelan como operó el loteo, como mecanismo redistribuidor. En Areco, el Cap. Juan de San Martín formalizó entre 1709 y 1728 media docena de operaciones de venta. En Arrecifes, Rosa del Pozo y Garro formalizó entre 1761 y 1782 una decena de operaciones, totalizando unas 9.000 varas. En 1819 José Santiago Sosa y Micaela Rafaela de Sosa, marido y mujer primos hermanos, practicaron cuatro operaciones totalizando 13.650 varas.

En el pago de los Arroyos, Trinidad Castro y Borda, mujer de Manuel Bernardo Cuello, practicó entre 1767 y 1799 una docena de operaciones, ocho frente al Arroyo del Medio, totalizando 35.000 varas, y cinco frente al Arroyo Ramallo, totalizando 7.000 varas. Francisco Javier de Ugarte, hijo de Francisco Miguel de Ugarte y Casilda Cepeda, practicó entre 1759 y 1765 una decena de operaciones, seis frente al Arroyo del Medio, totalizando 15.000 varas, y cuatro frente al Arroyo Ramallo, totalizando 14.000 varas. En el pago de las Conchas, Marcos Alarcón y Juana Iturri practicaron en 1778 cinco operaciones totalizando 1.300 varas de tierras de chacra. En Luján, Sebastián de Morales y Gregoria de Saavedra, practicaron entre 1741 y 1743 cuatro operaciones totalizando 2.500 varas. En el pago de la Magdalena, Domingo Hidalgo, como apoderado de los herederos de Lorenzo de Lara, practicó entre 1798 y 1802 media docena de operaciones totalizando

18.000 varas. Jose Antonio Rojas y Acevedo, como heredero de su abuelo Pedro de Roxas y Acevedo, practicó entre 1724 y 1737 una docena de operaciones de venta totalizando 28.000 varas. Y en el pago de la Matanza, Juan Francisco Tagle Bracho, heredero de su madre Antonia de Loyola y de las Casas, practicó entre 1733 y 1765 media docena de operaciones totalizando 7.000 varas. Muchos de estos adquirentes, tal como lo ilustra Birocco (1992b) para el caso de Andrés Gelves y Bernardo Peñalva, fueron previamente arrendatarios de las tierras que adquirieron.²¹¹

Al intenso proceso de loteo y fragmentación hereditaria, le siguió asimismo un intenso proceso inverso y compensatorio, de consolidación de la propiedad inmobiliaria. A los efectos de mantener la unidad de los predios familiares, se siguieron diversas estrategias. La más común consistía en vender todo a un solo miembro de la misma familia. En el partido de Pilar, río Luján abajo, banda del oeste, cuando Bernardino Abalos falleció, sus numerosos descendientes se repartieron amistosamente unas 650 varas de tierras de estancia, que había adquirido en 1725 en mayor número de varas a Don José Jacinto de Valdivia y Bergara, por ante el escribano José Esquivel. Más luego, algunos de los hijos de Don Bernardino fueron vendiendo, pero siempre dentro del núcleo familiar. Petrona Avalos vendió a su hermano Luis Avalos, y este último a su otro hermano Juan Avalos, y todos juntos vendieron en 1814 y 1818 a su coheredero Santos Cordero.²¹²

Asimismo, cuando José Lobo Sarmiento y su mujer María Magdalena de las Casas fallecieron, a fines del siglo XVIII, sus herederos se dividieron sus tierras en 1799 a razón de: 1.500 varas a Juan José Lobo, 750 varas a Tadeo Lobo, y 1050 varas a Martín Lobo.²¹³ Y cuando Ignacia Palomeque, viuda de Martín Lobo, falleció, dejando 761 varas de estancia, también fueron divididas en 1838 entre sus herederos, los cuales vendieron a su cuñado Anastasio Pacheco.²¹⁴ Cuando María Luisa, Feliciano, y Catalina de Leyva, heredaron de su madre Juana María Leguizamón, mil varas de tierra de estancia, las vendieron en 1794 a su tía o prima Isabel Leguizamón.²¹⁵ Cuando Salvador y Narciso Palomeque, heredaron de su padre Francisco Palomeque y Josefa Leguizamón sus respectivas legítimas, de 562 varas cada una, las vendieron a su pariente político Juan Pablo Ferreyra.²¹⁶ Asimismo, cuando Manuel José Ferreyra Méndez, hereda a fines del siglo XVIII, de sus padres Juan Pablo Méndez y Manuela Palomeque, 250 varas de tierras para estancia, las vende en 1806 a su pariente Gerardo Palomeque, hijo de Francisco Palomeque y Josefa Leguizamón.²¹⁷ Cuando Luciano, Juan Santos, e Isidro Burgos, heredan de Silvestre Burgos un terreno de estancia situado del otro lado del Río Lujan, deciden vender en 1825 a su coheredero Manuel Marcelino Burgos la totalidad de las 1.166 varas.²¹⁸ También en el pago de Magdalena, al fallecer Juan de Ortiz y Antonia de Zamudio, su heredero el Asistente Domingo Cayetano de Ortiz vende 600 varas de frente a su sobrino Ambrosio Ortiz.²¹⁹ Y en el pago de las Conchas, Tadea y Francisca Silberia Ibarrola, Micaela Ibarrola, viuda de Miguel del Mármol, y Francisca Bruna, viuda de Miguel Grimau, herederas de Agustina Gribeo y de Juan de Ibarrola, venden en 1824 una antigua chacra que había pertenecido a sus antepasados desde el siglo XVII, a su sobrina Mercedes Ibarrola.²²⁰ También se dió el mismo fenómeno con extraños. Las causas de la intensa fragmentación y movilidad dominial deben ser también atribuidas al régimen testamentario.

La intensa movilidad del mercado inmobiliario rural también obedecía a la extrema subdivisión en que recayó la propiedad de la tierra en determinados pagos. Exaltación de la Cruz y

los Arrecifes eran unos de dichos pagos. En aquella se llegaron a vender derechos y acciones a terrenos procedentes de antepasados remotos cuyos descendientes se habían multiplicado a ritmo desenfrenado. Este era el caso de los descendientes de Jacinto Correa, cuyos dominios fueron adquiridos entre 1837 y 1839, en media docena de operaciones, por el criador de merinos Federico Massot.²²¹ En el pago de los Arrecifes fué el caso de los descendientes de Andrés Lozano de Saravia y Manuel Gómez de Saravia, pobladores del siglo XVII, cuyas cabezas --integradas en el siglo XIX por Nicolás y Victoria Lozano, Vicente de la Canal, Juan Antonio Castro, y Eusebio y Martín Lozano-- acordaron y convinieron en 1825 "...en atención a la multitud de descendientes y herederos que han sucedido y ser muy corto o casi nada el número de varas que pueden pertenecer a cada uno" venderlas a Francisco Pérez Millán.²²² Y en la Cañada de Morejón, partido de la Capilla del Señor, Tadea, Pascuala y Petrona López, hermanos y herederos de Teodora Olivera, quién fué heredera de su madre Lorenza Cordovéz; y Pedro Sebastiani, nieto de Magdalena Cordovéz; y ambas Lorenza y Magdalena Cordovéz, hijas de Luis Cordovéz, donaban a Tomas de Olivera, otro de los tantos herederos de Luis Cordovéz las partes que les corresponden;

"... mediante a que siendo como son muchos los interesados vienen a corresponderles una porción muy exigua y a que por otra parte su valor no permite que cada uno de por sí entre respectivamente en el reclamo y esclarecimiento en la parte que le toca principalmente cuando se hace necesaria una mensura precisamente costosa para esclarecer la extensión y verdaderos límites de dichas tierras por defecto de los títulos de propiedad cuya existencia se ignora en el día".²²³

Conclusión

Para terminar, podemos afirmar, sobre la base de las fuentes judiciales y las numerosas tablas y cuadros aquí producidos, que si bien la perpetuidad y consolidación dominial subsistentes en el interior del espacio colonial y en algunos predios rurales del litoral Rioplatense, había fortalecido el poder económico y social de algunas familias terratenientes rurales; la rotación y la fragmentación hereditaria de la propiedad rural Bonaerense, que alcanzó uno de los niveles más altos de la América Latina colonial, había vulnerado la hegemonía y la estabilidad de los sectores terratenientes más tradicionales.

NOTAS

¹ Borde y Góngora (1956), Taylor (1972), Brading (1973), Van Young (1983), Muñoz Correa (1983), Urbina Burgos (1986) y Ramírez (1991).

² Para el caso de Chile, Muñoz Correa (1983), Schiaffino (1991-92) y Celis Atria (1986) han contribuido con valiosos trabajos.

³ Béaur, 1993, 142. Ultimamente, un equipo compuesto por una veintena de investigadores bajo la supervisión científica de Gaetano Cozzi y la dirección de Danilo Gasparini y financiados por la

Fundación Benetton se hallan relevando la información notarial correspondiente a la campaña Trevigiani perteneciente a la Cámara Fiscal de Treviso (Derosas, 1991, 728-729).

⁴ Béaur, 1993, 143. Huston (1993) refiere que la teoría acerca de la distribución de la riqueza prevaleciente en la era revolucionaria norteamericana estaba fundada en cuatro axiomas: 1) la teoría de la propiedad o valor del trabajo; 2) la política económica de la aristocracia; 3) las leyes de la primogenitura; y 4) la proporción de población por superficie de tierra.

⁵ Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac, 1989, 126 y 34. El déficit grave que presenta este análisis cuantitativo, que invalida sus conclusiones, consiste en la exclusión del ganado mular (ver Cuadro 1 de Magdalena, Cuadro 3 de Areco en pp. 35 y 73, y descripción del Rincón de Pinazo, p.128).

⁶ ver Zemborain, 1973; Saguier, 1983; Gaignard, 1989; y Basualdo y Khavisse, 1993.

⁷ Coni, 1927, 128.

⁸ ver Pastore, 1990, y 1991, 6.

⁹ el tanteo era la facultad que por ley o costumbre jurídica tiene una persona para adquirir algo con preferencia a los compradores y por el mismo precio. Se distingue del retracto por el momento de su ejercicio, que en el tanteo es previo a la enajenación de la cosa (Ossorio y Florit, 1968, XXV, 1055). El retracto era el derecho establecido en favor de los parientes colaterales para que en el caso de venderse una finca familiar o un esclavo de la familia a una persona extraña, pudiesen retraer esa finca o ese esclavo. Estas instituciones, que también existieron en el mundo anglosajón (Hoyle, 1995, 156), trabaron la formación de la renta y el salario, fuente material de la gestación de la burguesía (debo esta reflexión a mi amigo y colega Ezequiel Raggio).

¹⁰ El Derecho Canónico prohíbe la enajenación de las tierras e inmuebles afectos a capellanías colativas sin el presupuesto permiso de la competente jurisdicción eclesiástica (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.52, Exp.4, fs.189v.).

¹¹ ver Saguier 1984, 1985.

¹² Balmori y Oppenheimer, 1979.

¹³ entre ellos los trabajos de Calvo, Cornejo, Luque Colombres, Crespo Naón, Vásquez Mansilla, Jáuregui Rueda, y Avellá-Cháfer, estos tres últimos identificados de ahora en más con las siglas VM, JR y A-CH, respectivamente.

¹⁴ El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr. Hugo Fernández de Burzaco, --por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza-- quien los aprovechara con mi autorización para su valiosa obra denominada "Aportes Biogenealógicos

para un Padrón de habitantes del Río de la Plata", la cual identificaremos de ahora en más con las siglas FB.

¹⁵ Maeder, 1981, 313.

¹⁶ En esta Tabla se corrigen las cifras correspondientes a los años 1721, 1791 y 1808 publicadas en Saguier, 1993, Cuadro C-I, las cuales están erradas.

¹⁷ de esta última cifra hay que deducir \$75.000 correspondientes al valor de una hacienda de cicales llamada Miraflores, existente en los Yungas, Alto Perú, que fuera vendida por Francisco Ramos Mexía y su esposa María Antonia Segurola.

¹⁸ Borde y Góngora, 1956, Apéndice I, citado por Taylor, 1972, 141.

¹⁹ Taylor, 1972, 141. Debo la lectura de este libro a la generosidad de mi amigo Carlos A. Mayo.

²⁰ Brading, 1972, 392.

²¹ Van Young, 1983, 31.

²² ver Birocco, 1992.

²³ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 92, Exp. 2384.

²⁴ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 92, Exp. 2384.

²⁵ AGN, Tribunales, Leg.148, Exp.39, fs.109.

²⁶ Idem.

²⁷ hijo del Teniente Gobernador Francisco Xavier de Echagüe y Andía, y de Josefa de Gaete, y marido de Isabel Maciel (Crespo Naón, 1983, 66; y 1984).

²⁸ AGN, Tribunales, Leg.148, Exp.39, fs.111.

²⁹ Idem, fs.110.

³⁰ Idem, fs.110.

³¹ Sobre el Marquesado del Valle de Tojo, Quesada (1992) ha publicado recientemente un enjundioso estudio.

³² AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.G-4, Exp.17, fs.115.

³³ *Ibídem*.

³⁴ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.52, Exp.5, fs.117.

³⁵ Gaspar Munibe y Tello, nacido en Huamanga, Perú, en 1711, y fallecido en 1793. Redactor del Mercurio de Lima. Probablemente primo o tío del Conde de Peñaflorida, Francisco Xavier María de Munibe e Idiaquez, autor de *El borracho burlado* (1764), ópera cómica en castellano y vascuence.

³⁶ Barba, 1978, 222. Bucarelli se consideraba Gobernador de Buenos Aires, Paraguay y Tucumán a partir del recibo de la orden en que se le mandaba expulsar a los Jesuitas (Acevedo, 1969, 110). Carecía de vínculos de parentesco con familias locales. Para más detalles ver Díaz Trechuelo et.al., 1967, 385-658.

³⁷ Oficio del Cabildo de Tucumán al Virrey Vértiz, Tucumán, 12-III-1772 (AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Correspondencia, Sala IX, 22-2-6). En Córdoba, el Pbro. Dr. José Antonio Moyano asistió en calidad de vocal eclesiástico a la Junta Municipal de Temporalidades (Altamira, 1943, 165, nota 2). Para el caso del Perú, ver Aljovín de Losada, 1990.

³⁸ AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.25, Exp.623, fs.156.

³⁹ hijo del Cap. Antonio de Figueroa Suárez de Cabrera, santiagueño, y de María de Suasnábar; y marido de María de Toledo Pimentel e Hidalgo Montemayor (Libro II de Matrimonios de Salta, folio 40; dato proporcionado por Carlos Jáuregui Rueda; ver también Cornejo, 1937, 167).

⁴⁰ Cornejo, 1979, 369; y Mata de López, 1990, 72.

⁴¹ Hijo del Capitán Lorenzo de Escobar Castellanos Peñalva y de Lorenza de la Zerda Mirabal y Alvarez de Toledo; marido de María Magdalena Plazaola de la Zerda y Arcos; padre de Feliciano Castellanos, mujer primero del Coronel Agustín de Zuviría y luego de Vicente Toledo Pimentel; y hermano de Juan Bautista Castellanos, dueño de la estancia "San Lorenzo" (Cornejo, 1945, 38).

⁴² Mata de López, 1990, 82.

⁴³ Mata de López, 1990, 81.

⁴⁴ Casado con Catalina Figueroa y Güemes, padre de Luis Avelino Costas, casado con Mónica López; de las hermanas Francisca y Catalina Costas Figueroa, casadas con los hermanos Robustiano y Domingo Patrón, hijos de Juan Gregorio Patrón y de Eugenia Escobar y Delgado; y de Liberata Costas, propietaria de la Estancia del Potrero de Incahuasi (Rosario de Lerma), mujer del realista Coronel Agustín de Gasteaburu (CC, VI, 191; Cutolo, III, 394).

⁴⁵ Cornejo, 1945, 116; y 1973, 49.

⁴⁶ Español americano, descendiente del fundador de Salta, y cuya Casa paterna se originaba en portugueses ingresados en el siglo XVII por Buenos Aires. Graduado como abogado de la Universidad de Charcas, acaudilló al bloque americano en el Cabildo de Salta, donde tenía en vilo a las nuevas autoridades borbónicas con sus escritos y sus pleitos. Don Mateo era hijo de José Domingo Saravia y Aguirre y de Martina Jáuregui, y hermano de Mariano Ramón (casado con Teresa Maurín), de José María (casado con Bernarda Díaz de Zambrano), de Santiago (casado con Josefa de Tejada y Blanco), y de Saturnino (casado con Luisa Saravia). En el expediente que se iniciara acerca de la merced de los terrenos de Miraflores y Ortega, Don Mateo alegaba en su favor los servicios que hicieron sus mayores "...como el que fueron trascendentales hasta la misma frontera y reducciones, cuos establecimientos, la conversión de Indios, y sus gloriosas paces se devieron a los empeños de mi abuelo Don Martín de Jáuregui" (AGN, Tribunales, Leg.127, Exp.11, fs.9). Se había casado con la potosina Mercedes Paradis, con quien no tuvo descendencia alguna y de la cual se separó casi inmediatamente de desposarse. Sin embargo, Don Mateo crió siete hijos, de los cuales cinco de ellos fueron adoptados --entre los cuales dos, José María y Manuel Antonio, fueron Gobernadores de Salta-- y dos mujeres, las únicas que reconoció, una de ellas casada con un vasco llamado Juan Mendilaharsu, y otra separada del caudillo santiagueño Juan Felipe Ibarra. En 1789 se abre una causa por habersele encerrado y privado de la Asesoría del Cabildo de Salta (AGN, Tribunales, Leg.212, Exp.5 y 6). En 1795 inicia una demanda contra el Gobernador-Intendente de Salta y el Alcalde de Segundo Voto (AGN, Tribunales, Leg.196, Exp.5 y 6; y Leg.219, Exp.3). En 1806 promovió sendos expedientes para obtener en propiedad las haciendas de dos reducciones, la de Miraflores y la de Ortega (Levaggi, 1981, 440-445; y AGN, Solicitudes Civiles, S-Z, f.7). En 1806 obtiene del Marqués de Sobremonte la merced del Carmen, que consistió en 120 leguas cuadradas de campo en la frontera de Santiago del Estero y Córdoba. Falleció en 1836, dejando dos testamentos públicos, por el último de los cuales, otorgado en Chulumani, Bolivia, el 28-XII-1834, legó a sus cinco hijos varones, Manuel Antonio, Mariano, Juan Manuel, Nicolás, y Javier, su estancia El Carmen (Fallos de la Corte Suprema de Justicia, Serie 4a., t. 56, fs.237).

⁴⁷ Según Cruz y Blanco (1990) aproximadamente el 80% de las tierras productivas de la provincia de Tucumán actual se hallaba en manos de los Jesuitas (Cruz y Blanco, 1990, 10).

⁴⁸ Casó en diciembre de 1754 con María Josefa de la Cerda (Corominas, 1987, ítem 150).

⁴⁹ Hijo del General Francisco Sánchez de la Madrid y de María de Villafañe y Guzmán, y hermano de Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid y de María Sánchez de la Madrid, mujer de Francisco Xavier Cabrera (AGN, Temporalidades de Tucumán, Leg.5, Sala IX, 22-2-5). Marido en primeras nupcias de Claudia Aráoz, hija de Bartolomé Santos de Aráoz y del Campo, y de Catalina de Echávez y Elorriaga; y en segundas nupcias en 1758 de Clara de Paz y Aguirre, natural de Santiago del Estero, hija de Domingo de Paz y de Gregoria Aguirre; cuñado de Diego de Villafañe y García de Valdés; padre de José Manuel La Madrid; y tío político de Cayetano Rodríguez y de

Cayetano Fernández Moure (Avila, 1920, 62, y 99; y Corominas, 1987, ítem 181). Dueño del Potrero Río Blanco, por compra a las Temporalidades (Avila, 1920, 257).

⁵⁰ En 1774 alegaba "...no tener tierras ningunas, ni crecida familia, y el privilegio de Regidor y los muchos servicios a las Temporalidades desde la ora de la expulsión, en que alisté el paisanaje, y puesto en armas tomé las avenidas del colegio, leí e intimé el Real Decreto, y por falta de escribano actué cuantas diligencias hubo asta la más mínima carta; serví un año en calidad de Intendente de las Haciendas, pasé después a hacer Inventarios de las de Guazán y Aconquija, y de Diputado por este Ilustre Cabildo desde que se formó la Junta asta el año 72 y Ultimamente el deslinde, mensura y amojonamiento de las tierras bajas" (Francisco Tejerina al Gobernador Juan José Vértiz, Tucumán, 29-VIII-1774, AGN, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

⁵¹ Mallorquín, hijo de Gabriel Rubert y Jacinta Ballester, y marido de María López, hija de Francisco López y de Damiana Aráoz (Corominas, 1987, ítem 234). A juicio de Ruiz Poyo, Rubert "...se a ocupado con esmero en el cuidado del Colegio, de la Iglesia, Librería, y Ornamentos y en reedificar las clases, los corredores, de los Aposentos, y la sacristía, que se allavan quasi arruinados, y necesitaban de pronto reparo, para su conservación y asimismo ha atendido a los conchavos, y pagamentos de los peones que se han ocupado en las haciendas de campo, y en bender algunas cosas, de las que estas producían" (José Fermín Ruiz Poyo al Gobernador Juan José Vértiz, Tucumán, 1-V-1774, AGN, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

⁵² Hijo del Maestre de Campo Nicolás Romano Pastene y de Agueda Palavecino, marido de María Inés Silva, hija del Sargento Mayor Ignacio de Silva y Bohórquez y de Francisca de Herrera y Guzmán; y hermano de Felipe Romano Pastene, marido de Francisca de Borja Campero, hija del Sargento Mayor Juan José Campero y de Petronila García de Valdés (Corominas, 1987, ítem 120 y 143).

⁵³ Vicente Escobar, Francisco Texerina, Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid, Gabriel Rubert y Gerónimo Román al Presidente de la Superior Junta de Temporalidades, Tucumán, 20-XII-1771 (AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6).

⁵⁴ Sargento Mayor del primer regimiento de Milicias de Tucumán. Casa con la viuda de Juan José de las Muñecas Alurralde, Doña Catalina Aráoz y Sánchez de la Madrid, hija de Miguel Aráoz y de Catalina Sánchez de la Madrid (Calvo, 1936, I, 77). En 1778 Francisco Texerina y Barreda y Pedro Aráoz lo demandan por mal desempeño en sus funciones de Administrador de Correos (AGN, Interior, Leg.3, Exp.15). Poseía la estancia Yerba Buena, que fuera de los Jesuitas (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20). Según el Cura apóstata Francisco Marcano y Arizmendi, Ruiz Poyo cambió "...el Divino Señor que estaba en la Sacristía, por uno mediano, y la madera y tablazón que tenían los expulsos en la carpintería la extrajo dicho Poyo para su casa, y parte della le dió a José Antonio Molina, con la que acabó su casa...Las demás tierras respectivas a las Estancias dicen las repartieron de Limosna a los sobrinos de la mujer de Poyo y del Vicario [Miguel Gerónimo Sánchez de la Madrid" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20).

⁵⁵ "...En razón de decir la cantidad que se podrá recojer deste ganado no es fácil hasertivamente informar a Vm.por estar del todo alzado, y componerse su habitación de quebradas muy ondas, Bosques, y asperezas fragosas, aunque por lo que he bisto, andando personalmente por las cumbres, faldas, y ciénagas donde sale por primavera y verano podré afirmar que habrá 3.000 o más cabezas de ganado el cual por Otoño, e invierno se avriga, y acoje en lo más encumbrado de los montes, y en lo más profundo de las quebradas, y abrigado de los bosques y peñas resiste los rigores de jelos y nieves, y de allí no hai poder que los saque sin con mucho trabajo, mucho señuelo, y sobradas industrias,...y en conclusión de todo sin señuelo es imposible cojer ganado sino a lazo una a una, porque si aquel potrero fuera de cañadas limpias, llanos, o nabas tendidas se podía cojer el ganado en pelotones a fuerza de correrlo, y sujetarlo cansado, aunque fuese sin señuelo" (Luis de Aguilar a José Fermín Ruiz Poyo, Tucumán, 30-XII-1773, AGN, Temporalidades de Tucumán, IX, 22-2-6).

⁵⁶ Marido de Mercedes Aráoz de la Madrid, hija de Miguel Araoz y de Catalina Sánchez de la Madrid, y concuñado de Juan José de las Muñecas y Francisco Díaz Vélez (Díaz de Molina, 1946-47). Padres de Dolores Ruiz Huidobro, mujer del Gobernador de Tucumán Clemente Zavaleta, hijo de Prudencio Zavaleta y Maria Agustina de Indá y Tirado (Cutolo, VII, 1969).

⁵⁷ AGN, Protocolos, Reg.6, 1767, fs.278; R.1, 1769, fs.237; R.5, 1769, fs.143; R.6, 1770, fs.1; R.6, 1773, fs.78v.; y R.5, 1773, fs.98v., 95v., 87v., 75, y 72v.

⁵⁸ Hijo de Miguel de Aráoz y Echávez, y de Catalina Sánchez de la Madrid y Villafañe; hermano de Miguel Ignacio, del Coronel y Comandante de Armas Francisco Xavier, del Presbítero Francisco de Borja, de Pedro Nolasco, y de José Manuel Aráoz; y cuñado de Julián Ruiz Huidobro, de Juan José de las Muñecas, y de Fermín Ruiz Poyo (CC, I, 1936, 68). Era marido de Josefa Córdoba y Gutiérrez, hija de Lucas de Córdoba y Figueroa Mendoza y de Josefa Gutiérrez Pérez Palavecino; hermana de Pedro Nolasco Córdoba, viudo de Manuela Thames y Sánchez de la Madrid, y marido de Manuela Deheza y Helgueros; cuñada de José Colombres y Thames; y tía del Obispo y Congresista de Tucumán e introductor de la caña de azúcar Monseñor José Eusebio de Colombres, y de Francisco y Santiago Colombres, casados con las dos hermanas Trinidad y Tadea de Alurralde y Avila (CC, III,199; Pereira Lahitte, 1966, 79-82; y Murga, 1979, 223-228). Eran padres de María Agueda Aráoz, mujer del Dr. Juan Venancio Laguna, hijo del Alcalde Miguel Laguna y de Francisca Bazán; de Catalina Aráoz, desposada en 1800 con Miguel Sánchez de la Madrid; de Pedro Aráoz, marido de Dionisia de Usandivaras Figueroa; y de Miguel Jerónimo Aráoz, marido de Inés de Usandivaras Figueroa; y padres del que fuera caudillo de Monteros y Gobernador de la República de Tucumán Bernabé Aráoz, fusilado por Francisco Javier López Molina, y casado con Teresa Velarde Villafañe, hija del Interventor de la Renta de Correos de Tucumán y Diputado del Comercio por el Consulado de Buenos Aires Don José Velarde y de María Teresa Villafañe (Avila, 1920, 62, 91 y 94; Jaymes Freyre, 1911; CC, I, 71; y Cutolo, I, 191).

⁵⁹ AGN, Protocolos, Reg.2, 1773, fs.52v.

⁶⁰ Español, nacido en 1732 en la Villa de Huelva, arzobispado de Sevilla, hijo de Melchor García

y de Ana de Baesa de Cárdenas. Contrajo primeras nupcias con Eugenia Indarte, y segundas nupcias con Maria Trinidad Carrasco, hija de Francisco Carrasco y de Luisa de la Zerda y Alvarez de Toledo. Era concuñado del Subdelegado de Real Hacienda José Silvestre de Ojeda, hijo de José de Ojeda y de Catalina Gutiérrez; y suegro de Miguel Pérez Padilla, del boticario Hermenegildo Rodríguez, y de José Fermín Molina (Corominas, 1987, ítem 204; Avila, 1920, 87 y 101; y Padilla, 1987, 90). Dueño del Potrero de San Jenuario, por compra a las Temporalidades de los Jesuitas Expulsos (Avila, 1920, 255). En 1778 se ordena al Cabildo de Tucumán se lo confirme como Regidor (AGN, Justicia, Leg.52, Exp.1508). En 1785 litiga el título de Regidor y en 1808 renuncia al mismo (AGN, Justicia, Leg.52, Exp.1508). Para el abogado Juan José Mariano Barón del Pozo, la casa del dicho Cárdenas "...es una de las de mayor recogimiento, y que dá exemplo a todas las demás en la crianza y educación de la familia, y así el dicho García, como su mujer, son unos vecinos de acreditada virtud y honradez (AGN, Tribunales, Leg. 142, Exp.9, capítulo 83)

⁶¹ AGN, Protocolos, Reg.3, 1768, fs.75; R.4, 1768, fs.227v.; R.6, 1768, fs.82v.; R.4, 1771, fs.229v. y 234; R.6, 1771, fs.9; y R.6, 1774, fs.63v. y 81.

⁶² Santamarina, 1968, 25-28; y Avila, 1920, 250-259, citados por Rosenzvaig, 1986, 140.

⁶³ Natural de la Villa de Espinosa de los Monteros, en el Arzobispado de Burgos, hijo de Manuel López y de María Ríos, casó en 1759 con (Lorenza) Ignacia Domínguez, hija del General Diego Domínguez y de Teresa Rodríguez (Viera o Vieira). Era también concuñado del Capitán José de Molina, de Fermín Texerina, y de Francisco Xavier Villafañe (Corominas, 1987, ítem 118, 156, 196, y 214).

⁶⁴ Subdelegado de Real Hacienda, hijo de José de Ojeda y de Catalina Gutiérrez, casado en 1760 con Teresa Carrasco, hija de Francisco Carrasco y de Luisa de la Zerda y Alvarez de Toledo, concuñado del Regidor Juan García de Cárdenas, y suegro del poeta popular Francisco Camboño y del Capitán José Pascual Alurralde (Corominas, 1987, ítem 204; y AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 398). Era Camboño primo del reo Agustín Fabeyro (AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.9, capítulo 399). Ojeda era dueño del Potrero de Raco (Avila, 1920, 255).

⁶⁵ hijo del Tte. Gobernador de Santiago del Estero y Encomendero de Sumaná Juan José Paz de Figueroa e Ibáñez del Castrillo y de Melchora de Sosa. Casado con su prima hermana María Josefa Goncebat y Paz, hija de Gaspar de Goncebat y de Josefa Paz de Figueroa e Ibáñez del Castrillo, y padre del Gobernador Juan Benjamín Paz, casado con Plácida Mariño Castro.

⁶⁶ AGN, División Colonia, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6)

⁶⁷ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.121, Exp.20.

⁶⁸ Idem.

⁶⁹ Rosenzvaig, 1987, 129, nota 247.

⁷⁰ Piñero, 1885, 579-586; y Cornejo, 1981, 71ss.

⁷¹ Dueño de Santa Catalina por compra a las Temporalidades. Español, casado con María del Carmen Albornóz y Carranza, hija de José de Albornóz y Guevara y de Francisca Carranza Echenique, padre del que fuera Gobernador de Córdoba, José Xavier Díaz, de Juana Isabel Díaz, mujer del comerciante de mulas Gaspar Sáenz Bravo; y de María Clara Díaz, mujer del Fiel Ejecutor José García Piedra (CC, I, 203). Era socio de su primo Juan Pérez de Bulnes.

⁷² Dueño de la estancia de Alta Gracia, por compra a las Temporalidades, y marido de Felipa Catalina Ladrón de Guevara. Era padre de Victorino Rodríguez, casado con Felipa Antonia Tagle y Castro (Moyano Aliaga, 1983); de José Antonio Rodríguez, casado con María Agueda Allende y Mendiolaza; de Manuel Antonio Rodríguez, casado con María del Rosario Orduña, antecesor de las familias puntanas de los Rodríguez Saa y los Rodríguez Jurado; y del Chantre de la Catedral Juan Justo Rodríguez (LC, I, 336).

⁷³ Compró la estancia San Ignacio, en Calamuchita, que fué de la Fundación de Ejercicios, con parte de sus muebles, y semovientes, cuya compra la hizo en dos remates, y ascendieron ambos a la cantidad de \$32.366 con la expresa condición de pagar su monto por tercias partes una cada año y de serle arbitrario el pagar los réditos o el principal, como consta de escritura otorgada en 29 de octubre de 1773 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.86, Exp.25, fs.64).

⁷⁴ Compró la estancia de Jesús María en \$43.791 con el plazo de diez años, que principió a correr el 29 de julio de 1775 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.86, Exp.25, fs.64; y Justicia, Leg.15, Exp.353).

⁷⁵ Compró la estancia de la Candelaria, en Cruz del Eje, con parte de sus muebles y semovientes en \$19.352, que debía pagar en 17 de Diciembre de 1774 (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.86, Exp.25, fs.64; y Sarria, 1984, 501-566). Al parecer no alcanzó a pagar pues diez años después la misma estancia fué vendida a José de Isasa y Ayesta.

⁷⁶ Nacido en San Sebastián, España, casó en Córdoba con María del Rosario Ponce de León, hija del Maestre de Campo Agustín Ponce de León y Elena de Carranza, padres de José Manuel de Isasa, prócer de la Independencia. Comprador de La Candelaria, estancia jesuítica ubicada en Cruz del Eje, según Acuerdo del 31-III-1784 (AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, 1774-1777, Leg.7, Sala IX, 21-10-2) Debo esta referencia a la gentileza de la Profesora Estela Barbero, quien se halla estudiando la expulsión de los Jesuitas con una meticulosidad propia de benedictino. Tuvo Isasa duros pleitos con José Manuel Salguero, dueño de la Estancia de Los Dos Ríos (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.220, Exp. 15)

⁷⁷ Bruno, 1967, VI, 527-529.

⁷⁸ Pérez Colman (1936) y Elía (1961) nos ofrecen la descripción del "Potrero de San Lorenzo", compuesta de las estancias El Sauce, La Centella, La Estancia Grande, El Rincón, La Sesteada, y El

Naranjal, comprendiendo todo sesenta leguas cuadradas, ubicadas entre los ríos Gualeguaychú y Uruguay, pertenecientes al Coronel Juan Ignacio de Elía, y luego a su hijo Angel Mariano de Elía; y Morquio Blanco (1990) la descripción de la que fuera la estancia de la Hermandad de la Caridad. En la enorme propiedad del "Potrero de San Lorenzo" se fundó el primer criadero de cerdos del Río de la Plata, con el fin de avituallar a los navíos surtos en el Apostadero naval de Montevideo (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.M-18, Exp.14). En 1807 Pedro José de Elía declara a su hermano Dr. Agustín Pío de Elía que el 1-VI-1807 compró a su otro hermano Angel Mariano "...los ganados vacunos y caballares y derecho posesorio a las tierras realengas nombradas el Nancay y las que también fueron de Juan Díaz, socio de Francisco Panelo, con las estancias siguientes a saber la nombrada Principal, la de las Seibas, Esquina, Santo Angel, Santa Rosa, Punta del Monte, Maciegas, Isla del Tigre, y Alarcón, y consiente en que su hermano el Dr. Agustín Pío de Elía solicite para sí la gracia de la propiedad (AGN, Protocolos, Registro 3, 1807, fs.151v.).

⁷⁹ Sala, Rodríguez y De la Torre, 1967, 285.

⁸⁰ Nacido en Belvis de la Jara, Toledo, marido de María Florencia Belgrano y González, hija de Domingo Belgrano Peri y de María Josefa González; y cuñado del General Manuel Belgrano (FB, III, 281).

⁸¹ Sala de Tournon, et. al., 1968, 41.

⁸² Sala, Rodríguez y De la Torre, 1968, 27, 29 y 30

⁸³ Marido de María Antonia Sosa Avila y Dávalos, y suegro de Eugenio José Balbastro y de Francisco Martínez Nieto (FB, I, 57).

⁸⁴ Sala, Rodríguez y De la Torre, 1967, 175.

⁸⁵ Aguirre, 1951, XX, 187-193.

⁸⁶ Alvarenga, 1978, 205 y 252.

⁸⁷ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg. 193, Expedientes 1, 2, 3, y 4.

⁸⁸ Aguirre, 1950, XIX, 165.

⁸⁹ Maeder, 1981, 313.

⁹⁰ Apéndice II, columna 4 (Maeder, 1981).

⁹¹ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.110, Exp.8, fs.8.

⁹² hijo de Alonso Mateo García de Zúñiga y de Juana de Lisola y Escobar, y marido de María del Carmen Acosta (FB, III, 153).

⁹³ AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.106, Exp.1.

⁹⁴ Natural de Granada de Nicaragua, reino de Guatemala, hijo del Teniente Coronel José de Rocamora y Mendoza y de Jacinta Sardiez del Castillo, marido de María Ramona Ibáñez, hija del Brigadier Pascual Ibáñez y de María Francisca Rospigliosi; y suegro de Marcos González Balcarce (FB, IV, 45; y V, 329). Ver Demonte y Troncoso (1972).

⁹⁵ Pérez Colman, 1936, II, capítulo XIII, 183ss., citado por Arce, 1977, I, 207.

⁹⁶ Hijo del Regidor Capitán José Crespo y de Casilda Carvallo y Aguilera del Pino, y marido de Polinesia Rodríguez y Lencinas (Crespo Naón, 1983, 63).

⁹⁷ Hijo de Pedro de Larramendi y de Francisca Arias de Cabrera, casado en 1771 con Antonia Manso, hija de Francisco Manso y de Anastasia de Aguirre, padres de Juana Ramona de Larramendi, mujer del Gobernador Francisco Antonio Candiotti (Crespo Naón, 1983, 70).

⁹⁸ Pérez Colman, 1936, II, 296.

⁹⁹ En Buenos Aires el paradigma de esta conducta fué a comienzos del siglo XIX el dueño de la estancia "Los Cerrillos" y Comandante de Campaña de la provincia de Buenos Aires General Juan Manuel de Rosas; en Tucumán el General Bernabé Aráoz, dueño de estancias en Monteros; y en Entre Ríos, el Brigadier General Justo José de Urquiza.

¹⁰⁰ Rázeni, II, 400-402

¹⁰¹ Nacido en Junio de 1769, hijo de Juan Martín de Pueyrredón y de Rita Dogan; marido de Juana Francisca Zegada, hija del Coronel y Teniente Gobernador Gregorio de Zegada y de María Mercedes Rubianes y Liendo Argañaráz; y cuñado de Julián Gregorio de Zegada, con quien sostuvo reiteradas reyertas políticas. Heredó de su suegro la Subdelegación de Correos de Jujuy en 1795, alcanzó el Coronelato en 1799, y fué designado Alcalde de Primer Voto de Jujuy en 1807. Fué 2o. Jefe del Ejército del Norte, falleciendo en 1812. Padre del Teniente Diego José de Pueyrredón, muerto en la batalla de Ayohuma (Cutolo, V, 611).

¹⁰² AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97. Escrito elevado al Virrey Joaquín del Pino por un numeroso grupo de vecinos Salteños, ofendidos por la creciente escasez de mano de obra provocada por el reclutamiento de milicianos para el fuerte de Orán.

¹⁰³ María Mercedes Rubianes, viuda del Teniente Coronel Gregorio de Zegada; y madre de Julián Gregorio de Zegada.

¹⁰⁴ AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

¹⁰⁵ *Ibíd.*

¹⁰⁶ Rázori, II, 401-402.

¹⁰⁷ Hijo de Juan Adrián Fernández Cornejo y de Clara de la Corte y Rosas, y marido de Gertrudis Medeyros, hija del Asesor Dr. José de Medeyros y de Jerónima Martínez de Iriarte, viuda de Juan de Zubiaur, Gobernador de la Provincia de Guanta. Fué suegro de los Gobernadores de Tucumán Alejandro y Felipe Heredia. Alférez de Milicias en 1780, Teniente en 1782, y Capitán en 1784. Acompañó a su padre en la navegación del Río Bermejo. Creó el regimiento de caballería "Patricios de Salta", y luego el General Pueyrredón le quitó el mando y le llenó de desaires a consecuencia de lo cual falleció en 1811 (Cutolo, III, 52).

¹⁰⁸ AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

¹⁰⁹ AGN, División Colonia, Interior, Leg.63, Exp.9, fs.97.

¹¹⁰ *Ibídem*.

¹¹¹ había comprado del difunto Corregidor Tomás de Herrera el oficio de Coronel de Milicias en \$500 (Correa Luna, 1918, 225).

¹¹² AGN, División Colonia, Interior, Leg.14, Exp.16.

¹¹³ ver Pivel Devoto, 1964.

¹¹⁴ ver Saguier, 1991.

¹¹⁵ Brito Stéfano, 1953, 354. Debo esta interesante observación bibliográfica a la gentileza del colega Osvaldo Pérez.

¹¹⁶ AGN, Tribunal Civil, Leg.M, n.15, 1823.

¹¹⁷ ver Birocco, 1993.

¹¹⁸ para la segunda mitad del siglo XVII, ver Saguier, 1981, cuadros 42 y 45, pp.513 y 518, y apéndices 57, 58 y 106, pp.704-708, y 802-804; reproducidos en Moutoukias, 1988, cuadro 17.

¹¹⁹ AGN, Sucesión 8.122, fs.15v.

¹²⁰ *Ibídem*.

¹²¹ *Ibídem*. Por el mes de Febrero de 1769, pasando Francisco Frois por el partido de los Arroyos y capilla de San Nicolás, Nicolás Quiroga, vecino de San Juan, arriando cargas de aguardiente y expendiendo aquellas a que se proporcionaba comprador, Frois "...entró a tratar con el dicho y en efecto les compró siete cargas los que les satisfizo con porción de grasa y sebo y diferentes animales en pie compuestos de 40 mulas, 2 caballos y una manada de yeguas y con la marca de Miguel

González de aquel vecindario iban once mulas erradas en la anca de uno y otro lado las cuales entregó de cuenta de Andrés Alvarez de Calo, mozo administrador de una tienda del otorgante, quien usaba de aquella marca con permiso de Miguel González dueño de ella, y continuó hasta que la prestó a Don Juan de Urdinarana posterior a aquella venta y por demanda de Urdinarana se hallan las once mulas embargadas pretendiendo derecho a ellas" (AGN, Protocolos, Reg.1, 1771, fs.121v.).

¹²² AGN, Sucesión 8.122, fs.15v.

¹²³ *Ibídem.*

¹²⁴ *Ibídem.*

¹²⁵ Acuerdos, 3a Serie, I, 19-20, 26-27, 32, 87-91, 94, 99, 102, 204, 232, 331, y 337.

¹²⁶ AGN, División Colonia, Sala IX, Hacienda, Leg.142, Exp.3.640. En Catamarca "...los que siembran le quitan agua a la ciudad", ver AGN, Tribunales, Leg.151, Exp.11, fs.24-30; y un Reglamento de Aguas, en AGN, Tribunales, Leg.151, Exp.11, fs.35v.-39v. Para conocer este tipo de economía ver Supplee (1988), Dougnac y Barrientos (1991), Lipsett-Rivera (1992) y Tamayo Flores, 1992, 107-142.

¹²⁷ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.93, Exp.5, fs.54-58, 79-81v. y 91-93v.).

¹²⁸ Fontana, 1962, 73. Estos fueron: Jacinto Molina, José Rodríguez Figueredo, Tomás Alvarado, Hilarión Jurado, Mateo Contreras, Mercedes Astorga, el Alcalde de segundo voto en 1776 Francisco Corvalán, Justo Cepeda, Lucas Obredor, Julio Morel, el Alcalde de segundo voto en 1779 José Marcos Aragón, José Miguel Castro, el Alguacil Mayor Fermín Martínez de Virgala, el Alcalde de Hermandad José León Torres, Julio Antonio Sarmiento, José Ferreyra de la Cruz, Manuel Adalid Rodríguez, el Administrador del Correo Félix Sáez, el Alcalde de segundo voto en 1793 Bernardo Sarmiento, Narciso Aguirre, Nicolás Medina, Nicolás Segura, José Francisco Amigorena, Mateo Isidro Maza, los Alcaldes de Hermandad José y Manuel Videla, Pedro Videla y Francisco Coria. Hilarión Jurado fué bautizado en 1749, hijo de Fernando del Cerro Jurado y Gómez y de Bernarda Correa de Saa y Pardo Parragués, hermano de Gavino Jurado, y cuñado de Francisco Vargas, Pedro Nolasco Puebla y José Ignacio de la Reta. Francisco Corvalán era hijo del Maestre de Campo Juan Luis Corvalán de Castilla y Arias Molina, y de Angela Chirinos de Posada y Toro Mazote, casado con María del Carmen Martínez de Rozas Correas, hija de Juan Martínez de Rozas López Piñero y de María Prudencia Correas de Larrea Villegas, padre de los Guerreros de la Independencia Francisco, José, y Juan Corvalán, y suegro de José Agustín de Sotomayor Videla, de Genaro Segura Correas, de Joaquín de Sosa Lima, de Manuel Lemos Cruz, y de Cruz Vargas. Fermín Martínez de Virgala era casado con Bentura Alvarez, perteneciente a una antigua familia local. Martínez de Virgala sostuvo en Mendoza en 1795 célebres litigios de disenso al oponerse al matrimonio de su sobrina política Severa Esquerria, la hija de Baltasar Esquerria y Manuela Alvarez, con José Julián Videla, hijo natural de José Lorenzo Videla y de Candelaria Suárez, así como al de su hijo Francisco Antonio Virgala con María Solana Riveros, hija de Mauricio Riveros y de Felipa Duarte. José León

Torres casó en 1777 con Bernardina Lemos, hija de Onofre Lemos y María Antonia Corvalán, hermana del Pbro. Diego de Lemos y del Coronel Juan Gregorio de Lemos. José Francisco Amigorena casa con María Prudencia de Escalante. En 1779 representa contra el Alguacil Mayor y el Alcalde de Primer Voto de la ciudad de Mendoza sobre abusos cometidos (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.8, Exp.123). El mismo año protestan por su actuación como Maestre de Campo (AGN, Hacienda, Leg.15, Exp.323). En 1790 Pedro José de la Cuadra le inicia demanda por cobro de pesos (AGN, Comerciales, Leg.15, Exp.14). En 1791 pide la suma pagada por cinco cautivas (AGN, Guerra y Marina, Leg.17, Exp.30) (Morales Guñazú, 1939, 181; AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.182, Exp.11 y 8; y CC, V, 184).

¹²⁹ La estancia llamada de Arriba fué comprada en agosto de 1777 a las Temporalidades por María Prudencia Correas, mujer de Juan Martínez de Soto y Rozas, suegros de Francisco de Borja Corvalán, Miguel de Téllez Meneses, y Tomás de Lima Melo y Jofré (Archivo Histórico de Mendoza, Carpeta No.18, Documento N.112

¹³⁰ Hoyle, 1995, 156.

¹³¹ Weber, 1977, II, 692, citado por Giddens, 1977, 274.

¹³² Luque Colombres, 1988, 389-400.

¹³³ AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.224, Exp.1 y 8.

¹³⁴ AGN, Tribunal Civil, Leg. A-6, fs.222.

¹³⁵ AGN, Tribunal Civil, Leg. A-6, fs.222.

¹³⁶ AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.226, Exp.16.

¹³⁷ junto con el obraje de San Juan de Taray era una de las dos empresas textiles más importantes del Cuzco (Glave y Remy, 1983, 225). Romano (1991) revela que cuando los Jesuitas fueron expulsados y el Obraje de Pichuichuro fué tomado por el Ramo de Temporalidades, este se destruyó pues el R.P. Ojeda S.J., que estaba a cargo del mismo, se vengó de la decisión de la corona perdonando a los indios sus deudas (Romano, 1991, 260).

¹³⁸ una capellanía lega, en la cantidad de \$6.000, cuyos patrones y capellanes habían de ser en primer lugar Don Andrés Bravo del Rivero, hijo del Oidor Decano Pedro Bravo del Rivero; en segundo Don Tomás Argüelles y Trelles; y en tercero el Dr. Vicente de la Puente; una capellanía colativa en \$4.000 cuyos patrones habían de ser en primer lugar Don Manuel de Encalada, en segundo el hijo de Rosalía Antequera, y en tercero el hijo de María Calderón llamado Juan Bernardino; otra capellanía colativa en igual cantidad cuyos patrones habían de ser en primer lugar el Lic. Miguel Sierra, en segundo el hijo mayor de Antonio Arredondo, y en tercero su aijado el hijo

legítimo de Gregorio López Boado; otra capellanía colativa en igual cantidad cuyos patronos habían de ser en primer lugar Don Vicente Bravo y en segundo y tercer lugar sus dos hermanos hijos legítimos del Maestre de Campo Leonardo José Bravo con prelación del mayor al menor; otra capellanía colativa en igual cantidad, en primer lugar el sobrino de Doña Melchora Reinia, llamado Ambrosio, en segundo uno de los hijos de José Marchán, y en tercero el hijo mayor de [Receptor de Diezmos de Huarcoondo] Tomás Lecaros; otra capellanía colativa en igual cantidad, en primer lugar el Lic. Tomás de Gorbenia, en segundo el hijo de Leandra Lobatón, y en tercero su aijado el hijo del General Tomás de Nafría; otra capellanía en igual cantidad, en primer lugar el hijo de Doña Anselma Pacheco nombrado José Aguilar, en segundo el hijo de Juan de Mendoza que entonces estaba en poder de su sobrino Don Matías, y en tercer lugar el huérfano de Doña Bernardina de Benavente llamado Pablo "...con advertencia que si mis sobrinos Don Matías y Don Vicente Mendoza tuvieren hijos habidos en legítimo matrimonio deben ser estos preferidos a cualesquier otros sujetos"; otra capellanía colativa en igual cantidad, en primer lugar el Dr. Vicente Centeno [nieto del Corregidor Antonio Centeno], en segundo el hijo mayor de Antonio Arredondo, y en tercero uno de los hijos de Don Sebastián de la Concha; otra capellanía colativa en igual cantidad, en primer lugar uno de los hijos legítimos de Josefa Antequera "...que todavía permanezca estudiando en el Colegio de San Antonio de Potosí", en segundo el hijo del Escribano difunto Felipe de Mesa el mayor, en tercero el hijo de Manuel de Mollinedo y Doña Isabel de Villavisencio, y en cuarto lugar el Dr. Marcos Merambio; y finalmente otra capellanía colativa de igual cantidad, en primer lugar uno de los hijos pequeños de Mateo de la Sota, en segundo el sobrino del Dr. Francisco Virto llamado Don Francisco, y en tercer lugar el que quedare de los hijos del General Mateo de la Sota; y finalmente otra capellanía colativa en igual cantidad, en primer lugar el Dr. Vicente Puente, en segundo los hijos legítimos del Contador Mariano Maruri, y en tercero Manuel Caviedes y Loaiza (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.36, Exp.4, fs. 18v.).

¹³⁹ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.20, Exp.15, fs.89.

¹⁴⁰ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.7, fs.3.

¹⁴¹ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.7.

¹⁴² AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.20, Exp.15, fs.89.

¹⁴³ hijo de Antonio del Portal y Arduz y de María Josefa Vieyra de la Mota y Tobalina; marido de Manuela Frías Castellanos, hermana del Pbro. José Domingo Frías; padre del Alcalde José Antonio del Portal y del R.P. Manuel Ignacio del Portal; suegro del Gobernador Delegado Teodoro Sánchez de Bustamante; y primo hermano de José Francisco Vieyra y del Pbro. Alexo Vieira, hijos de Francisco de Vieyra y de Gabriela de Argañaráz y Murguía (Zenarruza, 1991, I, 416).

¹⁴⁴ hijo del Cap. Juan Rodríguez Viera.

¹⁴⁵ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.52, Exp.4.

¹⁴⁶ Idem, fs.196v-197.

¹⁴⁷ Reyes Gajardo, 1940, 176.

¹⁴⁸ hijo de José Arias Rengell y de María Pardo de Figueroa; hermano de Felix Arias Rengell; y cuñado de José Ruiz de los Llanos y de Justo Saravia Martínez Sáenz; y contrajo primeras nupcias con Isabel Torino de Viana y segundas nupcias con Zenona López de Villanueva (Calvo, I, 89).

¹⁴⁹ Cornejo, 1945, 202; y Vergara, 1946, 32-33. En primer Patrono de la Capellanía se había constituido el propio fundador, Pbro. Juan José Arias, y en adelante su primo el Pbro. Fernando Arias Rengel, o en caso de faltar la línea de Don Francisco Gabino Arias Rengel (hijo del Maestre de Campo y encomendero Félix Arias Rengel y Heredia y de Gregoria Hidalgo Montemayor; y marido de Feliciano Martínez Sáenz [Calvo, I, 89]), se establecía que entraría su otro primo Don Apolinar Arias Rengel y sucesores (Cornejo, 1945, 202).

¹⁵⁰ hijo de Bernardo del Campo y de Andrea de Paz y Figueroa; marido de Juana Medina, hija de Juan de Medina y de Catalina de Artaza; y tío de Micaela del Campo y Orna, viuda de Francisco Neyroto (Archivo de la Arquidiócesis de Córdoba [AAC], Libro de Capellanías, Leg.31, t.XI [Microfilm 5621, del Centro de Historia Familiar [CHF]] perteneciente a la filial porteña de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son a su vez copias de los microfilms existentes en la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, también de ahora en más identificado con las siglas CHF).

¹⁵¹ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XI (Microfilm 5621, del CHF).

¹⁵² alumno de Victorino Rodríguez (Luque Colombes, 1945, 27, nota 51).

¹⁵³ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XI (Microfilm 5621, del CHF).

¹⁵⁴ Pomer, 1985, 218.

¹⁵⁵ AAC, Libros de Capellanías, Leg.31 (Microfilms depositados en el CHF).

¹⁵⁶ hija de Agustín Salvatierra y de Sebastiana López de Velasco, y nieta del Maestre de Campo José López de Velasco y de Magdalena Sánchez Sambrano.

¹⁵⁷ AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.158, Exp.4. Esta estancia de Tenené se hallaba a 14 leguas de la estancia de la Ramada, de Jose Barthelemi Berdugo e Isabel García Aráoz; a 10 leguas de la estancia del Palomar, de Isabel Alfaro; y a 6 leguas de la estancia del Zapallar, de Miguel Aráoz (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.178, Exp.4, fs.2V.). El Maestre de Campo Diego de Aráoz llegó a manifestar que era cierto que la estancia del Zapallar "...la tuvo prestada su hermano por escritura, pero que no sabe si comprendió en el préstamo dicho Paraje porque en los

años de catorce o quince habiendo hecho las mensuras por orden del Sr. [Estéban de] Urízar, Don Gregorio Martínez Salazar, le señalaron otras tierras a Don Juan Gregorio Aráoz su hermano, heredero de dichas tierras de la quebrada del Río Meume, y como dicho Juan Gregorio estaba poblado en las dichas tierras que le señalasen estaba en la inteligencia de que esas eran las tierras que le señalaron por suyas, hasta que el año de veinte y seis, o veinte y siete según quiere acordarse habiendo venido la Dueña de las tierras de la ciudad de Santa Fé, que lo era Doña Magdalena Baquedano, lo lanzó de ellas, y como el enemigo continuaba en dichos parajes, no dió lugar para pedir nueva mensura quedando los enemigos poseyéndolas, y luego que se ahuyentó el enemigo las vendió Don Juan Gregorio que fué el año de cincuenta y cinco a su hijo Pedro Antonio Aráoz" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.178, Exp. 4, fs.35v.).

¹⁵⁸ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.189, Exp.4, fs.188-189.

¹⁵⁹ AGN, División Colonia, División Colonia, Leg.243, Exp.4, fs.192-201.

¹⁶⁰ hijo del General Manuel de Villafañe y de Francisca de Tejeda y Guzmán.

¹⁶¹ Rázori, III, 337.

¹⁶² hijo de Pedro Rodríguez y Bárbara Otáñez y Bazán (Archivo de la Arquidiócesis de Córdoba, Libro de Capellanías, Leg.31, t.IV, fs.18 [Microfilm 2668, del Centro de Historia Familiar).

¹⁶³ marido de María Dominga Carreño Bazán, y padre de Juan Manuel de Castro Carreño, colegial en el Seminario de Monserrat.

¹⁶⁴ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.IV (Microfilm 2668, del CHF).

¹⁶⁵ Idem, fs.18.

¹⁶⁶ Ibídem.

¹⁶⁷ Ibídem.

¹⁶⁸ hijo del Alcalde Francisco Garay y Tejeda, y de Petronila Molina Navarrete, sobrino del Alcalde José de Molina, y de Bartolina Garay y Tejeda, mujer de José Santiago Echenique y Cabrera; y marido de Isidora Zamudio y Echenique, hija de Juan José de Dízido y Zamudio y de Tadea Echenique y Garay, Señora de la Capellanía de Copacabana (Calvo, 1924, 164).

¹⁶⁹ Domingo Garay al Virrey, Hacienda de Ansacate, 6-VI-1782 [AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.3, Sala IX, 5-9-5].

¹⁷⁰ Archivo Histórico de Córdoba (AHC), Escribanía N.1, 1791, Leg.415, Exp.1.

¹⁷¹ AHC, Escribanía N.1, Leg.390, Exp.12, fs.119.

- ¹⁷² AHC, Escribanía N.1, Leg.415, Exp.1.
- ¹⁷³ AHC, Crímen, 1790, Leg.52, Exp.13; y AGN, Tribunales, Leg.142, Exp.19.
- ¹⁷⁴ Fasolino, 1963-65, 29.
- ¹⁷⁵ hijo del Maestre de Campo Juan de San Martín y de Gerónima Gutiérrez de Paz, y marido de su prima María Rosa de Avellaneda y Aguirre (FB, VI, 40).
- ¹⁷⁶ las beatas María Nicolasa y María Melchora Gámiz de las Cuevas.
- ¹⁷⁷ hijo del Teniente José de Bolaños Maldonado y de Bernarda Josefa Gámiz de las Cuevas (FB, III, 118).
- ¹⁷⁸ hijo del Teniente Francisco Escudero y de Ana Margarita de Cossio y Terán (FB, II, 293).
- ¹⁷⁹ AGN, Protocolos, Registro 5, 1770, fs.102.
- ¹⁸⁰ marido de Inés Jijano, seguramente hija de Juan Antonio Jijano y de Ana Fernández de Castro.
- ¹⁸¹ AGN, Protocolos, Registro 3, 1809, fs.128v.
- ¹⁸² González, 1957, 176.
- ¹⁸³ marido de María Luisa Velos, hija de Andrés Velos y de Petrona Gómez (FB, IV, 316).
- ¹⁸⁴ contrajo primeras nupcias en 1748 con Juana de Melo y segundas nupcias en 1749 con Juana Romero (FB, V, 401).
- ¹⁸⁵ AGN, Protocolos, Reg.5, 1759, fs.50v.
- ¹⁸⁶ Levene, 1941, II, 405; Melli, 1974, 82-84; Barba, 1984, 263-273; y Marquiegui, 1990, 67.
- ¹⁸⁷ Acuerdos, III Serie, I, 146-148.
- ¹⁸⁸ Acuerdos, III Serie, I, 247-251.
- ¹⁸⁹ Acuerdos, III Serie, I, 552, 568.
- ¹⁹⁰ Acuerdos, III Serie, II, 604.
- ¹⁹¹ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.71, Exp.52.
- ¹⁹² Azcuy Ameghino y Martínez Dougnac, 1989, 79.

- ¹⁹³ hijo de Bartolo Juárez y Damiana Garzón.
- ¹⁹⁴ AGN, División Colonia, Escribanías Antiguas, Sala IX, 48-9-1, fs.132.
- ¹⁹⁵ marido de Petrona López Camelo, y padre de 13 hijos (FB, IV, 246).
- ¹⁹⁶ AGN, División Colonia, Escribanías Antiguas, Sala IX, 48-9-1, fs.175v.; y AGN, Protocolos, Reg.3, 1734, fs.148.
- ¹⁹⁷ AGN, Protocolos, Reg.3, 1735, fs.427v.
- ¹⁹⁸ hijo de Marcos López Miregildo y de Isabel Juárez y marido de Luisa de Salazar (FB, IV, 165).
- ¹⁹⁹ AGN, División Colonia, Escribanías Antiguas, Sala IX, 48-9-4, fs.457; y Protocolos, Reg.5, año 1752, fs.212v.
- ²⁰⁰ AGN, Protocolos, Registro 2, 1787, fs.468.
- ²⁰¹ Lamentablemente esta obra permanece inédita por lo costoso de su publicación.
- ²⁰² AGN, Protocolos, Reg.2, 1824/25, fs.318. Francisco Suero, hijo de Francisco Suero y González, asturiano, y de Juana de Giles Remón, que fuera Defensor judicial de los bienes de Miguel de Riglos, fue procesado por maltrato a su hermana Ana Suero, a instancias de la denuncia de su prima Gerónima de Noriega (AGN, Sala IX, Criminales, Leg.6, Exp.14).
- ²⁰³ AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.226, Exp.16; Leg.224, Exp.8 y 9; Leg.255, Exp.41; Leg.M-3, Exp.4; Leg.M-11, Exp.5; Leg.R-15, Exp.6 y 7; y Leg.Z-4, Exp.5 y 9; Protocolos, Registro 2, 1732/35, fs.8v.; y Tribunal Civil, Leg. A-11 y Leg.A-18.
- ²⁰⁴ AGN, División Colonia, Sala IX, Tribunales, Leg.M-11, Exp.5, fs.14-16.
- ²⁰⁵ AGN, Protocolos, Reg.4, 1776/77, fs.284.
- ²⁰⁶ AGN, Protocolos, Reg.1, 1801, fs.34v.
- ²⁰⁷ AGN, Protocolos, Registro 6, 1818/1819, fs.293.
- ²⁰⁸ AGN, Tribunal Civil, Leg.A-18.
- ²⁰⁹ AGN, Protocolos, Registro 4, 1825, fs.403v.
- ²¹⁰ En Areco, solo dos familias sufrieron dicha experiencia; los Monsalve y los Peñalva. En Arrecifes, los Lozano y Gómez de Saravia, Magallanes, Pozo y Silva, y Sosa. En los Arroyos, los

Castro y Borda, Olmos, Tabares y Ugarte. En el paraje de las Hermanas, los Gutiérrez y los Peñalva. En el paraje de los Hornillos, los Gómez y los Leyba. En la Cañada de la Cruz, los Casco de Mendoza, Gelves, Castro, Correa, y Monsalve. En el paraje de la Cañada Honda, los Benavídez, En el paraje del Arroyo Tala (San Pedro), los Chacón y los Gutiérrez. En el Rincón de Zárate, los Zárate. En el pago de las Conchas, los Valdivia, Báez de Alpoin, Islas, Ibarrola, Torrillas, Vega y Villoldo. En la Cañada de Morón, los Figueroa, Salazar, y Rivas. En Luján, los Avalos, Vallejos, Benencia, Burgos, Castro, Cruz, Cuevas, Díaz Altamirano, Leguizamón, León, Lobo Sarmiento, Melo, Palomeque, Peñalva, Avila y Ramírez, Rodríguez Flores, y Rodríguez de la Torre. En Escobar, los Pinazo y los Benavídez. En la Magdalena, los Arce, Arroyo, Avellaneda, Benavídez, Illescas, Rincón, Gil Negrete, Gómez de Saravia, de la Canal, Lara, Sosa, Lozano, y Velasquez. En la Matanza, los González de Acosta, Gutiérrez, y Naharro. Y en la Costa de San Isidro, los Gómez y León, Cueli, Cuello, Herrera, Márquez, y Castro Pavón.

²¹¹ Birocco, 1992b, 84 y 86.

²¹² AGN, Protocolos, Reg.3, 1814, fs.245; y Reg.3, 1818, fs.178v.

²¹³ AGN, Protocolos, Lujan, tomo II, fs.356v., 357, y 357v.

²¹⁴ AGN, Protocolos, Reg.4, 1861, fs.286.

²¹⁵ AGN, Protocolos, Lujan, II, fs.214.

²¹⁶ AGN, Protocolos, Lujan, I, fs.822 y 871v.

²¹⁷ AGN, Protocolos, Luján, III, fs.9

²¹⁸ AGN, Protocolos, Reg.7, 1824/25, fs.477.

²¹⁹ AGN, Protocolos, Reg.3, 1757/58, fs.366v.; y 375v.

²²⁰ AGN, Protocolos, Reg.5, 1824, fs.88.

²²¹ AGN, Protocolos, Reg.2, 1837, fs.674v., y 174v.; Reg.2, 1838, fs. 569, 572, 168, y 549v.; y Reg.2, 1839, fs.316, y 757v.

²²² AGN, Protocolos, Reg.4, 1825, fs.103v.

²²³ AGN, Protocolos, Reg.7, 1826/27, fs.40v.

TOMO XIII

Capítulo 6

La especulación de la tierra y el latifundio en la Provincia de Buenos Aires (1820-1852).

presentado en el Taller acerca del Rol del Estado en las Economías de Exportación, Panel P210 del XI Congreso Internacional de la Latin American Studies Association [LASA] celebrado en la Ciudad de México en Sept-Oct.1983, bajo el título "Land Speculation and Latifundia in the Province of Buenos Aires, 1810-1852);

La distribución de tierras en las regiones fronterizas de las pampas Bonaerenses dió origen a un debate de opuestas perspectivas que aún prevalece hoy en día. Una primer perspectiva (Coni, 1920, 1927), puso el énfasis en la influencia que la propiedad privada, y consecuentemente el mercado, pudieron haber tenido en la definición del patrón de tenencia de la tierra agrícola, y no de la tierra ganadera. Desde una perspectiva opuesta, una aproximación crítica (Oddone, 1930; y Sábato, 1989) puso el énfasis en el rol que los factores políticos e institucionales pudieron haber tenido en la distribución inicial de tierra pública, que consolidó la formación de una economía rentista o lo que se dio en denominar la oligarquía Argentina.

En esta sección, trato de analizar el volumen y la intensidad del mercado de tierras en la provincia de Buenos Aires desde ambas perspectivas. El principal propósito de este trabajo es estudiar el proyecto de reforma agraria y una posterior contra-reforma en la primer mitad del siglo XIX. Este proceso ocurrió debido a la especulación y acumulación de tierras en manos privadas en Buenos Aires.

Desde los comienzos, la distribución de tierras en las regiones de frontera de las pampas argentinas dio origen a un debate que subsiste hoy en día. La primera mirada (Coni, 1920, 1927), enfatiza la influencia que la propiedad privada, y consecuentemente el mercado, podrían haber tenido en la definición del patrón dominial de las tierras de cultivo, no así en el de las tierras de pastoreo.¹ La otra postura (Oddone, 1930), enfatiza el rol que los factores políticos e institucionales podrían haber tenido en la distribución inicial de la tierra pública, que consolidó la formación de la llamada oligarquía argentina. En este capítulo, parto de ambas perspectivas, con el fin de analizar el volumen y la intensidad del mercado de tierras en las pampas argentinas.

El principal objetivo de este capítulo es estudiar un proyecto de reforma de tierras y una posterior contrarreforma durante la primera mitad del siglo diecinueve. Este proceso ocurrió a causa de la especulación y la acumulación de tierras públicas en manos privadas en Buenos Aires. Los efectos de la estrategia de reforma rural (transición de una vía precapitalista y comercial a una vía campesina de capitalismo rural) intentada por un gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente de la república argentina: la enfiteusis de Bernardino Rivadavia (1822-39), así como los de una política de

contrarreforma (un cambio de una vía campesina a una vía neo-junker de capitalismo rural): las ventas de Juan Manuel de Rosas, fueron también significativos.

Los resultados del régimen de enfiteusis.

La contradicción entre los fines agrarios rivadavianos (la agricultura yeoman) y los resultados del régimen de enfiteusis (el incremento del latifundio), han sido tópico de muchos debates historiográficos. Bartolomé Mitre, más tarde presidente del país, adoptó las ideas fisiocráticas de Belgrano. Sostuvo en 1857, que mientras los arrendamientos de tierras públicas, o sistema de arrendamiento, estaban en armonía con la venta gradual de tierras públicas, el sistema de enfiteusis obraba en contra de la venta de tierras públicas. Deslindando al régimen de enfiteusis, que no permitía ventas de tierras, del sistema de arrendamiento que sí las permitía, Mitre intentó diferenciarse tanto de la política de reforma rural rivadaviana como obtener el apoyo político de la embrionaria clase terrateniente Bonaerense.² Para defender su proyecto, Mitre atribuyó los efectos monoproduktivos y de despoblamiento al sistema de enfiteusis. Sostuvo que la enfiteusis incrementaba el número de cabezas de ganado en vez del número de campesinos. Usando este argumento, Mitre asignaba implícitamente al sistema de arrendamiento los efectos de diversificación en la economía rural. En el debate, Carlos Tejedor, gobernador de la provincia Buenos Aires (1876-1880), mantuvo la posición opuesta. Enfatizó la relación jurídica esencial entre la enfiteusis y el sistema de arrendamiento, y señaló la superioridad de la enfiteusis sobre la propiedad privada. Tejedor intentó sin éxito apoyar sus argumentos acusando inoportunamente a Mitre de ser "comunista". Mitre le respondió que precisamente aquellos que apoyaban la enfiteusis eran quienes querían "introducir las ideas **comunistas** en el país".³ Mitre finalizó diciendo que era especialmente el sistema de arrendamiento el que permitía a los campesinos establecerse en la tierra haciéndolos propietarios de las tierras. Eso es decir, que con el arrendamiento uno va a la venta y a través de ella a la propiedad privada.⁴ Mitre, acuciado por la amplia repercusión mundial de las revoluciones francesa y alemana de 1848, se anticipó por más de un siglo a la ideología de la Alianza para el Progreso. De acuerdo a esta ideología, la distribución más equitativa de la propiedad privada era la mejor manera de obstruir al comunismo.⁵ Más tarde, los liberales centristas, como Andrés Lamas (1883), intentaron asignar al sistema de enfiteusis una semejanza a la propuesta de impuesto único de Henry George, resucitando en cierta forma las ideas fisiocráticas. Pensaba que Rivadavia buscaba por medio del sistema de enfiteusis impedir que la tierra fuera sujeto de oferta y demanda, y evitar que los terratenientes se aprovecharan de alquilar la tierra. Para casi todos los economistas liberales de la época con quienes Rivadavia estaba familiarizado (Ricardo, Bentham, Destutt de Tracy, Sismonde de Sismondi, Mill, etc.), la renta obtenida del alquiler de la tierra era considerada una explotación indirecta de la clase trabajadora urbana.⁶ De acuerdo a estos economistas liberales, la mejor manera de que los terratenientes se apropiaran de este valor excedente era declarando a la tierra propiedad estatal y permitiendo al estado recoger el alquiler. Esa es la causa por la que, de acuerdo a Lamas, la burguesía liberal liderada por Rivadavia intentaba evitar la propiedad privada de la tierra. Argumentaba que Rivadavia deseaba convertir a la tierra pública en propiedad común de la clase burguesa en forma de propiedad estatal.

Asimismo, los liberales de izquierda, como Carlos Antola y Alfredo Palacios, en su deseo de corroer a la oligarquía terrateniente, atribuyeron al sistema Rivadaviano un intencionado salto de una vía feudal a una vía socialista de desarrollo rural.⁷ Por otra parte, los liberales de derecha (Lamas, Lobos, Coni, Piccirilli, etc.) intentaron probar que Rivadavia nunca tuvo en mente un cambio radical en la estructura latifundista. Para probar esto, señalan que Rivadavia nunca extendió la enfiteusis a tierras ya dadas en propiedad privada ni declaró a la enfiteusis perpetua. Concluían que para Rivadavia, la enfiteusis era un sistema provisional en la transición de una vía precapitalista a una vía campesina de

capitalismo agrario. En cambio, de acuerdo a una más reciente escuela revisionista de izquierda, la enfiteusis rivadaviana puede ser vista como una vía "neo-junker" hacia el capitalismo agrario. En otras palabras, un sistema de "expropiación legal de la comunidad indígena y del campesinado libre, un sistema dirigido a impedir la compra de tierra por productores directos a fin de beneficiar a los poseedores de tierra ricos que ya eran propietarios".⁸

Como es bien sabido, las reformas en sí mismas contienen las semillas de la contrarreforma. Sus defectos, guiando a la especulación progresiva y al latifundio, fueron debidos no sólo a la forma en que se llevaron a cabo (por ejemplo: enormes tamaños de arrendamientos de tierras, bajos estipendios de tierra, largo plazo de arrendamientos, propietarios ausentistas, etc.), sino también a causa de las presiones internas y externas (por ejemplo: la dependencia del comercio orientado hacia el exterior, las crisis internacionales y domésticas, las deudas externas, etc.). El fracaso de esta reforma abrió la puerta a la política contrarreformista de Rosas.

La migración interna.

Entre las causas que ejercieron presión para reformar el sistema de tenencia de la tierra Bonaerense, debe dársele crédito también a la migración interna. Esta presión vino a ser sentida a comienzos del período colonial. En esa época, aquellos considerados "hacendados" o propietarios de ganado incluían sólo a aquellos propietarios de tierras que poseían como mínimo una suerte de estancia. Esta unidad económica consistía en una propiedad de media legua de frente por una legua y media de fondo, equivalente a tres cuartos de legua cuadrada, o 2.024 hectáreas. Cualquiera que poseyera una extensión menor de tierra no podía ser considerado legalmente como un hacendado y tenía que resignar por ley su interés ganadero, para volverse un labrador o, en otras palabras, para dedicarse a la agricultura.⁹ La escasez y el elevado precio de la mano de obra había guiado a la clase dominante a apoderarse de grandes lotes de la mayoría de la tierra libre disponible de manera de evitar el minifundio y los salarios elevados.

El subdesarrollo de la agricultura.

Como resultado de esta legislación discriminatoria, las tierras de pastoreo tendían a fortalecerse en detrimento de la agricultura. Esta situación motivó que el gobierno español en América, desde fines del siglo dieciséis, emprendiera duras discusiones sobre las causas fundamentales de la falta de desarrollo agrícola y del latifundio. Finalmente, en 1782 la corona Borbónica reconoció en la Ordenanza de Intendentes que el tipo generalizado de política de tierras era el principal factor responsable de este subdesarrollo. Como una forma de resolver el problema, a los Intendentes Reales les fue concedido la explícita autoridad para distribuir tierra real desocupada.¹⁰ Los funcionarios ilustrados que poseían posiciones importantes en el gobierno español de la colonia, como Juan José Sagasti, Agustín de la Rosa, Miguel de Lastarria, Félix de Azara y Diego de Alvear, promovieron la distribución de la tierra real desocupada, o aún de dominios privados si sus propietarios eran incapaces o renuentes a cultivarlos.¹¹ Siguiendo esta tendencia, Manuel Belgrano, secretario del Consulado de Buenos Aires a principios del 1800, consideró que el principal obstáculo para el progreso agrícola no yacía ni en las pobres comunicaciones, ni en la discriminación en contra de las exportaciones, ni en la pesada tributación, aunque todo esto existía, sino en el simple hecho que los campesinos de la región carecían de incentivo para producir porque no eran propietarios de la tierra que trabajaban.¹² Una vez que tuvo lugar la revolución de mayo, un decreto del 4 de septiembre de 1812 emitido por un Triunvirato liderado por el ala radical del partido criollo (J. J. Paso, F. Chiclana y M. Sarratea) intentó distribuir la propiedad de la tierra en forma pareja. Sin embargo, el Triunvirato, el único grupo capaz de

darle fuerza a esta reforma, fracasó completamente debido a su casi inmediata caída del poder.¹³

Política de reforma rural.

A mediados de la década de 1820, el mismo grupo, que tenía sus raíces en la burguesía mercantil colonial y en los sectores profesionales e intelectuales, regresó al poder. Una vez en el gobierno, intentaron darle fuerza nuevamente a una política de reforma rural. Esta política buscó crear una clase media de colonos a través de la inmigración extranjera, para confrontar así a los intereses saladeriles y terratenientes.¹⁴ Las legislaturas provincial y nacional debatieron cuestiones tales como los sistemas de tenencia de la tierra, los estipendios, los límites de extensión máxima y los derechos de transferencia. La nueva legislación abrió nuevas esperanzas para los sin tierra. Pero la opción por los arrendamientos estaba esencialmente dictada por la necesidad de reunir capital extranjero para la construcción de medios de comunicación (un puerto) que, a su vez, facilitarían la exportación de tasajo. Como las tierras públicas estaban inmovilizadas por ley para garantizar los préstamos externos, los intelectuales y los políticos descubrieron que la única manera de reembolsar este dinero a sus acreedores, sería incorporando el dominio público al mercado mundial a través de los arrendamientos públicos (o enfiteusis). La venta de tierras públicas a propietarios privados fue impedida por decreto en abril de 1822. Esto fue así porque la propiedad privada, debido a sus precios elevados, restringía la incorporación de tierras públicas al mercado mundial y socavaba la posibilidad financiera de adquirir préstamos externos.

La enfiteusis, un sistema de reforma rural, mediante el cual la tierra se distribuía, consistía simplemente en un arrendamiento a largo plazo sin opción de compra. El mecanismo por el cual este sistema fue puesto en práctica seguía diversos pasos. Primero, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el propósito oculto de usar la tierra pública para garantizar un futuro préstamo externo, prohibió por decreto del 17 de abril de 1822 la venta de tierra pública. Imponiendo este decreto, prohibieron la extensión de cualquier título de propiedad a los individuos. Porque hubo diferentes interpretaciones del decreto, el ministro Rivadavia se sintió obligado el 15 de octubre de 1822, de hacer claro que el decreto del 17 de abril se aplicaba sólo a la tierra bajo dominio público y no sobre aquella bajo dominio privado.¹⁵ Inmediatamente después, por decreto del 21 de julio de 1822, el gobierno de Buenos Aires ordenó, hasta que una ley nacional pudiera ser sancionada, la distribución de tierras públicas a través del sistema de enfiteusis, estableciendo un período con un término de 10 años y una tasación de tierras de dos regiones. Las tierras al norte del río Salado fueron tasadas a \$3.000 y \$4.000 pesos plata por legua cuadrada, y las tierras al sur de aquel río a \$2.000 pesos plata por legua cuadrada; la tierra en ambas áreas fue arrendada por el 2 % del valor de tasación.

Aunque la agricultura y la migración extranjera fueron también explícitamente promovidas en el modelo de reforma rural a través de más bajas valuaciones y estipendios, la deseada formación de una clase media de colonos no se produjo. Por una parte, la agricultura no floreció porque las importaciones norteamericanas de harina y las leyes proteccionistas de maíz impuestas por Gran Bretaña en la década de 1820, desalentaron al Río de La Plata para producir grano para la exportación y, en cambio, lo alentaron a concentrarse esencialmente en el tasajo para alimentar las plantaciones esclavistas brasileñas. Una vez que las leyes del maíz británicas fueron revocadas (1849), Inglaterra comenzó a solicitar grano de los Estados Unidos y más luego del área Rioplatense. Por otra parte, la agricultura tampoco floreció en esta época a causa de la oposición de los poseedores de tierras dedicada a la cría de ganado. Con referencia a Canadá, pero aplicable en forma similar a Buenos Aires, Mel Watkins argumentó que cuando el bien primario era de intensa explotación de tierras, como lo era la carne salada, "...los productores del bien primario encontraban de su interés desalentar la inmigración y

la colonización, y los inmigrantes con habilidades apropiadas para el desarrollo de productos de trabajo intensivo no encontraban atractivo en migrar".¹⁶ Como resultado de todo esto, los colonos extranjeros no deseaban migrar a la provincia de Buenos Aires. Además, la River Plate Agricultural Association en Londres, fracasó en convencer a las autoridades argentinas de entregar la tierra pública en propiedad privada.¹⁷

La especulación sobre los derechos de la tierra.

La especulación sobre los derechos de la tierra fue otra contradicción entre los objetivos y los resultados de Rivadavia. Cuando las expediciones militares invadieron las regiones en manos de los indios pampas, y una ley nacional fue puesta en efecto (1826), la cantidad de tierra pública distribuida en la década de 1820 se incrementó dramáticamente. La totalidad del territorio ubicado entre la costa marítima y una línea trazada desde Melincué a Federación (Junín), Cruz de Guerra (Veinticinco de Mayo), Bahía Blanca y Patagones (véase Mapa 1), fue sometida a un débil control nacional por el General Martín Rodríguez en 1823. Poco después, esencialmente gracias a la expedición del General Federico Rauch en 1825, los indios fueron eliminados de la provincia. Hacia 1826, las estancias se extendían sobre un área de aproximadamente 3.200 leguas cuadradas, 2.127 leguas cuadradas al sur del río Salado más 1.054 leguas cuadradas al norte del mismo río, dentro del área cercada por la línea que corría desde Mar del Plata a través de Tandil, Azul, Cruz de Guerra, Bragado, Federación, Rojas, Pergamino y al norte hasta San Nicolás de los Arroyos.¹⁸ Para determinar la cantidad de tierra distribuida entre los arrendadores a través del sistema de enfiteusis, uno tiene que contar separadamente el número de otorgamientos y rotaciones. Segundo, uno tiene que determinar de los registros de mensuras de tierra archivados en el departamento topográfico fundado por Rivadavia, si cada otorgamiento y rotación estaban originados en un reclamo inicial o en una transferencia. En todo caso, la fecha del acto previo estaba especificada así como los nombres de aquellos que transferían el derecho enfiteutico. De esta información reconstruí para cada uno de los gobiernos de la época, el número exacto de transacciones y leguas cuadradas otorgadas y transferidas entre los arrendadores. Por ejemplo, el Cuadro 1 muestra que entre 1822 y 1825 inclusive, fueron distribuidos 67 otorgamientos que ascendieron a sólo 196 leguas cuadradas.

Una vez que estos cálculos fueron realizados, pude determinar la superficie total de tierra distribuida en enfiteusis. De acuerdo al Cuadro 1, 443 otorgamientos de enfiteusis, totalizando 2660 leguas cuadradas, y 119 rotaciones, totalizando 870 leguas cuadradas, fueron negociados durante el período 1826-1833. En realidad, como muchos otorgamientos de enfiteusis consistían en tierras previamente distribuidas en enfiteusis, el total de tierras públicas otorgadas en enfiteusis como resultado de la expedición del General Rauch debe ser la diferencia entre la superficie total otorgada en enfiteusis (2.660 leguas cuadradas) y la superficie total transferida (768 leguas cuadradas), es decir, 1.892 leguas cuadradas distribuidas entre 279 arrendadores.¹⁹

La oferta de nuevas tierras.

La enorme oferta de nuevas tierras, conjuntamente con la creciente falta de capital, disminuyeron el valor de la unidad de tierra. Estos otorgamientos de tierra representaban 2/3 del total de tierra distribuida desde principios del siglo XVII. De este modo, el costo de la producción de ganado se mantuvo bajo.²⁰ De acuerdo al Cuadro 2, durante el período de 1820 a 1828, el precio promedio de tierra en propiedad privada fue de \$3.514 pesos plata por legua cuadrada, durante el período siguiente (1829-1832) disminuyó 17%, a \$2.932 pesos plata por legua cuadrada, y durante el último período enfiteutico (1833-1838), disminuyó 45%, a \$1.928 pesos plata por legua cuadrada. Abasteciendo el mercado de tierras con tal enorme cantidad de tierra pública, el mercado resultó inmediatamente

deprimido y los especuladores desalentados.

El tamaño de los bienes raíces rurales.

La introducción de un comercio orientado hacia la exportación, preparado en torno a la explotación del tasajo en la década de 1820, fomentó el incremento del tamaño de los bienes raíces rurales. Cuando Julián Segundo de Agüero, ministro de Rivadavia y el más grande promotor de la ley de enfiteusis, fue cuestionado sobre la falta de un límite máximo en la extensión de las parcelas arrendadas, replicó diciendo que el sólo mecanismo del estipendio enfiteútico impediría la acumulación latifundista de la tierra pública, porque nadie arrendaría más de lo que financieramente fuera capaz de poner en producción. Pero la historia enseñó que las rentas bajas cargadas por un estado oligárquico corrían en favor del latifundio.²¹ El Cuadro 2 muestra que la superficie promedio se incrementó en la década de 1820 casi 5 veces, desde una legua cuadrada en la región distribuida en propiedad privada en la década de 1810, a 5,9 leguas cuadradas en la sección enfiteútica distribuida en el período 1820-1828. A principios de la década de 1830 la unidad promedio en la sección enfiteútica ascendió un 14%, desde 5,9 leguas cuadradas durante los años 1820-1828 a 6,7 leguas cuadradas durante el crítico período de 1829-1832. Durante fines de la década de 1830, la unidad promedio en la misma sección enfiteútica ascendió un 24%, desde 6,7 leguas cuadradas a 8,3 leguas cuadradas durante el período 1833-1838. Estos cálculos confirman la creciente naturaleza monopolística del sistema de enfiteusis.

Impacto de las guerras y los bloqueos militares.

Las guerras y los bloqueos militares, reduciendo drásticamente la demanda externa en bienes primarios, fueron un fuerte factor que contribuyó al fracaso de las políticas de reforma rural. La guerra cisplatina con Brasil, que hizo erupción en 1825 en medio de una crisis económica de amplitud mundial, comenzó rodeada de un extremo apoyo popular en Buenos Aires. Sin embargo, al prolongarse interminablemente se volvía cada día más impopular. La provincia de Buenos Aires, en medio de su expansión ganadera, fue seriamente afectada por las consecuencias del conflicto. Como resultado de la elevada inflación y de un bloqueo marítimo por la armada brasilera, el conflicto golpeó severamente a Buenos Aires. Mientras los grandes propietarios de tierras podían acumular capital a pesar del bloqueo, a través de la multiplicación natural del ganado y la expansión de la nueva frontera sureña, los pequeños propietarios de tierras enfrentaron la bancarrota debido a la falta de crédito. Los trabajadores rurales sufrieron también los efectos de una elevada tasa de desempleo compensada sólo por el reclutamiento militar.²² El único beneficiario del bloqueo brasilero de Buenos Aires fue Montevideo y el campo de la costa oriental del Río de la Plata (el mismo fenómeno ocurrió con el bloqueo francés de 1838-1840 y el bloqueo anglo-francés de 1845-1846).²³

La crisis económica de la década de 1830.

La crisis económica de la década de 1830 señaló también el fracaso del proyecto de reforma rural rivadaviano y sirvió para incrementar el proceso de concentración de tierras que comenzó en tiempos coloniales. Aparte de la guerra con Brasil (1825-1828) y de la revolución de diciembre de 1828 que derrocó al gobierno de Dorrego, los desastres naturales también contribuyeron a la crisis de 1830. A fines de 1829 y durando hasta principios de 1832, una intensa sequía azotó el campo de Buenos Aires, seguida por ataques indígenas. Alrededor de 1.500.000 de cabezas de ganado perecieron. Además, los mojones delimitadores de cada propiedad desaparecieron bajo el peso del polvo y el gobierno tuvo que enviar una comisión para evitar disputas entre los propietarios de tierra.²⁴ Como resultado de tales sequías, aunque los arrendamientos públicos se incrementaron casi 2 1/2 veces en la

cantidad de leguas cuadradas, el mercado privado de tierras rurales experimentó, de acuerdo al Cuadro 3, una fuerte caída de alrededor del 14%. En efecto, el mercado de tierras cayó de \$301.635 pesos plata en 1830 a \$129.031 pesos plata en 1831, y alrededor de \$80.000 pesos plata en 1832 y 1833. El precio promedio por legua cuadrada cayó 50%, de \$2.805 pesos plata en 1831 a \$1.482 pesos plata en 1833.

Las economías comerciales de escala.

Las economías comerciales de escala también estuvieron presentes en los casos de desastres naturales. Mientras los grandes propietarios de tierra, como los Anchorena, a causa del tamaño y la diversidad de sus pastos para ganado, pudieron sobrevivir a la sequía y a cualquier fluctuación estacional del clima, los más pequeños poseedores de tierra no pudieron y fueron arrancados del negocio por la fuerza.²⁵ El gran número de fincas vendidas a causa de estar profundamente endeudadas con los mercaderes externos, refleja la seria crisis causada por los desastres naturales (véase Cuadro 4). En forma similar, el proceso de concentración de tierras experimentado por prósperos poseedores de tierra, mostrado en los Cuadros 5 y 6, ilustra los resultados económicos de la crisis.

El gobernador Juan Manuel de Rosas, él mismo un gran propietario de tierras y el jefe del partido Federal, también distribuyó tierra en enfiteusis. Las políticas de tenencia de tierra rosistas estaban condicionadas por la competencia por la provisión de las plantaciones esclavistas brasileras. Como resultado de esta lucha entre Uruguay y Buenos Aires por ir al encuentro de la demanda brasileras de tasajo, tanto Rosas como Fructuoso Rivera, el líder de la facción colorada uruguaya, fortalecieron su base política distribuyendo tierra en enfiteusis. Usando los ataques indios en el sur de Buenos Aires como pretexto, Rosas organizó una famosa expedición en 1833. Una vez que el control sobre el territorio indígena estuvo asegurado, el gobierno de Rosas procedió a distribuir en enfiteusis las nuevas tierras de las regiones de Volcán, Tapalquén, Chapaleofú, Huesos, Quequén, Tandil, Napaleofú, Arroyo Cristiano Muerto y Arroyo Pescado Castigado. Entre 1833 y 1838, de acuerdo al Cuadro 2, Rosas distribuyó 112 otorgamientos de tierra totalizando 933 leguas cuadradas o el 43% de todas las tierras dadas en enfiteusis después de 1822. Esta distribución fue hecha a un tamaño promedio de 8,3 leguas cuadradas, dos leguas cuadradas más grandes que las prevalecientes durante el gobierno de Rivadavia.

Sin embargo, teniendo en cuenta que en el período 1833-1838 muchos de estos otorgamientos de tierra fueron distribuidos por el gobierno provincial en tierras que habían sido previamente distribuidas en enfiteusis, como transferidas a nuevos arrendatarios cuyos contratos estaban cancelados, el número de poseedores de enfiteusis y el área territorial de la que el estado provincial disponía eran mucho menos que las 933 leguas cuadradas mencionadas más arriba. La cantidad anual acumulada de enfiteusis sobre nuevas tierras puede ser determinada restando la cantidad total de arrendamientos procedentes de enfiteusis (columna 2 del Cuadro 7) de la cantidad total de otorgamientos de enfiteusis (columna 1 del Cuadro 7), o restando el monto total de transferencias procedentes de los otorgamientos de enfiteusis (columna 5 del Cuadro 8) de la cantidad total de enfiteusis (columna 1 del Cuadro 8). A su turno, la cantidad total de transferencias procedentes de la enfiteusis (columna 5 del Cuadro 8) es el resultado de restar la cantidad total de transferencias procedentes de las transferencias (columna 4 del Cuadro 8) de la cantidad total de transferencias (columna 3 del Cuadro 8). El resultado final de ambos cálculos difiere ligeramente y, en ambos casos, las cifras a las que se llega son mucho menores que la cantidad de otorgamientos de enfiteusis acumulada (columna 2 del Cuadro 8). En 1833, por primera vez, el número de rotaciones de otorgamientos de enfiteusis excedió al número de otorgamientos o de concesiones. El Cuadro 8 muestra cómo, cuando la cantidad de tierra dada en enfiteusis se incrementaba (columna 1 del Cuadro 8), la cantidad de tierra transferida en enfiteusis disminuía

(columna 3 del Cuadro 8), y viceversa. Por ejemplo, mientras en 1835 la cantidad de tierra dada en enfiteusis creció hasta las 483 leguas cuadradas, triplicando las cifras de 1834, la cantidad de tierra transferida en enfiteusis disminuyó de 260 leguas cuadradas, en 1834, a 108 leguas cuadradas en 1835.

Como resultado de los gastos extraordinarios incurridos en la expedición contra los indios en 1833, Rosas se encontró a sí mismo obligado a cubrir su deuda por medio de la venta de tierras. Este proceso de venta de tierras implicaba, con respecto al proceso previo de enfiteusis, un paso hacia atrás o una política de contrarreforma, porque fortaleció y consolidó la estructura latifundista ya existente. Además, Rosas usó la política de venta de tierras para robustecer aún más su base política. El proyecto de venta de tierras del 28 de febrero de 1834, fue sancionado por la legislatura en 1836.²⁶ Por este acto, el gobierno fue autorizado a disponer de 1.500 leguas cuadradas en la provincia de Buenos Aires, parte de las cuales fueron mantenidas en enfiteusis.²⁷

Las ventas de Rosas.

Doblando las rentas a la expiración del período de enfiteusis en enero de 1838, y reduciendo los precios de venta de tierras públicas, la legislación de Rosas --que no canceló los contratos de enfiteusis existentes-- forzó a los arrendadores a comprar la tierra que tenían en enfiteusis. Cuanto más alta era la proporción de renta de la tierra sobre el precio de la tierra, más provechoso era comprar que arrendar. Además, el hecho que la tierra mantenida en enfiteusis no podía ser vendida a los no poseedores, alentó a los capitalistas a comprar los derechos de enfiteusis de los poseedores financieramente incapaces de comprar la tierra. El Cuadro 1 muestra que en 1837, un año después que la ley de venta de tierras fuera promulgada, hubo 35 compradores de derechos de enfiteusis por 302 leguas cuadradas. Pero a pesar de dar a los poseedores la prioridad para comprar en forma completa la tierra que tenían en enfiteusis, la escasez de capital y las altas tasas de interés les hicieron muy dificultosa la compra de tierra.²⁸

Asimismo, a causa de la falta de capital y la oferta excesiva de tierras públicas, el precio de la tierra en el mercado cayó dramáticamente. Las deprimidas estimaciones de la tierra en la década de 1830, no sólo se dieron en las ventas de tierras públicas sino también en el mercado de tierra privado. Aunque la expansión del área de 1825-1828 fue asimilada por el incremento en la demanda de tasajo, la expansión del área de la década de 1830 no fue asimilada tan rápido como en la década de 1820. De acuerdo a Broide (1951), el precio del tasajo subió un 34% en 1836 por encima del precio de 1833.²⁹ Un incremento en la demanda de tasajo, aunque implicaba la accesibilidad de un área nueva y un flujo de capital y trabajo en estas tierras, a causa de la oferta excesiva de tierras, en vez de incrementar el precio de la legua cuadrada lo disminuyó. Cuanto más al sur, más duramente caía el precio. Esto ocurría porque las incumplidas expectativas especulativas de los aumentos del precio de la tierra sucedieron esencialmente en tierras nuevas. Mientras los valores de tierra en Magdalena disminuyeron 33%, en Cañuelas declinaron 50%, en Tuyú 73% y en Mar Chiquita, 85%.³⁰ En la región central, los partidos como Escobar experimentaron una disminución del 75%.³¹ Finalmente, en la región norteña, mientras los valores del pago de Pergamino disminuyeron 17%, en Arrecifes descendieron 65%.³² Sólo durante la campaña militar de Roca en 1880 fue vendida la tierra pública a tan bajos precios. Durante los siete meses siguientes a la promulgación de la ley de 1836, 128 leguas cuadradas fueron vendidas a 34 compradores a un tamaño promedio de 3,7 leguas cuadradas y a un precio promedio de \$457 pesos plata por legua cuadrada. Este precio era 77% menor que la valuación oficial de la tierra pública (véase Cuadro 9). Luego de esta primera pequeña embestida la demanda de tierra disminuyó y el gobierno buscó estimular las ventas de tierra a través del mejoramiento de las condiciones de pago.³³ A pesar de estas ventajas, la demanda por tierras no excedió a la oferta, y en 1837, disminuyeron los precios promedio de Buenos Aires por legua cuadrada en los mercados privado y público. En ese año, el precio

promedio cayó a \$1.142 pesos plata por legua cuadrada, un descenso del 33% con respecto al año anterior (Véase Cuadro 10). En 1837, como muestra el Cuadro 8, sólo 178 leguas cuadradas distribuidas entre 34 compradores a un tamaño promedio de 5,2 leguas cuadradas fueron vendidas por una cantidad total de \$98.882 pesos plata a un precio promedio de \$555 por legua cuadrada. El gobierno se encontró entonces obligado a emitir \$4.200.000 en billetes de la Casa de la Moneda para completar parte del déficit en el presupuesto de 1837, financiado por siete millones de pesos de bonos de una emisión de 17 millones de pesos de bonos.³⁴

La repentina caída de los ingresos aduaneros causada por el bloqueo francés de Buenos Aires en 1838, indujo a Rosas a ir en busca de recursos financieros por medio de la venta de tierras públicas y la inflación monetaria. En diciembre de 1838, fueron emitidos \$16.575.000 pesos en papel moneda, aumentando la cantidad de circulante en un 80%. Las rentas de enfiteusis aumentaron de \$60 pesos plata a \$120 en tierras de cultivo, y de \$40 a \$80 pesos plata por legua cuadrada en tierras de pastoreo y, como resultado, los capitalistas privados prefirieron comprar tierra del gobierno a continuar arrendando. En efecto, en 1838, como muestra el Cuadro 9, alrededor de 600 leguas cuadradas de las 1.500 leguas cuadradas fueron vendidas a 140 compradores a un tamaño promedio de 4,2 leguas cuadradas por una cantidad total de \$240.511 pesos plata, a un precio promedio de \$408 pesos plata por legua cuadrada. Esto fue así porque la renta de mercado capitalizada, incluyendo los esperados cambios en estas rentas, era más elevada que el precio de venta de la tierra, haciendo a los poseedores preferir volverse propietarios que continuar arrendando. Como esta ley no requería ser propietarios de tierras para establecerse en la tierra antes de estar habilitados para comprarla, los propietarios de tierra ausentistas y los especuladores también le sacaron provecho.

Siguiendo este flujo de creciente disponibilidad de tierras, el precio promedio por legua cuadrada disminuyó aún más. En efecto, en 1838 en los mercados público y privado, de acuerdo al Cuadro 10, el precio promedio por legua cuadrada alcanzó \$616 pesos plata, 46% menos que en 1837. A fines de 1838, Rosas admitió que una gran porción de las 1.500 leguas cuadradas seguían manteniéndose sin vender. Esperaba, sin embargo, obtener un millón de pesos papel por este medio en 1839.³⁵ En realidad, su venta redujo, de acuerdo al Cuadro 9, \$99.222 pesos plata, o casi 1 1/2 millones de pesos papel por 365 leguas cuadradas vendidas en 1839 entre 87 compradores a un tamaño promedio de 4,2 leguas cuadradas y a un precio promedio de \$272 pesos plata por legua cuadrada. Esta última venta derribó el precio promedio por legua cuadrada en los mercados público y privado, de acuerdo al Cuadro 10, a \$451 pesos plata por legua cuadrada. Esto significó una disminución del 27% con respecto a 1838 y un 74% con respecto a 1836. Finalmente, el área total incorporada al mercado privado de tierras rurales durante el período 1836-1839, de acuerdo al Cuadro 2, alcanzó a 1.315 leguas cuadradas. Esta área estaba distribuida entre 298 propietarios nuevos a un tamaño promedio de 4,4 leguas cuadradas cada uno, o 73% del área total hasta allí distribuida en propiedad privada y, de acuerdo a las cifras del censo de 1836, casi un propietario de tierras cada cien habitantes. Además, casi todos aquellos que más tarde lucharon contra Rosas en la revolución del Sur de 1836, no fueron favorecidos por la enorme venta de tierras que comenzó en 1836. Aquellas pocas excepciones fueron los casos de Ambrosio Cramer, Ambrosio Sáenz Valiente y los hermanos Fernández de Agüero.

Donación de tierras.

Además de las ventas de tierras, el gobierno de Rosas donó casi 800 leguas cuadradas a los oficiales del ejército en 1839, a través de los vales de tierra, conocidos como "boletos de sangre". Este último apodo fue dado porque fueron expedidos en retribución por la represión de la Revolución de 1839. Los vales de tierra le asignaban a su poseedor parcelas de tierra pública donde quiera que

existieran siempre y cuando estuvieran libres de reclamos preexistentes. Si los poseedores ya tenían la tierra en enfiteusis, el vale convertía el área específica de la posesión en propiedad privada; si los poseedores no poseían la tierra, el vale los acreditaba para hacerlo.³⁶ El vale fue emitido a los soldados, a los empleados públicos y a otros en retribución por sus servicios públicos. Muchos de los beneficiarios no deseaban ser colonos y necesitaban efectivo con urgencia, y desde que el valor fue negociable pasó rápidamente a las manos de los especuladores en una fracción menor de su valor nominal.³⁷

La división de la clase dominante rural.

Como resultado de la forma políticamente discriminatoria en que la tierra pública fue asignada a fines de la década de 1830, la clase dominante rural estuvo dividida en dos facciones: aquellos que estaban previamente establecidos en la región sureña y que estaban más orientados hacia la cría de ovejas, se enrolaban en el partido unitario,³⁸ y aquellos que estaban más orientados hacia el vacuno y llegaban a la región sur, se enrolaban en el partido federal.³⁹ Aquellos vinculados con los intereses basados en las exportaciones de carne salada, fundamentalmente federales, temían que los ovejeros, fundamentalmente unitarios, pudieran desafiar su casi absoluta hegemonía. La cría de ovejas en la región del Río de la Plata fue una actividad de exportación, intensiva en mano de obra. Incluía inmigración extranjera, alambrado y una elevada tasa de densidad de población, todo lo que podría haber dado nacimiento a una nueva clase media.⁴⁰ Sacando provecho de los sentimientos chauvinistas que los bloqueos franceses generaban, cuando la Revolución del Sur de Dolores estalló en 1839 y la guerra civil hizo erupción,⁴¹ los propietarios de tierra estrechamente vinculados a la industria de la carne salada destruyeron una gran parte de aquellos establecimientos donde las innovaciones ovejeras habían sido hechas.⁴² Para frenar la influencia creciente de los propietarios de orientación ovejera, los intereses del tasajo recurrieron primero a las ventas de tierra a muy bajos precios y luego a las confiscaciones políticas.

Durante el bloqueo, los grandes propietarios de tierras incrementaron su acumulación de capital. Acumulaban sus productos en sus propias fincas, evitando de este modo los costos de transporte y almacenamiento en la ciudad de Buenos Aires.⁴³ Hacia septiembre de 1840, enormes cantidades de cuero, lana y cerda, fueron almacenadas en el campo. Estos fueron los resultados de dos años y medio de acumulación.⁴⁴ Por otra parte, los pulperos estaban forzados a cerrar o reducir severamente sus operaciones por estar privados de los medios de crédito externos. Los suministros fueron también dejados sin un mercado para productos agrícolas. Una vez finalizado el bloqueo, el comercio externo comenzó a compensar las pérdidas de treinta meses de interrupción, reparando las enormes pérdidas causadas por la guerra. Pero este fue también precisamente el momento elegido por Rosas para tomar posesión de las propiedades unitarias.⁴⁵ Un mes después del día de la confiscación de las propiedades unitarias, fue firmado un tratado con Francia y el bloqueo fue levantado.

La política de confiscación de tierras.

La política de confiscación de tierras evitó la posibilidad que los enemigos políticos pudieran reconstruir su fortaleza económica. Pero no todos los enemigos políticos perdieron sus propiedades. Una gran parte de aquellos que se opusieron a Rosas, frecuentemente llamados "salvajes unitarios", se las ingeniaron para vender sus propiedades a los extranjeros. Amenazados con tener sus propiedades embargadas por Rosas, aquellos propietarios de tierras las vendieron por debajo del precio a fin de obtener algunos recursos financieros con que sobrevivir en el exilio.⁴⁶ Sin embargo, mientras duró la crisis de hegemonía de la década de 1820, la nueva crisis política de 1840 generó una profunda caída en

los índices de tierras rurales de Buenos Aires. El Cuadro 3 muestra que el número de transacciones cayó 50%, la cantidad de leguas cuadradas vendidas cayó 60%, y el volumen de dinero invertido en el mercado de tierras rurales disminuyó 43%. Además, los Cuadros 11 y 12 muestran los nombres de los capitalistas que sacaron provecho de esta crisis comprando por debajo del precio las propiedades rurales de los propietarios en bancarota.

La cantidad de tierra comercialmente congelada como resultado de las confiscaciones políticas de tierras privadas, puede ser estimada a través de diferentes procedimientos. De acuerdo al indicador dado por la cantidad de vacunos, ovejas y caballos confiscados en 1840, 562 leguas cuadradas, o el 18% del total de tierras hasta ese momento distribuidas en propiedad privada, fueron embargadas por razones políticas.⁴⁷ Pero las confiscaciones de tierra sin redistribución ayudaron a congelar el mercado de tierras. La cantidad total de tierra susceptible de ser comercializada disminuyó casi 18%, desde 3.321 leguas cuadradas antes de la confiscación, a 2.713 leguas cuadradas después de ella. La mayor parte de los embargos ocurrió en la parte sur de la provincia de Buenos Aires, donde la revuelta de Dolores tuvo lugar. Allí, la tierra embargada por la dictadura alcanzó 469 leguas cuadradas, o el 77% del total de tierra confiscada, por un valor de \$11.407.000 pesos plata. El norte de la provincia en cambio, sufrió un impacto menor. El total de tierra confiscada alcanzó sólo 141 leguas cuadradas, o 23%, a un valor de más de \$700.000 pesos plata. A pesar del hecho que, de acuerdo al Cuadro 13, la proporción promedio de ovejas sobre vacas era menor en los pagos sureños, 32%, que en los pagos norteños, 39%, los propietarios de ovejas fueron mucho más dañados por las confiscaciones políticas que los ganaderos. La proporción de ovejas confiscadas en los pagos sureños sobre la cantidad total de ovejas existentes en ese momento en la provincia, doblaba la proporción de vacuno confiscado. Contando con las cifras provistas por Florencio Varela en *El Comercio del Plata*, está a la vista que, mientras el 10% del vacuno disponible en la provincia estaba secuestrado porque pertenecía a los oponentes de Rosas, alrededor del 20% de las ovejas fue confiscado por la misma razón.

La historia dominial de predios rurales.

Aplicando la metodología inaugurada por Borde y Góngora, por Taylor y por Brading, reconstruimos la historia dominial de predios rurales, correspondientes a catorce pagos o partidos del Buenos Aires de comienzos del siglo XIX, cuyas transacciones de dominio habían transcurrido en un total de compraventas, protocolizadas entre 1810 y 1852.⁴⁸ Sobre la base de esta reconstrucción, el Cuadro B-I demuestra que el pago con más transacciones venales promedio, es decir el pago cuyos predios cambiaron de manos más veces, fue el de la Costa de Monte Grande o San Isidro, un partido totalmente compuesto por chacras, con una media de (número de transacciones en Monte Grande/total de transacciones); y el pago de menor promedio de transacciones fue el de Areco, un partido totalmente reservado para estancias, con una media de . En la banda sur del pago de las Conchas, un distrito reservado legalmente para chacra, la media de transacciones alcanzó un promedio de ; en la banda norte de la Matanza a ; en las cabezadas de la Magdalena, a ; en la banda sur del pago de Luján, a ; y en el pago de San Andrés de Giles, a .

No obstante lo infrecuente de las propiedades o predios que padecieron una persistencia en el dominio que sobrepasara la de una sola generación, hemos podido reconstruir en el Cuadro B-II el número de generaciones por predio por pago. La persistencia en el dominio estaba dada por la cantidad de parcelas que entre 1810 y 1852 se mantuvieron en manos de las mismas familias, en la mayoría de las casos considerablemente fragmentadas. En nuestro trabajo, los nueve (9) Cuadros, correspondientes a distintas jurisdicciones o pagos, demuestran como numerosas parcelas, se mantuvieron en las manos de una misma familia durante dos o más generaciones. También se registran en dichos Cuadros

aquellos casos en que algunas ramas familiares remontaron el origen de sus propiedades al período colonial.

Las confiscaciones de tierra fueron expedidas como vengativas armas políticas más que como políticas de tierra pública. Mientras que las confiscaciones de tierras privadas de Rosas en la década de 1840 no fueron redistribuidas, las confiscaciones de las tierras de Rosas en la década de 1850 en los actuales pagos de General Belgrano y Las Flores, fueron efectivamente distribuidas durante la presidencia de Mitre. Los lotes vendidos no excedían una legua cuadrada, estableciendo un precio mínimo de \$200.000 y \$100.000 pesos papel, pagables a término. Los habitantes presentes disfrutaron de privilegios en la compra.⁴⁹ Además, de acuerdo a la ley del 12 de octubre de 1858, alrededor de 800 leguas cuadradas, donadas entre el 8 de diciembre de 1829 y el 2 de febrero de 1852, fueron invalidadas. Sin embargo, las ulteriores propuestas de reforma rural que pudieron haber privado de sus tierras a las cincuenta familias que fueron el apoyo del terrorismo de estado Rosista y distribuir las entre la gente sin tierras, no fueron seguidas.

Conclusión

El comportamiento de los precios de los bienes primarios en el mercado mundial explica mucho el ascenso en los valores de la tierra y de la especulación en arrendamientos de enfiteusis en la década de 1820. En efecto, la creciente demanda por tasajo explicó el aumento de los valores de tierra durante el primer período de enfiteusis (1822-1828). Por el contrario, los bloqueos internacionales, las guerras civiles, los ataques indígenas y las sequías, ocurridos en las décadas de 1830 y 1840, pueden ser consideradas como responsables por la caída en los valores de tierra y el fracaso en la sustitución propuesta de las vías pre-capitalistas y "neo-junker" a las vías campesinas del desarrollo rural capitalista implementada en la década de 1820.

Considerando la influencia que la escasez y las interrupciones del comercio exterior de Buenos Aires tuvieron en socavar las políticas de reforma rural, los principales retrasos ocurrieron en 1829-1832, 1838-1840 y 1845-1846. El impacto que los fenómenos bélicos tuvieron en las políticas de reforma puede ser inducido mediante los valores especulativos de tierra. En ese sentido, uno puede distinguir entre bloqueos marítimos causados por conflictos internacionales, como los de 1826-1828, 1838-1840 y 1845-1846 y las revoluciones y las guerras civiles, como las de 1828-1829 y 1839-1840. Los bloqueos marítimos, obstruyendo la comercialización de la producción, tuvieron efectos importantes en los valores especulativos de tierra. La guerra con Brasil (1826-1828) causó una caída del 40% en la cantidad de dinero invertida en el mercado de tierras. Las consecuencias del bloqueo francés (1838-1840) en el mercado de tierras estuvieron fuertemente mitigados o amortiguados por una oferta extremadamente generosa de tierra pública. El bloqueo anglo-francés de 1845-1846 causó un impacto político mayor que el bloqueo francés de 1838. Sin embargo, la incidencia económica en el mercado de tierras fue ligeramente menor. Alternativamente, las revoluciones y las guerras civiles causaron un daño mayor en la estructura productiva misma que en la comercialización para la producción. Sus efectos fueron a largo plazo y, de esa manera, fueron apenas reflejados en las estadísticas anuales de los valores especulativos de tierra.

Además, las guerras indígenas y los desastres naturales enfatizaron el fracaso de las políticas de reforma rural. Existe una elevada correlación entre los ataques indígenas y las extendidas sequías en los años 1829-1832. La única instancia en que la correlación estadística no se mantuvo fue en 1851, debido a la política pacifista seguida por el gobernador Rosas con las tribus indígenas. En efecto, los elevados subsidios o tributos con los que Rosas sobornó a las tribus indígenas eliminaron en ese momento

cualquier riesgo de ataque indio. En la primera guerra india, de la década de 1830, casi un millón y medio de vacunos perecieron o fueron robados por los indios. En el segundo ataque, que ocurrió en 1850, casi cuatro millones de ovejas murieron. En forma similar, mientras en el primer ataque el volumen de dinero invertido en la mercado de tierra experimentó una fuerte caída de alrededor del 70% y el precio promedio por legua cuadrada cayó un 50%, en el segundo ataque el volumen de dinero invertido en el mercado de tierra cayó 56%.

En suma, el fracaso de la política de reforma rural de Buenos Aires a principios del siglo XIX en tratar de descomponer el latifundio, y desalentar la especulación o, en otras palabras, transformar el desarrollo rural desde una estrategia precapitalista y comercial hacia una estrategia campesina, debe ser atribuida fundamentalmente a los bloqueos internacionales, las guerras civiles y las sequías. Asimismo, las características extensivas de la producción de bienes primarios, más la escasez de capital y trabajo, condujo a los propietarios de vacunos a sobre enfatizar la provisión de tierra en un grado más elevado que los poseedores de ovejas. Con respecto a la cantidad y calidad de los consumos requeridos, la producción de tasajo estaba caracterizada, en contraste con la lana, por una menor demanda de mano de obra y medios de transporte. Esto era verdad, en parte porque el vacuno era conducido vivo a los "saladeros" antes de ser sacrificado, mientras que la lana tenía que ser esquilada primero en el campo y entonces llevada por carro al puerto. Además, la cría de vacunos requería cantidades de tierra más baratas y más grandes que las tierras de ovejas. Esta circunstancia explica porque los arrendamientos públicos predominaban en los pagos ganaderos mientras que la propiedad privada prevalecía entre los pagos ovejeros. Los dos principales productos rurales de la época estaban estrechamente conectados con las dos principales políticas dominiales de tierra implementadas, los arrendamientos públicos y la propiedad privada. Mientras que los intereses del tasajo usaban el sistema de enfiteusis, los intereses de la lana preferían localizarse donde el sistema de propiedad privada prevalecía.

NOTAS

¹ Coni, 1927, 128.

² Mitre, 1889, 152.

³ Ibíd.

⁴ Ibíd.

⁵ Harris, 1969, 49-59; Huntington, 1968, 374-396; y Jaffe, 1960, 337-354.

⁶ Ingenieros, 1918, 376.

⁷ Antola, 1919, 107.

⁸ Frigerio, 1953, 25; y Palcos, 1960, 153-154.

⁹ González, 1957, 177.

¹⁰ Lynch, 1958, 166.

¹¹ Sala de Touron et. al., 1968, 83.

¹² Lynch, 1958, 167.

¹³ El decreto revolucionario de 1812 consistió en distribuir la tierra pública a viudas y gente pobre que luchó por la independencia. Mientras en la banda occidental del Río de la Plata esta ley cayó en letra muerta, en la banda oriental, la mayor fuente de cueros durante el siglo XVIII, debido a la mayor presión de población, a la inexistencia de tierra libre y a una distribución injusta de territorio, se desencadenó en 1815 un proceso radical al más puro estilo reformista burgués. Este proceso consistió en confiscar la tierra de los propietarios españoles y de Buenos Aires y distribuirla en pequeños lotes de una legua cuadrada cada uno, entre miles de campesinos y soldados. Este proceso fue inmediatamente frustrado por la toma de mando portuguesa (Barrán, 1964; Torre, 1969; y Halperín, 1972, 306).

¹⁴ Montoya, 1971.

¹⁵ Coni, 1927, 138.

¹⁶ Watkins, 1967, 58.

¹⁷ Coni, 1927, 30 y 39.

¹⁸ Ramos Mejía, 1907, 158.

¹⁹ La superficie total transferida puede ser determinada substrayendo de la cantidad total de transferencias, aquellas parcelas que habían sido transferidas en dos o más oportunidades. De acuerdo al Cuadro 8, como sólo 15 rotaciones entre 119 rotaciones se distribuyeron con parcelas previamente transferidas de manera semejante, en otras palabras, transferidas en dos oportunidades, cubriendo una superficie de 102 leguas cuadradas, encontramos que sólo 104 derechos enfiteúticos consistieron en parcelas transferidas en sólo una oportunidad, cubriendo una superficie de 768 leguas cuadradas. En el siguiente período (1834-1838) estas tierras nuevas experimentaron nuevas rotaciones, totalizando 55 transacciones en 462 leguas cuadradas.

²⁰ Halperín Donghi, 1968, 58.

²¹ Bagú, 1966.

²² Halperín Donghi, 1972, 194.

²³ Reber, 1979, 17.

²⁴ Giberti, 1966, 131.

²⁵ Brown, 1978, 172.

²⁶ Registro Oficial, 1836, 41.

²⁷ Giberti, 1966, 131; y Halperín Donghi, 1982, 219.

²⁸ Burgin, 1946, 253.

²⁹ Broide, 1951, 179.

³⁰ Archivo General de La Nación (AGN), Protocolos del año 1836, Registro 1, f. 460v.; Reg. 2, f. 217; Reg. 4, fs. 64v., 144v. y 197v.; Reg. 6, fs. 32, 145, 263, 265v. y 372.

³¹ AGN, Protocolos, Reg. 4, año 1836, fs. 124.

³² AGN, Protocolos, Reg. 6, año 1836, fs. 12, 298 y 341.

³³ Burgin, 1946, 200 y 254.

³⁴ Randall, 1977, 59.

³⁵ Mabragaña, 1910, 396.

³⁶ Randall, 1977, 49.

³⁷ Algunos autores consideran que la incontrolada emisión de vales de tierras en la provincia de Buenos Aires a fines de la década de 1830 fue la causa de la caída en los valores de la tierra (Carretero, 1972, 28). Al asumir esto, confunden las causas reales de la caída en los valores de la tierra. Esta relación causa-efecto es falsa porque confunde el mercado de tierras con el mercado de vales de tierra. Los vales de tierras pudieron haberse depreciado sin arrastrar la devaluación de la tierra. Al adoptar esta falsa vinculación confunden las causas reales detrás de la caída de los valores de la tierra, que fueron esencialmente el creciente abastecimiento de tierras a través de las ventas públicas y la extrema escasez de lingotes generada por el bloqueo marítimo europeo.

³⁸ El partido unitario busca la destrucción de las autonomías provinciales a fin de modernizar el campo e incorporarlo más rápidamente al mercado mundial capitalista. Mientras que los propietarios de tierra federales se asociaban directa y firmemente con los procesos de manufactura de la carne salada, el terrateniente unitario, por causa de razones estructurales, tenía que depender de intermediarios o agentes para vender al por mayor sus productos o, de lo contrario, repartirlos en los corrales públicos.

³⁹ El partido federal aspiraba a perpetuar las autonomías provinciales a fin de beneficiar las respectivas oligarquías provinciales en su objetivo de preservar el statu quo.

⁴⁰ Ortíz, 1965, 61.

⁴¹ La Revolución del Sur de Dolores consistió en un levantamiento popular liderado por los propietarios de tierras del sur de la provincia de Buenos Aires contra la dictadura de Juan Manuel de Rosas. Entre las causas económicas que ayudaron a promover la rebelión, se debe enfatizar la imposibilidad de exportar bienes primarios a Europa a causa del bloqueo francés.

⁴² Jurado, 1875, 155.

⁴³ Halperín Donghi, 1982, 223.

⁴⁴ Varela, 1911.

⁴⁵ Varela, 1911; y Halperín Donghi, 1982, 226. Sobre los embargos a los "unitarios" de la campaña de Buenos Aires, ver Gelman y Schroeder, 2003.

⁴⁶ Varela, 1911.

⁴⁷ La cantidad total de tierra embargada por Rosas puede ser estimada aproximadamente a través de la cantidad de vacunos confiscada. De acuerdo a Varela, 650.000 cabezas de ganado fueron confiscadas, o el 10% del vacuno existente a un valor de 20 millones de pesos. Estas incluían 475.000 cabezas en los pagos del sur y 184,100 cabezas en los del norte, que con una proporción de 1.350 cabezas por legua cuadrada, podían dar cuenta de casi 488 leguas cuadradas embargadas, o 352 leguas cuadradas y 136 leguas cuadradas, respectivamente. Asimismo, 26.000 ovejas fueron confiscadas, o el 20% de las ovejas existentes a un valor de \$678.000; 154.000 cabezas en los pagos del sur y 72.000 cabezas en los pagos del norte, que con una proporción de 15.000 ovejas por legua cuadrada podían dar cuenta por 15 leguas cuadradas, o 10 leguas cuadradas y 5 leguas cuadradas, respectivamente. En forma similar, casi 70.000 caballos fueron confiscados, que con una proporción de 1.200 cabezas por legua cuadrada, daban cuenta de 59 leguas cuadradas embargadas. Pero, puesto que mucha de la propiedad entonces confiscada no estaba totalmente consolidada con ganado, debemos presumir que la cantidad de tierra embargada era mucho mayor. En cambio, si para encontrar la cantidad real de tierra embargada combinamos las listas publicadas por Varela con mis datos rurales inéditos, concluimos que el efecto económico neto de las confiscaciones de tierras fue el de fijar o inmovilizar 608 leguas cuadradas, 46 leguas cuadradas más que a través del método previo.

⁴⁸ Lamentablemente, esta obra permanece inédita por lo costoso de su publicación.

⁴⁹ Cárcano, 1972, 115.

TOMO XIII

Capítulo 7

La base económica de la República Oligárquica. La Distribución de la tierra de frontera en la Provincia de Buenos Aires (1852-1890).*

portfolio paper depositado en el programa de doctorado de la Washington University, en St. Louis, Missouri);

Desde los comienzos, la distribución de tierras en las regiones de frontera de las pampas argentinas dio origen a un debate con perspectivas opuestas que subsiste hoy en día. Una primera perspectiva (Coni, 1920, 1927), pone el énfasis en la influencia que la propiedad privada, y consecuentemente el mercado, podría haber tenido en la definición del patrón dominial de las tierras de cultivo, no así en el de las tierras de pastoreo.¹ De la otra parte, una perspectiva crítica (Oddone, 1930; y Sábato, 1989) puso el énfasis en el papel que los factores políticos e institucionales pudieron haber tenido en la distribución inicial de la tierra pública, que consolidó la formación de la, llamada por algunos, oligarquía argentina. En este capítulo, parto desde ambas perspectivas, con el fin de intentar analizar el volumen y la intensidad del mercado de tierra en las pampas argentinas, luego de la dictadura de Rosas.

Luego de la política rivadaviana de reforma rural, hubo otros proyectos de reforma; aquellos ensayados durante las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda (1862-1880). Estas reformas diversificaron la producción nacional, promovieron la inmigración extranjera, establecieron un límite en el tamaño de los lotes de tierras para ser enajenados en venta pública y exigieron el poblamiento previo como un requisito para adquirir tierra pública. Durante estos gobiernos se libró una lucha entre tendencias progresistas orientadas hacia el ganado ovino y otras tendencias orientadas hacia los intereses vacunos, logrando la sanción de algunas leyes y decretos que intentaban promover la cría de ovejas y la agricultura.² Los resultados de estas reformas, no obstante, fueron contradictorios. No consiguieron desbaratar el latifundio ni desalentar la especulación. La naturaleza de la economía de Buenos Aires orientada a la producción de materias primas, socavó los honestos fines de aquellas políticas de reforma rural. De este modo, el fracaso de la reforma de Mitre abrió la puerta para la política de contrarreforma de Roca.

Las olas de migración externa e interna.

En las pampas argentinas, las presiones más intensas por reforma agraria, desde el punto de vista de la población que la apoyaba, provenían principalmente de las olas de migración externa e interna constituidas por especuladores y habitantes. No provenían de una presión que se originaba en el crecimiento demográfico local. En contraste a la reforma agraria convencional de inspiración populista,

las reformas agrarias marginales, tal como aquellas practicadas en la pampa argentina durante el siglo XIX, fueron motivadas --de acuerdo con la clasificación de reformas rurales de Antonio García-- para preservar la estructura latifundista. Esto fue hecho por medio de la distribución de tierras nuevas en regiones periféricas y por trabajos de infraestructura física. Estas desviaciones aceleraron una sobrevaluación de tierras y mejoraron los canales de acceso al mercado que fortalecían al latifundio.³

El substrato ideológico de este modelo de reforma agraria, se inserta en la tradición liberal que identifica el progreso económico con la simple modernización de las condiciones de crecimiento agrario, medida en términos de producto per capita. De acuerdo con esta idea, era posible incrementar el producto per capita, a fin de obtener mayor empleo,⁴ una distribución más equitativa del ingreso y una más amplia y más relevante estructura de demanda para el sector manufacturero creciente, incorporando simplemente nuevas tierras por medio de la expansión de la frontera agraria, hacia el sur y el oeste.⁵ Pero la característica institucional más notable de la reforma agraria regional es el hecho que mientras la densidad de población crecía en el campo, disminuyó la proporción de propietarios de tierra sobre el total de la población, sumada a la inmigración neta extranjera e interna.⁶

La tendencia acumulativa en la apropiación de tierra pública.

La persistencia de la tendencia acumulativa de tierras públicas en manos monopolísticas, comenzada por los otorgamientos de la enfiteusis rivadaviana en 1823-1826 y las ventas de Rosas en 1836-1839, puede ser verificada analizando la distribución de la propiedad privada rural en la provincia de Buenos Aires treinta años más tarde usando los datos de la Contribución Directa de 1867. La Contribución Directa consistía en un impuesto directo sobre la propiedad privada de la tierra. Los registros de la Contribución Directa cubren sesenta y nueve pagos de la provincia de Buenos Aires. Los he agrupado en tres diferentes regiones de acuerdo a los criterios geográficos usados en el censo de 1869. Consistían en las regiones norte, central y sur. Cada una de las tres regiones incluían pagos de antigua y reciente colonización. Los últimos son pagos de frontera en vista de que se introducían territorio indígena. Además, en cada una de las tres regiones había tres diferentes tipos de distribución de la tierra: a) donaciones reales asignadas en el siglo XVII; b) ventas reales hechas en "moderada composición" durante el virreinato; c) ventas practicadas durante el Directorio (1816-1819); d) arrendamientos distribuidos en enfiteusis (1822-1838); y e) arrendamientos públicos otorgados entre 1857 y 1875.

Examinando la extensión promedio de las propiedades rurales, es evidente que cuanto más grande era la distancia que las separaba de Buenos Aires, más grande era el tamaño de los predios rurales. Había también una más grande subdivisión de tierra en la región nortea y una menor en la región central y la región sur. El área promedio de un predio en la zona norte era de 1.000 hectáreas. En la zona central, alcanzaba las 1.800 hectáreas. La zona sur alcanzaba las 6.044 hectáreas o 2,24 leguas cuadradas. En la región nortea, debido a la relativamente prematura ocupación, esencialmente en las tierras cercanas a la costa del Paraná y al Río de la Plata, una división extrema de la tierra, obstaculizaba el predominio del latifundio. En esta región prevalecían las propiedades pequeñas y medianas o el minifundio. Este era el caso de Pilar, Capilla del Señor, San Nicolás, Zárate, San Andrés de Giles, Baradero, San Antonio de Areco y San Pedro. De acuerdo al Cuadro 1, en 1867, en la región nortea, 1% del total de los propietarios de tierras (aquellos que poseían más de 1.000 hectáreas) controlaban el 20% de la tierra, mientras que el 99% de los propietarios de tierras (aquellos que poseían menos de 10.000 hectáreas) controlaban el 80% de la tierra. El uno por ciento de los propietarios de tierras que poseían grandes predios de 10.000 hectáreas o más, estaban localizados en los pagos de Rojas, Ramallo, Arrecifes y Pergamino. En la región central, el 2% de los propietarios de tierras

(aquellos que poseían más de 10.000 hectá_eas) poseían el 24% de la tierra, mientras que el 98% de los propietarios de tierras (aquellos que poseían menos de 10.000 hectá_eas) controlaban el 76% de la tierra. El 2% de los propietarios de tierra que poseían predios de 10.000 hectáreas o más estaban localizados en pagos de reciente colonización o pagos de frontera como Carmen de Areco, Salto, Chacabuco y Veinticinco de Mayo. En la región sur, en cambio, el 7% de los propietarios de tierras (aquellos que poseían más de 10.000 hectá_eas) controlaban la mitad de la tierra, mientras que el 93% de los pequeños propietarios controlaban la otra mitad. Entre los treinta pagos de la región sur, mientras que cuatro pagos no tenían predios de más de 10.000 hectá_eas, había también seis pagos donde no había predios de menos de 1.000 hectáreas. Los pagos con más predios por encima de 10.000 hectáreas eran Tandil y Balcarce con 13 unidades cada uno, seguidos por Pila, Mar Chiquita y Monsalvo con 10 unidades cada uno.

Con el fin de confrontar la distribución de tierras en dos diferentes momentos en el tiempo, he tenido que seleccionar un área geográfica homogénea. Para el propósito de comparar la superficie promedio de las ventas de Rosas con la distribución promedio de la propiedad privada reflejada en la Contribución Directa de 1867, he tenido que calcular sólo aquellos pagos de la región sur que correspondían a la tierra vendida entre 1836 y 1839. En efecto, la superficie promedio de aquellos pagos sureños descendió de 4,4 leguas cuadradas en 1836-1839 a 3,5 leguas cuadradas en 1867, un descenso de sólo el 20%. Fue en la región sureña, donde el avance de la frontera se había incrementado, formando nuevos pagos al sur del río Salado, donde los predios de grandes extensiones fueron establecidos. Los pagos de no tan reciente colonización pero que estaban localizados al sur del río Salado, como Azul, Tandil y Tapalqué, muestran características de pagos de frontera con grandes predios privados. En los nuevos pagos de frontera se observó el predominio del latifundio en Necochea, donde estancias de menos de 10.000 hectáreas no existían, seguido por Mar Chiquita donde diez estancias, o el 62% de todas las fincas, poseían el 94% de la superficie ocupada por propiedades privadas; luego Pila, donde diez estancias, o el 42%, poseían el 90% de la tierra; Monsalvo (luego Maipú), donde diez estancias, o el 38%, poseían el 86% de la tierra; Tuyú (luego General Lavalle) donde nueve estancias, o el 50%, poseían el 86% de la tierra; y finalmente Balcarce, donde 13 estancias, o el 26%, poseían el 71% de la tierra (Véase Cuadro 1).

Cantidad de ventas de tierras.

Esta leve disminución en la superficie promedio podría deberse no sólo a las alianzas de parentesco a través del matrimonio sino también a pocas subdivisiones comerciales. Las últimas consistieron en ventas privadas practicadas entre 1840 y 1867. De acuerdo a mi banco de datos, la cantidad de ventas de tierras entre 1840 y 1856 alcanzó un total de sólo 589 transacciones en 853 leguas cuadradas, o el 26% de la tierra total hasta ese momento distribuida, y con un valor de \$2.119.433. Estas bajas cifras se debieron esencialmente al hecho que la tierra se encontraba inmovilizada como resultado de los bloqueos marítimos, las sequías y las confiscaciones "políticas" de los productores orientados hacia el ganado ovino. Cuando las potencias europeas bloquearon el puerto de Buenos Aires en 1846, como muestra el Cuadro 2, el número de transacciones cayó el 26% y la cantidad de dinero invertida en el mercado de tierras descendió también un 35%. La expansión subsecuente del mercado de tierras rurales en 1847 y 1850 se debió a las reanudaciones transitorias del pago de intereses en la deuda externa por el gobierno de Rosas. Se debió también a la creciente emisión de circulante, y, más importante, al incremento de la demanda cubana y brasilera por el tasajo Rioplatense. El miedo a una invasión militar liderada por el general Justo José de Urquiza, el gobernador de la vecina provincia de Entre Ríos, un nuevo líder popular post-Rosas,⁷ con la ayuda del ejército brasilero, más una severa sequía en 1851, también abatieron los precios de la tierra en Buenos

Aires. En efecto, de acuerdo al Cuadro 2, en 1851, el número de transacciones descendió un 39%. La cantidad de leguas cuadradas vendidas cayó un 62%. La cantidad de dinero invertido en el mercado de tierras cayó un 56%.

La unión de los intereses terratenientes.

Caseros, la batalla en la que Rosas fue derrotado en febrero de 1852, representó la culminación de un régimen populista autoritario. Sin embargo, no conmovió las raíces económicas de una economía de exportación de bienes primarios, ni significó la disolución del latifundio.⁸ La necesidad de enfrentar a Urquiza, en su ansiedad de tomar posesión de la Aduana de Buenos Aires, unió a la restaurada oligarquía unitaria terrateniente de Buenos Aires con la oligarquía federal terrateniente de Buenos Aires. Esta inestable coalición generó la revolución del 11 de septiembre de 1852, siete meses después que Rosas fuera derrotado en el campo de batalla de Caseros. Esta revolución generó la secesión temporaria de la provincia de Buenos Aires del resto de la Confederación. Como uno de los resultados de esta secesión, la nueva élite porteña hizo un compromiso con la antigua oligarquía terrateniente federal ratificando las ventas de tierras de Rosas y rechazando el reconocimiento de las donaciones de tierras de tiempo de Rosas.⁹

El arrendamiento de tierras públicas.

A fines de la década de 1850 una nueva política de reforma rural, que extiende la frontera sur a expensas de las tierras públicas e indígenas, fue observada por la creciente burguesía mercantil sin tierras como la mejor alternativa a las confiscaciones de tierras de los Rosistas.¹⁰ Su interés en una reforma agraria se originó en la perspectiva de provechos futuros más allá de la especulación de tierras. La primera herramienta maestra para disolver el monopolio estatal de tierras públicas, fue concebida a través del sistema de arrendamiento. Además, los intereses orientados hacia el ovino intentaron implementar los nuevos arrendamientos públicos para erradicar el ganado vacuno de las tierras de la frontera alentando un proceso de modernización de tierras a través de la cría de ovejas. La oveja desplazó al ganado vacuno de las mejores tierras cercanas a la capital, donde predominaba la propiedad privada, hacia la periferia fronteriza, donde prevalecían los arrendamientos públicos.

Sin embargo, el arrendamiento, como la enfiteusis antes, mostraba la misma tendencia de predominio del latifundio en pagos de colonización reciente o pagos de frontera. No obstante, es engañoso presumir que el arrendatario de la tierra pública perteneciera al mismo sector social que el propietario de tierras privado. Aunque ambos eran empresarios capitalistas porque ambos empleaban mano de obra asalariada en el mercado laboral y tomaban préstamos de dinero en el mercado de crédito, la mayoría de los arrendatarios, a diferencia del propietario de tierras privado, fracasaban en sostener su negocio rural. Los arrendamientos públicos, como la enfiteusis antes, estaban sujetos al mercado de la oferta y la demanda de arrendamientos de tierras, y experimentaron finalmente el mismo proceso de acumulación que las propiedades privadas.

Este proceso de acumulación de arrendamientos de tierras públicas puede ser observado a través del análisis de la información obtenida de los registros notariales de la Escribanía Mayor de Gobierno. Comenzando a partir de estos datos obtuve una suerte de perspectiva seccional, examinando exclusivamente los arrendamientos otorgados durante el período entre 1860 y 1867. Así, en la región nortea, los únicos dos pagos con arrendamientos públicos eran los pagos de Pergamino y Rojas. En la región central, ocho pagos poseían arrendamientos públicos. Eran Chacabuco, Salto, Carmen de Areco y los pagos de frontera de Veinticinco de Mayo, Lincoln, Junín, Nueve de Julio y Bragado. En los

últimos cuatro pagos, la propiedad privada era casi inexistente. La más elevada proporción de arrendamientos de tierras públicas sucedía en la región sureña. Esta es la región de más reciente colonización en la frontera. En ella observé arrendamientos públicos en las localidades de Chascomús, en el interior del río Salado y subsecuentemente en catorce pagos al sur de este río. De entre estos catorce pagos, ocho lindaban con la frontera indígena, donde los arrendamientos públicos predominaban.

Cuanto más reciente era la colonización de un pago, mayor era la proporción de arrendamientos públicos sobre la propiedad privada. Por ejemplo, de acuerdo al Cuadro 3, en la región norteña, estaba Pergamino, un pago con una colonización más antigua que tenía una proporción de 1,23. En la región central, un pago como Veinticinco de Mayo, donde la tierra estaba dividida casi equitativamente entre propietarios y arrendatarios, la proporción mantenida era de 1. Un pago como Bragado, en cambio, tenía una superficie de tierra en arrendamiento nueve veces mayor que la de propiedad privada. Finalmente, pagos como Lincoln, Junín y Nueve de Julio se encontraban en arrendamiento completo, no teniendo ninguna propiedad privada. En la región sureña, los pagos de Lobería y Necochea tenían las proporciones más elevadas de arrendamiento público sobre propiedad privada, seguidos por los pagos de Azul, Tapalqué, Patagones y Saladillo.

Cantidad de tierra distribuida.

Determinar la cantidad de tierra distribuida entre los arrendadores a través del sistema de arrendamiento requiere de varios cálculos. Comenzando con la sanción de la Ley de Arrendamiento de 1857 hasta 1875, el número total de arrendadores llegó a 524, y el área distribuida ascendió a 1.641 leguas cuadradas, o el 25% de la tierra total establecida hasta ese momento. Teniendo en cuenta el hecho de que muchos de estos otorgamientos fueron distribuidos por el gobierno provincial en tierras que habían sido previamente distribuidas en enfiteusis o arrendamientos, el número de arrendadores y el área territorial de la que el estado provincial se desprendió era mucho menor que las 1.641 leguas cuadradas mencionadas. En realidad, el área de nuevas tierras sujetas a la venta y al arrendamiento público, entre 1857 y 1875 (columna 3 del Cuadro 4), es la diferencia entre la superficie arrendada (1.641 leguas cuadradas) (columna 1 del Cuadro 4) y aquella transferida (362 leguas cuadradas) (columna 2 del Cuadro 4), o un total de 1.279 leguas cuadradas.¹¹ Consecuentemente, el área total del mercado de tierras rurales en 1875 puede ser deducido sumando tanto el área en dominio privado antes de 1857 (3.800 leguas cuadradas) como aquella de la aplicación de la ley de arrendamientos (1.279 leguas cuadradas); esto es un total de 5.079 leguas cuadradas. Por lo tanto, el área otorgada en arrendamiento o venta entre 1857 y 1875 ascendió al 25% del total de tierras ocupadas.

El proceso de arrendar nuevas tierras públicas en Buenos Aires experimentó amplias fluctuaciones durante el período entre 1858 y 1875 (columna 3 del Cuadro 4). El número más grande de arrendamientos otorgados fue registrado en 1864, 1865 y 1866 como resultado de la reducción del estipendio de arrendamiento al 20%, ordenado por el Gobernador Mariano Saavedra. Hubo una aguda disminución en la cantidad de tierra arrendada en 1867 y 1868 debida a la restitución de las elevadas valoraciones fiscales de 1858 por el Gobernador Adolfo Alsina, sobre cuya base fue estipulada la recolección del estipendio. Durante los años 1869-1870 fue generada la última suba. Finalmente, comenzando en 1871, el arrendamiento de tierras públicas desapareció gradualmente, aunque hubo un breve y pequeño renacimiento durante los años 1879-1881.

Ventas de tierras públicas.

Este largo proceso de distribución de tierras públicas por medio de arrendamientos fue acompañada por sucesivas distribuciones de tierra a través de puras y simples ventas. La cantidad total de tierra pública, cuyo absoluto dominio la provincia de Buenos Aires vendió a propietarios privados, alcanzó las 2.263 leguas cuadradas en el período 1857-1875. (Véase Cuadro 5).

Con respecto a las proporciones de ventas y arrendamientos anuales de tierra pública en la provincia de Buenos Aires, durante este período, encontré, comparando las columnas 3 y 5 del Cuadro 4, el predominio de arrendamientos con respecto a ventas, con excepción de los años 1860 y 1867. Entonces, comenzando en 1872, el predominio de la venta sobre el arrendamiento fue absoluta. Confrontando las estadísticas de los arrendamientos y ventas acumulados en las columnas 4 y 6 del Cuadro 4, es evidente que 1872 fue el momento crucial de la curva, en el que la cantidad total de tierras vendidas por vía judicial por el estado, excedió, por primera vez, la cantidad total de tierras arrendadas. Esta última diferencia nos muestra que en ese momento, por primera vez, el estado provincial agotaba sus reservas en tierras arrendadas y se veía a sí mismo en la necesidad de dirigirse a nuevas tierras públicas. Lo hizo de esa manera, fuera de la línea de frontera hasta entonces aceptada, para satisfacer la creciente demanda de tierra.

Finalmente, la mayoría de los arrendatarios individuales de tierras públicas bajo la ley de 1857, enumerados por Jacinto Oddone, fracasaron en comprar tierra cuando el gobierno la ofreció en venta en 1871. En efecto, como el Cuadro 6 demuestra, durante la década de 1860, tuvo lugar un muy dinámico proceso de tenencia de la tierra, donde la mayoría de los primeros arrendatarios perdieron sus tierras frente a los nuevos arrendadores quienes, finalmente, serían aquellos capaces de comprarlas al estado. De acuerdo al Cuadro 6, entre 1865 y 1870, fueron contratados un total de 188 transferencias de arrendamientos públicos, en suma 466 leguas cuadradas.

Patrones de inversión individual de tierra.

Las discontinuidades en el patrón de inversión individual de tierra era otro ítem que merece analizarse. Por ejemplo, casi ninguna de las familias que compraron tierra durante el período de Rosas (1836-1839), reinvirtieron sus ganancias en tierra después de 1871. Comparando la lista que trae Oddone sobre ventas de Rosas, con los datos que he reunido, revela que ni las familias Anchorena, Alzaga, Baudrix, Cano, Dorrego, Miguens, Pacheco, Sáenz Valientes ni Vela, que eran las más grandes propietarias de tierra, compraron tierra bajo la ley de tierra de 1871. Ciertamente, el requerimiento legal para establecerse en la tierra antes de ser calificado para comprarla, obró en contra de los más antiguos y más grandes propietarios de tierra.¹²

Los precios de la tierra en las ventas públicas.

La lucha contra el latifundio y la especulación continuó después en otras formas más sutiles. Una vez que terminó el debate acerca de si debía llevarse a cabo la enfiteusis o las versiones de arrendamiento, y que triunfaron los proyectos de propiedad privada, la principal cuestión para el debate fue sobre como influyeron los precios de la tierra en las ventas públicas, la especulación y el latifundio. Este debate público ocurrió cuando fue promulgada la ley del 14 de noviembre de 1864. Polarizó a los miembros del parlamento entre aquellos que eran de orientación vacuna y que promovían argumentos sociales para los precios bajos (Emilio Agrelo y Miguel Estévez Seguí) y aquellos otros que eran de orientación ovina y que defendían los precios elevados (Manuel Quintana, Lucio Mansilla y Miguel Angel Montes de Oca).¹³ Mientras los precios fijos estaban asignados para los poseedores reales, las subastas públicas estaban permitidas sólo en aquellos casos donde los poseedores no podían comprar la

tierra que alquilaban. Pero como en la mayoría de los casos los poseedores podían comprar la tierra que alquilaban, las subastas públicas fueron reducidas al mínimo. Por eso es que era del interés de los terratenientes porteños, de la franja norte, mantener elevados los precios de la tierra, de manera de impedir el acceso fácil a la propiedad de la tierra a los nuevos poseedores.

El período lanero.

La nueva orientación exportadora vino a caracterizar lo que se conoce como el período lanero. La producción de lana tuvo una gran expansión al mismo tiempo que el volumen del comercio exterior: de 12.000 toneladas en 1856 a 120.000 toneladas en 1884.¹⁴ Mientras tanto, los precios del tasajo en Río de Janeiro disminuyeron un 42% entre 1859 y 1861, de 4.750 reis (\$15 pesos plata) por arroba (alrededor de 11 1/2 kg.) a 2.750 reis (\$9 pesos plata).¹⁵ La caída en la demanda del tasajo, para alimentar a los esclavos cubanos y brasileiros, fue resultado de la disminución en la demanda de azúcar por el mercado de Estados Unidos debido a la Guerra Civil en ese país.

Comparando por pago la proporción de vacunos sobre ovinos y la proporción de otorgamientos y rotaciones de derechos dominiales sobre las ventas públicas y privadas, puedo confirmar el creciente proceso de modernización de tierras a través del ovino. La proporción de vacunos sobre ovinos disminuyó en áreas cercanas al puerto capitalino donde la propiedad privada predominaba, desplazando al vacuno desde las mejores tierras a la periferia, donde los arrendamientos públicos predominaban.¹⁶ Las tierras de frontera distribuidas en arrendamientos públicos, fueron encontradas inadecuadas para el ovino hasta tanto los pastos duros fueran devorados a sus anchas por el vacuno.¹⁷ En la región central, en los pagos de Junín y Bragado, a pesar de tener una elevada proporción de tierras en arrendamiento público por sobre las tierras en propiedad privada, el ovino predominaba. En contraste, en los pagos de Lincoln y Nueve de Julio, el patrón de establecimiento fue de tipo tradicional, donde el número de vacunos era casi el doble del número de ovinos. En la región sur, los únicos pagos donde ambas proporciones no tenían correlación eran Pila y Necochea. Mientras la proporción en Pila de arrendamiento público sobre propiedad privada estaba por debajo de uno -0,15-, su proporción de vacunos sobre ovinos estaba por encima de uno -1,1-. Esta falta de correlación puede ser explicada por la naturaleza de las tierras de Pila, donde prevalecían los pastos duros, las tierras bajas, y las inundaciones. Asimismo, mientras la proporción en Necochea de arrendamiento público sobre propiedad privada estaba por encima de uno: 1,23, su proporción de vacunos sobre ovinos estaba por debajo de uno: 0,16.

Los valores de mercado de las tierras en enfiteusis y arrendadas también variaban de acuerdo a si predominaba el vacuno o el ovino. Cuanto más al sur y más orientado al vacuno estaba un pago, más barato era el valor de la legua cuadrada arrendada. Esta afirmación puede ser probada por medio de alguna de las transacciones registradas en presencia de notarios públicos, que mantenían un registro de sus valores. En efecto, por sólo cinco números dados en los datos que he recogido acerca de cinco diferentes pagos de la provincia de Buenos Aires -Bolívar, Junín, Lobos, Tandil y Tapalqué-, en los pagos localizados fuera de la línea de frontera, como Junín, Lobos y Tandil, donde el ovino predominaba, el valor de mercado de la legua cuadrada arrendada ascendía a cifras extremadamente elevadas, en el orden del 50% o 60% del valor de mercado de la legua cuadrada vendida.

Impacto de las crisis económicas.

Las crisis económicas jugaron un rol significativo en el debilitamiento de las políticas de reforma rural, causando una disminución en la tasa de especulación y reforzando el latifundio. Un

descenso en la tasa de especulación refuerza necesariamente el latifundio porque una más reducida cantidad de postores para la misma cantidad de tierra promovía un mercado de compradores. Las crisis económicas mundiales forzaron a los más débiles propietarios de tierra y arrendadores a irse del mercado. En forma similar, las crisis internas, como las guerras civiles, las sequías y los ataques indígenas socavaron la posición de los pequeños propietarios de tierra. De esta manera, contribuyeron al fracaso de las políticas de reforma rural. La gran sequía de 1865 y la disminución de la protección en la frontera indígena a causa de la guerra contra el Paraguay, provocaron en 1865 una fuerte caída en las ventas de tierra pública, así como en la especulación en el mercado de tierras rurales. Entre los factores que causaron la crisis de 1866, la escasez de circulante fue la más importante. Olivera señaló que desde 1864, la cantidad de circulante disponible comenzó a volverse escasa. La inflación, en cambio, no fue un serio riesgo antes de 1866. Debido al enorme incremento de producción, agrega Olivera, la consecuencia de esta escasez fue agravada, siendo un índice de ello la elevada tasa de interés del 18% y 24% anual, que fue debitada por los préstamos en 1866.¹⁸ Pero cuando la crisis estaba en su peor momento y la bancarrota de los poseedores de tierra era inevitable, nuevas evaluaciones de tierra fueron ordenadas en 1866 por el nuevo Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Adolfo Alsina, quien reestableció los valores que existían antes de 1863, obligando a los propietarios de tierra a pagar un 20% más en contribuciones directas.¹⁹

Como resultado de esta crisis económica, la cantidad de leguas cuadradas puestas a la venta en Buenos Aires en 1866 cayó un 82% y el volumen de dinero invertido en el mercado de tierras cayó un 52% (Véase Cuadro 7). Los valores de tierras rurales fueron golpeados por la crisis a diferentes niveles. Mientras el pago agrícola de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, sufrió una caída del 64%, el pago ovejero de Marcos Paz experimentó una disminución del 42%. Los pagos ganaderos como Tapalqué y Balcarce en la provincia de Buenos Aires registraron una caída del 38% y 31%, respectivamente. Por otra parte, diversos factores compensaron parcialmente los efectos locales de la crisis. Aquellos factores fueron la venta de tierras públicas, que proveyó de ingresos al tesoro público, la provisión del ejército durante la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), que produjo un mayor incremento en la industria y el comercio, y los préstamos externos, que consolidaron la circulación de papel.

Auge ficticio de precios de tierra.

En el período de entrecrisis entre 1867 y 1874 ocurrió un auge ficticio de precios de tierra. El exceso de crédito internacional más la excitación causada por la derrota militar de Paraguay en la Guerra de la Triple Alianza y la de los indios ranqueles bajo el liderazgo de Calchufurá en la batalla de San Carlos, provocó una especulación ingobernable en tierras rurales. El precio promedio por cada legua cuadrada subió, como muestra el Cuadro 2, un 88% en el mercado privado de tierras rurales y un 54% en los mercados de tierras rurales, tanto público como privado, después de 1867. La tierra en Las Flores, Bragado, Balcarce, General Alvear, Salto y Pergamino produjo, de acuerdo a los datos que he recogido, los precios más elevados. Igualmente, la tierra en Lincoln, Tapalqué y los lugares desérticos experimentó un elevado número de rotaciones. Además, como resultado de la ley de tierras de 1871, la política de reforma rural, que comenzó en 1858, recibió un fuerte impulso. Un total de 615 ventas en 1.402 leguas cuadradas a un tamaño promedio de 2,28 leguas cuadradas por cada propietario de tierras fueron vendidas en el período 1872-1873, un 35% menos que en la superficie promedio predominante en los más recientemente establecidos pagos sureños (Véase Cuadro 8). Esta ley representa el pico de las políticas de reforma rural iniciadas por Mitre en 1858.

La crisis financiera de 1874.

La crisis financiera de 1874 precipitó el fracaso de la política de reforma rural intentada por la ley de tierras de 1871. Esta crisis, como otras, fue acelerada por las interrupciones de préstamos externos. El balance de comercio para los cinco años previos (1869-1873) se cerró en 1874 con 94 millones de pesos papel en rojo. La tasa de interés en el mercado de dinero subió al 15%, y la inmigración de ultramar descendió un 65%, de 40.000 a 14.000 hombres. Además, una sequía causó una tasa de mortalidad entre el ganado del 28%.²⁰ Como resultado, los valores de tierra experimentaron un fuerte deterioro. El cuadro 2 muestra como el número de transacciones cayó un 54%, la cantidad de leguas cuadradas vendidas cayó un 66%, y el volumen de dinero invertido cayó un 70%. Consecuentemente, los precios de la tierra también experimentaron el impacto de la crisis. El precio de la tierra en los pagos de Olavarría y Tapalqué cayó un 55% y un 50%, respectivamente. Los pagos de Arrecifes (hoy Bartolomé Mitre), Brandsen y Juárez siguieron la lista con disminuciones del orden del 39%, 30% y 29%, respectivamente. El pago de Patagones experimentó una caída del 25% y el pago de Nueve de Julio, un 13%. El número de bancarrotas se incrementaba cada día. El Cuadro 9 menciona los nombres de aquellos nuevos propietarios de tierra que compraron bienes raíces rurales a los vendedores en bancarota. Eran tales las condiciones económicas que el presidente Avellaneda se sintió obligado a poner orden a una economía que producía el "hambre y sed del pueblo argentino". Este hecho podría fácilmente explicar el apoyo popular de la revuelta mitrista en 1874. Para compensar los efectos de la crisis económica mundial, Avellaneda formuló su famosa ley de tierras e inmigración sancionada por el Congreso Nacional en octubre de 1876.

Ley provincial de 1878 y campaña militar de Alsina.

Finalmente, las políticas de reforma rural que iniciaron los arrendamientos de Mitre en 1857, alcanzaron su culminación con la ley provincial de diciembre de 1878 y la campaña militar de Alsina. Esta última ley intentó favorecer, por razones políticas, a los verdaderos pobladores, terminando con los especuladores que no compraban, ni arrendaban, ni pagaban nada por ella, impidiendo la acumulación de grandes superficies en pocas manos. Para tal propósito, se fijó un plazo impostergable a los pobladores para solicitar compras de tierra, a condición de que hubieran mantenido sus posesiones con 300 cabezas de ganado, desde un año antes de la promulgación de la ley. Además, la ley prohibía a cada propietario de tierra comprar más de 8.000 hectáreas.²¹

Pero las devaluaciones monetarias distorsionaron el fin progresista de la ley y de ello resultó una fuerte especulación en tierras. En efecto, por un lado la moneda nacional experimentó en 1878, con respecto a 1867 y 1871, una devaluación del 28%, tornándose la inversión en tierras en un seguro contra la devaluación. Por otra parte, el precio fijado en 1878 para la tierra pública en el interior de la línea de frontera de 1858, fue el mismo que el fijado en la ley de enero de 1867. Los bajos precios fijados por esta ley generaron una gran demanda de tierras.²² Como resultado de aquellos bajos precios, el precio promedio por legua cuadrada disminuyó en 1879 cerca del 46% con respecto a 1878. La cantidad total de tierras públicas incorporada en el mercado de tierras rurales por virtud de la ley provincial alcanzó entre 1879 y 1886, la cantidad de 1.895 leguas cuadradas españolas o 2.047 leguas cuadradas republicanas, distribuidas entre 682 nuevos propietarios de tierra, o a un promedio de tres décimas de legua cuadrada por cada uno.

La campaña militar de Roca.

Una vez que las políticas de reforma rural y las estrategias militares para conquistar las tierras indígenas, implementadas por el gobierno provincial, fracasaron en satisfacer la creciente demanda de

los intereses capitalistas internacionales, el Gobierno Nacional comenzó una política de contrarreforma rural. Consistió, esencialmente, en la campaña militar de Roca respaldada por la ley nacional del 5 de octubre de 1878. El aspecto contrarreformista de la misma consistía primeramente, en que los legisladores abandonaban las restricciones previas sobre los límites de tamaño y los requisitos de poblamiento. Esta ley nacional buscaba poner en práctica la nueva línea de frontera establecida por la ley 215 del 23 de agosto de 1867. También estableció los límites para cuatro provincias y para el territorio federal, así como anticipó el método de obtención de los recursos financieros necesarios para conquistar las tierras indígenas. Para ese propósito, aquellas provincias fronterizas con tierras indígenas, cedieron de común acuerdo al estado nacional el dominio de las tierras a ser conquistadas.²³ El gobierno nacional, con el objetivo de financiar la campaña militar, fijó el precio de venta de cada legua cuadrada al increíble bajo precio de \$400 pesos plata, pagables exclusivamente en bonos. Para el propósito de conquistar aquellas tierras, el gobierno nacional emitió \$1.600.000 pesos en bonos de \$400 cada uno, pagables en cuotas de \$100 cada tres meses, con un interés del 6% y redimibles con la adjudicación en propiedad de lotes de tierra de 5.000 hectáreas o de dos leguas cuadradas cada uno, dentro de un término de cinco años.²⁴ Cuando las tierras fueron medidas y divididas al mismo tiempo en que la línea de frontera avanzaba, el suscriptor podía pedir el reembolso de sus bonos indicando los lotes que quería.²⁵ En diciembre de 1880, las ventas de tierras públicas fueron suspendidas porque todos los gastos que la conquista del desierto requirió, estaban completamente cubiertos. En 1881, las tierras cedidas, que la nación no había empleado, fueron devueltas a la provincia.²⁶

El mercado de tierras rurales.

La cantidad total de tierras incorporadas al mercado de tierras rurales por virtud de la Ley Nacional alcanzó, entre 1881 y 1886, de acuerdo a los registros de la Escribanía General de la Nación, 2.728 leguas cuadradas. Esta cantidad de tierras nuevas fueron distribuidas entre 610 propietarios de tierra, o a un promedio de 4 1/2 décimas de legua cuadrada por cada propietario de tierra. Más precisamente, las nuevas tierras conquistadas consistieron en los nuevos pagos de Villarino, Patagones, Adolfo Alsina, Saavedra, Trenque Lauquén, Guaminí, Rivadavia y Puán, así como los territorios nacionales de La Pampa, Río Negro y Neuquén. El proceso de registrar los nuevos títulos no fue completado del todo en el mismo año. El Cuadro 8 muestra que en 1881 un total de 272 lotes fueron vendidos a 126 propietarios de tierra, en 1882 un total de 392 lotes fueron vendidos a 163 propietarios de tierra y en 1883 un total de 450 lotes fueron vendidos a 249 propietarios de tierra. Además, el Cuadro 10 nos muestra una lista de los más grandes compradores con la correspondiente cantidad de lotes comprados. Los casos de Saturnino Unzué (h), Diego de Alvear, Eduardo Casey, Antonino Cambaceres, Tomás, José y Juan Drysdale, Marcelino Ugarte, etc., son lo suficientemente ilustrativos para mostrar la manera descubierta en que los capitalistas dieron origen a sus vastos latifundios. Finalmente, el tamaño promedio de la tierra vendida por el gobierno nacional fue 50% más grande que la vendida por el gobierno provincial.

La especulación y el ausentismo.

Las políticas de contrarreforma rural dieron lugar a la especulación y el ausentismo. El resultado inmediato fue un proceso gradual y creciente de elevación en espiral de los precios de la tierra. Este proceso fue debido en parte, a un incremento del endeudamiento externo e interno. Entre 1881 y 1882, alrededor de 41 millones de pesos oro fueron contraídos por el gobierno nacional para pagar los servicios y cancelaciones de la deuda federal con el banco de la provincia de Buenos Aires (procedente de la crisis de 1874-1876). En 1883, el Congreso nacional votó un préstamo para Obras Públicas por 30 millones de pesos oro a un 5% de interés y en 1884 hubo otro de 12 millones de pesos

oro para la canalización del Riachuelo. La deuda consolidada, externa e interna, era de 57 millones de pesos en 1880 y alcanzaría 122 millones, cuatro años después.²⁷ Del total de 476 millones de pesos oro tomados prestados en el exterior entre 1884 y 1890 y la deuda de 708 millones de pesos oro acumulados hasta ese momento, los préstamos públicos comprendían 35%, los ferrocarriles: 32%, y los bonos hipotecarios sobre tierras, llamados cédulas: 24%, cada uno de los que podría afectar en forma diferente los bienes importados y el crecimiento de largo plazo de la producción y las exportaciones.²⁸ A diferencia de otros países periféricos, sólo Argentina pudo colocar sus bonos hipotecarios (cédulas), cotizados en papel moneda, en la bolsa de valores europea.²⁹ Para tener una idea aproximada del grado de especulación que existía en el mercado de tierras rurales, los préstamos dados en la forma de cédulas representaron, 39%, 49% y 42% del valor total de la tierra de Buenos Aires en 1887, 1888 y 1889, respectivamente (Véase Cuadro 11). Como resultado de esta inyección de préstamos externos, los valores de la tierra, expresados en pesos oro, ascendieron casi ocho veces entre 1879 y 1889. El precio promedio por legua cuadrada incrementó su valor un 78% en 1884 con respecto a 1883, un 51% en 1887 con respecto a 1886, y un 38% en 1889 con respecto a 1888. Con respecto a 1881, el precio promedio por legua cuadrada incrementó su valor casi seis veces, pero con respecto a 1879 lo incrementó casi ocho veces (Véase Cuadro 2).

La especulación en tierras fue debida a un incremento en la presión de la población sobre la tierra. Considerando la intensidad de esta presión, causada esencialmente por la inmigración exterior y la magnitud del proceso redistributivo, encontré que mientras la proporción de los nuevos propietarios sobre la inmigración neta era decreciente, la densidad de población era creciente. En efecto, la proporción de propietarios de tierra sobre población en la región sur alcanzó el 1% en 1839, el 0,4% en 1855 y el 0,27% en 1869. Comenzando en 1870, si agrego la inmigración neta a la población real, la proporción de propietarios de tierras sobre la población total se vuelve aún más baja. En efecto, en 1872-1873, la proporción entre 915 propietarios de tierras (véase Cuadro 8), y 386.000 habitantes, de los que 300.000 eran pobladores y 86.000 inmigrantes netos, alcanzó al 0,24%.³⁰

La densidad demográfica rural.

A fines de la década de 1860, la organización social de un establecimiento ganadero, el sistema dominial de la tierra de grandes extensiones, así como el tipo de producción empleado, no ayudaban al crecimiento demográfico. En las regiones de frontera, donde prevalecía el latifundio, la densidad de población fue en la década de 1860 más baja que en las zonas de antigua colonización donde el ovino prevalecía. El movimiento demográfico hacia las áreas nuevas era escaso ya que eran ocupadas por ganado vacuno, que requería menos mano de obra. De acuerdo al Cuadro 12, en 1867, en la región sur, la densidad de población (índice= 30) era menor que en las otras dos regiones, debido al predominio del latifundio (extensión promedio de propiedades rurales= 6.044 hectáreas). Sin embargo, la densidad de población de la región central era mayor (índice= 99), a pesar del hecho de que en esta región había más subdivisión de tierra que en el norte (extensión promedio de propiedades rurales en la región norte= 1.000 hectáreas, y en la región central= 1.800 hectáreas). Esto fue debido al hecho que la producción ovina era más intensa en los pagos del centro donde una cantidad mayor de mano de obra era necesaria.

A mediados de la década de 1880 un cambio del vacuno al ovino en los pagos del oeste y del sur, incrementó sus densidades de población y de igual manera en los pagos del centro, un cambio de la oveja a la vaca disminuyó sus densidades de población.³¹ Por ejemplo, la densidad de población rural de Buenos Aires, de acuerdo al Cuadro 12, se incrementó un 8% en 1885 con respecto a 1869, de 49 habitantes por legua cuadrada a 53 habitantes por legua cuadrada. Los pagos del sur retuvieron la carga

más pesada, aumentando un 30%, mientras que los pagos nortños se incrementaron sólo un 7%. Los pagos centrales, en cambio, a causa del desplazamiento de la oveja al oeste y al sur, disminuyeron un 19%. Contrariamente, la proporción de nuevos propietarios de tierra sobre inmigración neta en el primer quinquenio de la década de 1880 disminuyó. En efecto, esta proporción descendió casi un 50%, de 0,7% a principios de la década de 1870 a 0,33% en la década de 1880, o bien, la proporción entre 910 propietarios de tierra (véase Cuadro 8) y 279.000 inmigrantes netos.³²

El incremento de la inmigración extranjera.

Además, el incremento de la producción de granos requería grandes contingentes de inmigrantes extranjeros. Como resultado de ese movimiento migratorio, la densidad de población rural de Buenos Aires, como muestra el Cuadro 12, se incrementó un 43%, de 53 habitantes por legua cuadrada en 1885, a 76 habitantes por legua cuadrada en 1892. Los pagos maiceros nortños mostraron el mayor crecimiento, con un 53% de incremento, seguido por los pagos trigueros sureños con un 44% y, finalmente, los pagos centrales con un 31%.

En conclusión, como los inmigrantes estaban impedidos de adquirir tierras en lugares donde los granos pudieron haber sido fácilmente transportados, a causa de los muy elevados precios de la tierra, dentro de una distancia donde podían alcanzar las terminales ferroviarias, tuvieron que depender de contratos de arrendamientos privados muy caros.³³ Los inmigrantes podían participar en el mercado de arrendamiento pero prácticamente no tenían posibilidad de ninguna clase de intervenir en el mercado de ventas. El hecho hizo que los contratos de arrendamiento de parcelas en dominio privado se volvieran sujeto de especulación para los inmigrantes que deseaban acumular la mayor superficie posible en tierras arrendadas. Una vez que monopolizaron gran cantidad de tierras arrendadas las subarrendaron a otros inmigrantes. De acuerdo al Censo de 1895 de la provincia de Buenos Aires, sobre 8.179 chacras, 40% eran trabajadas por sus propietarios y 52% por poseedores. Este proceso intensificado de tenencia de la tierra implicaba un incremento sustancial del precio del mercado de los contratos de arrendamiento.³⁴

Los valores de la tierra en términos relativos se fueron a las nubes o se estancaron dependiendo de si las líneas férreas penetraban en ellas o no. El recorrido ferroviario se había triplicado desde fines de la década de 1860. En efecto, de las 380 millas de vías en 1869 se incrementaron a 1.570 millas de vías en la década de 1880.³⁵ Entre los pagos sureños, por ejemplo, de acuerdo a mi banco de datos, el pago de Cañuelas experimentó en la década de 1880, un 35% de incremento en los valores de la tierra, mientras que en 1885, a causa de la inauguración ferroviaria, los valores de la tierra subieron 16 puntos, es decir al 51%. En forma similar, en Ayacucho, los valores de la tierra en el quinto cuartel subieron 19% en la década de 1880 mientras que, después de la inauguración del ferrocarril en 1880, subieron 37 puntos, al 56%. Las tierras de Tandil, por ejemplo, subieron 93% en la década de 1880. Luego de la llegada del ferrocarril en 1883, la tierra subió allí 145% en el segundo cuartel y cuatro veces en el octavo cuartel. Las tierras de General Alvear subieron un porcentaje de 36% en los '80 mientras que con la inauguración del ferrocarril en 1882, los valores de la tierra subieron un promedio de 2 1/2 veces. Las tierras de Nueve de Julio subieron un promedio de 53% en los '80 y luego que el ferrocarril fuera inaugurado en 1882, los valores de la tierra subieron 34 puntos, es decir el 87%. Finalmente, en Tres Arroyos, mientras subieron un promedio de 37% en los '80, luego que el ferrocarril fuera inaugurado en 1886, los valores de la tierra se doblaron.

Finalmente, la crisis de 1890 fue el resultado parcial de una política de contrarreforma rural iniciada diez años antes. El auge de tierras que duró casi una década (1879-1889), más la repentina

interrupción de los préstamos externos, fueron los principales elementos que trajeron la crisis de 1890. Esta última crisis golpeó duramente al mercado de tierras rurales de Buenos Aires. El Cuadro 2 muestra que en 1890 el número de transacciones disminuyó 49%, la cantidad de leguas cuadradas vendidas disminuyó 58% y el volumen de dinero invertido disminuyó 60%. La crisis golpeó más duramente en el mercado de tierras urbanas que en el mercado de tierras rurales. Por ejemplo, el mercado de tierras rurales cayó 67% mientras el mercado de tierras rurales cayó siete puntos. El precio promedio general por legua cuadrada cayó 42%, de \$31.727 pesos plata en 1890 a \$18.545 pesos plata en 1891. Teniendo en cuenta los valores de la tierra, de acuerdo a las cotizaciones de los bonos hipotecarios de tierra provinciales en la bolsa de valores de Buenos Aires, como Luis Sommi ha mostrado, estos también disminuyeron 42%.³⁶

Las tierras nuevas fueron golpeadas más seriamente por la crisis que las viejas. Los valores de la tierra de casi todas las nuevas tierras cayeron más abajo del promedio. Esto sucedió porque las incumplidas expectativas especulativas de las subas del precio de la tierra ocurrieron esencialmente en tierras nuevas. Ese fue el caso, de acuerdo a mi banco de datos, de los pagos de Trenque Lauquén, Puán, Patagones, Villarino, General Villegas, Carlos Tejedor, Saavedra, General Pinto, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Leandro Alem y General Alvear. Estos pagos donde los valores de tierra cayeron por debajo del promedio eran, de acuerdo a mi banco de datos, las tierras viejas, como aquellas de Rojas, Arrecifes, General Lamadrid y Caseros. Además, el Cuadro 13 menciona los nombres de los prósperos empresarios que compraron muy barato fincas rurales a los vendedores endeudados.

Conclusión

La especulación en tierras fue responsable por el fracaso de la intentada transición de las vías pre-capitalista y junker a la vía campesina del desarrollo del capitalismo de las diferentes políticas de reforma rural implementadas en la Argentina del siglo XIX. En efecto, la especulación en tierras alentó elevados valores de tierra y una creciente tasa de concentración de tierras. El comportamiento de los precios de los bienes primarios en el mercado mundial explica también mucho de la suba de los valores de tierra en cada una de las políticas de reforma rural implementadas. La suba internacional en los precios de la lana fue responsable de una gran parte del auge del precio de la tierra bajo el sistema de arrendamiento (1857-1874). Comparando en el Cuadro el precio promedio por legua cuadrada del mercado privado de tierras rurales con el público, mientras que bajo el modelo de reforma de enfiteusis los valores de la tierra se incrementaron 6,6 veces, bajo el modelo de reforma de Mitre se incrementaron menos de la mitad, tres veces. La movilidad internacional del capital (préstamos externos), el trabajo (presión de la población) y la tecnología (inversiones ferroviarias) fueron también responsables por valores aún mayores de la tierra.

En cuanto a los efectos que la dependencia en una orientación exportadora tuvieron en los índices de concentración de la tierra de los modelos de reforma rural, durante el modelo de reforma enfiteutico (1820-1840), la proporción de la monopolización de tierra se incrementó levemente, y en tanto que la diversificación de la estructura económica generada por la producción lanera a fines de la década de 1860 y 1870 obtuvo un balance favorable en contraste con el período previo del tasajo (es decir, el precio de la monopolización de la tierra fue menor), el cambio subsecuente en la estructura de la producción en favor de las exportaciones de carne congelada incrementó la proporción del latifundio. Mientras bajo el modelo de reforma de la enfiteusis el tamaño promedio en enfiteusis (6,5 leguas cuadradas) fue casi cinco veces más grande que el tamaño promedio en propiedad privada (1,4 leguas cuadradas), bajo el modelo de reforma de Mitre el tamaño promedio en arrendamiento (3,13 leguas cuadradas) disminuyó a sólo 2 1/2 veces más grande que el tamaño promedio en propiedad privada

(1,27 leguas cuadradas). Por el contrario, en el período de contrarreforma (1878-1890), el tamaño promedio en propiedad privada subió 73%, de 1,27 leguas cuadradas, bajo el modelo de reforma rural de Mitre (1857-1875) a 2,2 leguas cuadradas bajo el período de contrarreforma de Roca (1878-1890). En forma similar, encontré que bajo la política de reforma de Mitre, el tamaño de superficie promedio de una finca disminuyó. La superficie promedio en el sistema de enfiteusis era más grande que en el equivalente en el sistema de arrendamiento. Mientras que la unidad de enfiteusis promedio alcanzó 7 1/4 leguas cuadradas, la unidad de arrendamiento promedio alcanzó 4 1/3 leguas cuadradas.

Considerando la influencia que la escasez y las interrupciones del comercio externo de Buenos Aires tuvieron en socavar las políticas de reforma rural, concluyo que los mayores retrasos ocurrieron en 1851, 1866, 1875-1876 y 1890-1891. La crisis de 1857, aunque no tan crítica en Latinoamérica como lo fue en Europa, tuvo una leve repercusión en Buenos Aires. Las crisis de 1866 y 1890, aunque demoraron la especulación de tierras así como fortalecieron el latifundio, no fueron tan profundas como la experimentada en 1874. Mientras que el mercado de tierras rurales de Buenos Aires experimentó en 1874 una disminución del 44% y en 1890 una disminución del 60%, cayó 70% en 1874. Estos resultados significaban que la vinculación entre el mercado de tierras de Buenos Aires con el mercado mundial fue más cercana en la segunda mitad del siglo que en la primera.

Además, la resistencia indígena y los desastres naturales acentuaron el fracaso de las políticas de reforma rural. En ese sentido es notable advertir la elevada correlación existente entre los ataques indígenas y las extensas sequías. Esto pudo ser observado en 1856-1859, y en 1874. La única instancia en que la correlación estadística no fue mantenida fue en 1851 debido a la política de "pacificación" de Juan Manuel de Rosas con respecto a las tribus indígenas. En efecto, los elevados subsidios o tributos con los que Rosas sobornó a los indios, extirparon en ese momento cualquier riesgo de ataque indígena. En el primer ataque indígena en la década de 1830, casi un millón y medio de vacunos perecieron o fueron robados por los indios. En 1850, casi cuatro millones de ovejas murieron o fueron robadas en otro ataque indígena, y en el último ataque en 1857, fue originada una tasa de mortalidad de 28%. En forma similar, mientras en el primer ataque el volumen de dinero invertido en el mercado de tierras experimentó una fuerte caída de alrededor del 70% y el precio promedio por legua cuadrada cayó 50%, en el segundo ataque el volumen de dinero invertido en el mercado de tierras cayó 56%, y en el último ataque no sólo la ley en arrendamientos públicos no tuvo éxito en arrendar la tierra pública, sino también el mercado de tierras privado cayó alrededor del 50%.

Aplicando la metodología inaugurada por Borde y Góngora, por Taylor y por Brading, reconstruimos la historia dominial de predios rurales, correspondientes a catorce pagos o partidos del Buenos Aires de comienzos del siglo XIX, cuyas transacciones de dominio habían transcurrido en un total de compraventas, protocolizadas entre 1852 y 1900.³⁷ Sobre la base de esta reconstrucción, el Cuadro B-I demuestra que el pago con más transacciones venales promedio, es decir el pago cuyos predios cambiaron de manos más veces, fue el de la Costa de Monte Grande o San Isidro, un partido totalmente compuesto por chacras, con una media de (número de transacciones en Monte Grande/total de transacciones); y el pago de menor promedio de transacciones fue el de Areco, un partido totalmente reservado para estancias, con una media de . En la banda sur del pago de las Conchas, un distrito reservado legalmente para chacra, la media de transacciones alcanzó un promedio de ; en la banda norte de la Matanza a ; en las cabezadas de la Magdalena, a ; en la banda sur del pago de Luján, a ; y en el pago de San Andrés de Giles, a .

No obstante lo infrecuente de las propiedades o predios que padecieron una persistencia en el dominio que sobrepasara la de una sola generación, hemos podido reconstruir en el Cuadro B-II el número de

generaciones por predio por pago. La persistencia en el dominio estaba dada por la cantidad de parcelas que entre 1810 y 1852 se mantuvieron en manos de las mismas familias, en la mayoría de los casos considerablemente fragmentadas. En nuestro trabajo, los nueve (9) Cuadros, correspondientes a distintas jurisdicciones o pagos, demuestran como numerosas parcelas, se mantuvieron en las manos de una misma familia durante dos o más generaciones. También se registran en dichos Cuadros aquellos casos en que algunas ramas familiares remontaron el origen de sus propiedades al período colonial.

Finalmente, el fracaso de las políticas de reforma rural de Buenos Aires del siglo XIX en desbaratar el latifundio, y desalentar la especulación o, en otras palabras, en transformar el desarrollo rural de estrategias pre-capitalistas a una estrategia campesina, debe ser atribuido primeramente, a la naturaleza de la economía de Buenos Aires orientada a las materias primas. Las características extensivas de la producción de materias primas, más la escasez de capital y trabajo, guió a los propietarios de vacas a sobre enfatizar la provisión de tierra en un grado mayor que los propietarios de ovejas. Con respecto a la cantidad y la calidad de los gastos requeridos, la producción de tasajo estaba caracterizada, en contraste con la lana, por una menor demanda de mano de obra y medios de transporte. Esto fue verdad en parte, porque el ganado era conducido a pie a las plantas procesadoras de carne antes de ser sacrificado, mientras que la lana tenía que ser esquilada en el campo primero, y luego enviada en carretas al puerto. Además, la cría de vacunos requería cantidades más baratas y más grandes de tierra que las ovejas. Esto explica porque los arrendamientos predominaban entre los pagos ganaderos en tanto la propiedad privada prevalecía entre los pagos ovejeros. Los dos principales productos rurales de la época estaban estrechamente conectados con las dos principales políticas dominiales de tierra implementadas, los arrendamientos públicos y la propiedad privada. Mientras que los intereses del tasajo usaba tanto el sistema de enfiteusis como el de arrendamientos, los intereses laneros preferían localizarse donde el sistema de propiedad privada prevalecía. Además, el poder político de los intereses del tasajo fluctuaban dependiendo de la cantidad de tierra que podían adquirir. La disponibilidad de tierra dependía de si la enfiteusis o el sistema de arrendamientos era utilizado. La cantidad total de tierra disponible bajo el sistema de enfiteusis era más del doble de la cantidad de tierra disponible bajo el sistema de arrendamiento. Mientras que el sistema de enfiteusis ocupaba 2/3 de la tierra hasta ese momento distribuida, el sistema de arrendamiento ocupaba 1/4 de ella.

NOTAS

¹ Coni, 1927, 128.

² García, 1968, 36.

³ García, 1973, 49.

⁴ García, 1973, 51.

⁵ Dorner, 1971, 49.

⁶ La inmigración neta consiste de aquellos que permanecieron en el país, o la diferencia entre inmigrantes y emigrantes.

⁷ Gobernador de la provincia de Entre Ríos y jefe de gobierno de la Confederación Argentina.

⁸ Ghioldi, 1946.

⁹ Sebreli, 1972, 208.

¹⁰ Aquellos que sacaron ventaja de las confiscaciones de tierras fueron las cincuenta familias que apoyaban al terrorismo de estado de Rosas.

¹¹ Otro método para determinar tal área consiste en substraer del área total transferida, la cantidad correspondiente a las rotaciones de derechos de arrendamientos procedentes de rotaciones previas. Entre 1858 y 1875, hubo 312 rotaciones públicamente registradas ascendiendo a 756 leguas cuadradas o el 46% del área total arrendada del estado y el 20% de la superficie total hasta entonces otorgada en propiedad privada. Como de aquellas 312 rotaciones, 83 eran de parcelas previamente transferidas por anteriores arrendadores, quedan que sólo 229 parcelas abarcando 552 leguas cuadradas fueron transferidas en sólo una oportunidad. Es por ello que tenemos en realidad, el resultado que la tierra pública neta otorgada en arrendamientos, sería la diferencia entre el total de arrendamientos otorgados (524 arrendamientos, abarcando 1.641 leguas cuadradas) y los arrendamientos transferidos sólo una vez (229 arrendamientos, abarcando 552 leguas cuadradas), es decir, un total de 295 arrendadores que obtenían posesión de 1.089 leguas cuadradas. Como podemos ver, las cifras obtenidas por ambos métodos son bastante similares.

¹² Cárcano, 1972, 248. Para una historia social y política de los terratenientes de la pampa húmeda, 1860-1945, ver Hora, 2002.

¹³ Cuccorese, 1959, 358.

¹⁴ Ortiz, 1965, 94.

¹⁵ Randall, 1977, 81.

¹⁶ Chiaramonte, 1969, 178.

¹⁷ Randall, 1977, 85.

¹⁸ Chiaramonte, 1969, 184.

¹⁹ Olivera, 1868, 365.

²⁰ Alvarez, 1936, 113.

²¹ Cárcano, 1972, 250.

²² *Ibíd.*, 250.

²³ Registro Oficial, 1878, 245.

²⁴ Cárcano, 1972, 168.

²⁵ *Ibíd.*, 168.

²⁶ *Ibíd.*, 169.

²⁷ Rosa, 1969, 203.

²⁸ Williams, 1920, 45; y Ford, 1962, 140.

²⁹ Halperín, 1969, 217.

³⁰ Scobie, 1964, 169.

³¹ Chiaramonte, 1969, 178.

³² Scobie, 1964, 169.

³³ Allub, 1972, 302.

³⁴ *Ibíd.*, 302.

³⁵ Scobie, 1964, 171.

³⁶ Sommi, 1957, 64 y 66.

³⁷ Lamentablemente, esta obra permanece inédita por lo costoso de su publicación.

Conclusion del Tomo-XIII

Podemos afirmar, sobre la base de las fuentes judiciales y las numerosas tablas y cuadros aquí producidos, que si bien la perpetuidad y consolidación dominial subsistentes en el interior del espacio colonial y en algunos predios rurales del litoral Rioplatense, había fortalecido el poder económico y social de algunas familias terratenientes rurales; la rotación y la fragmentación hereditaria de la propiedad rural Bonaerense, que alcanzó uno de los niveles más altos de la América Latina colonial, había vulnerado la hegemonía y la estabilidad de los sectores terratenientes más tradicionales.

En suma, el fracaso de la política de reforma rural de Buenos Aires a principios del siglo XIX en tratar de descomponer el latifundio, y desalentar la especulación o, en otras palabras, transformar el desarrollo rural desde una estrategia precapitalista y comercial hacia una estrategia campesina, debe ser atribuida fundamentalmente a los bloqueos internacionales, las guerras civiles y las sequías. Asimismo, las características extensivas de la producción de bienes primarios, más la escasez de capital y trabajo, condujo a los propietarios de vacunos a sobre enfatizar la provisión de tierra en un grado más elevado que los poseedores de ovejas. Con respecto a la cantidad y calidad de los consumos requeridos, la producción de tasajo estaba caracterizada, en contraste con la lana, por una menor demanda de mano de obra y medios de transporte. Esto era verdad, en parte porque el vacuno era conducido vivo a los "saladeros" antes de ser sacrificado, mientras que la lana tenía que ser esquilada primero en el campo y entonces llevada por carro al puerto. Además, la cría de vacunos requería cantidades de tierra más baratas y más grandes que las tierras de ovejas. Esta circunstancia explica porque los arrendamientos públicos predominaban en los pagos ganaderos mientras que la propiedad privada prevalecía entre los pagos ovejeros. Los dos principales productos rurales de la época estaban estrechamente conectados con las dos principales políticas dominiales de tierra implementadas, los arrendamientos públicos y la propiedad privada. Mientras que los intereses del tasajo usaban el sistema de enfiteusis, los intereses de la lana preferían localizarse donde el sistema de propiedad privada prevalecía.

La especulación en tierras fue responsable por el fracaso de la intentada transición de las vías pre-capitalista y junker a la vía campesina del desarrollo del capitalismo de las diferentes políticas de reforma rural implementadas en la Argentina del siglo XIX. En efecto, la especulación en tierras alentó elevados valores de tierra y una creciente tasa de concentración de tierras. El comportamiento de los precios de los bienes primarios en el mercado mundial explica también mucho de la suba de los valores de tierra en cada una de las políticas de reforma rural implementadas. La suba internacional en los precios de la lana fue responsable de una gran parte del auge del precio de la tierra bajo el sistema de arrendamiento (1857-1874). Comparando en el Cuadro el precio promedio por legua cuadrada del mercado privado de tierras rurales con el público, mientras que bajo el modelo de reforma de enfiteusis los valores de la tierra se incrementaron 6,6 veces, bajo el modelo de reforma de Mitre se incrementaron menos de la mitad, tres veces. La movilidad internacional del capital (préstamos externos), el trabajo (presión de la población) y la tecnología (inversiones ferroviarias) fueron también responsables por valores aún mayores de la tierra.

En cuanto a los efectos que la dependencia en una orientación exportadora tuvieron en

los índices de concentración de la tierra de los modelos de reforma rural, durante el modelo de reforma enfiteutico (1820-1840), la proporción de la monopolización de tierra se incrementó levemente, y en tanto que la diversificación de la estructura económica generada por la producción lanera a fines de la década de 1860 y 1870 obtuvo un balance favorable en contraste con el período previo del tasajo (es decir, el precio de la monopolización de la tierra fue menor), el cambio subsecuente en la estructura de la producción en favor de las exportaciones de carne congelada incrementó la proporción del latifundio. Mientras bajo el modelo de reforma de la enfiteusis el tamaño promedio en enfiteusis (6,5 leguas cuadradas) fue casi cinco veces más grande que el tamaño promedio en propiedad privada (1,4 leguas cuadradas), bajo el modelo de reforma de Mitre el tamaño promedio en arrendamiento (3,13 leguas cuadradas) disminuyó a sólo 2 1/2 veces más grande que el tamaño promedio en propiedad privada (1,27 leguas cuadradas). Por el contrario, en el período de contrarreforma (1878-1890), el tamaño promedio en propiedad privada subió 73%, de 1,27 leguas cuadradas, bajo el modelo de reforma rural de Mitre (1857-1875) a 2,2 leguas cuadradas bajo el período de contrarreforma de Roca (1878-1890). En forma similar, encontré que bajo la política de reforma de Mitre, el tamaño de superficie promedio de una finca disminuyó. La superficie promedio en el sistema de enfiteusis era más grande que en el equivalente en el sistema de arrendamiento. Mientras que la unidad de enfiteusis promedio alcanzó 7 1/4 leguas cuadradas, la unidad de arrendamiento promedio alcanzó 4 1/3 leguas cuadradas.

Considerando la influencia que la escasez y las interrupciones del comercio externo de Buenos Aires tuvieron en socavar las políticas de reforma rural, concluyo que los mayores retrasos ocurrieron en 1851, 1866, 1875-1876 y 1890-1891. La crisis de 1857, aunque no tan crítica en Latinoamérica como lo fue en Europa, tuvo una leve repercusión en Buenos Aires. Las crisis de 1866 y 1890, aunque demoraron la especulación de tierras así como fortalecieron el latifundio, no fueron tan profundas como la experimentada en 1874. Mientras que el mercado de tierras rurales de Buenos Aires experimentó en 1874 una disminución del 44% y en 1890 una disminución del 60%, cayó 70% en 1874. Estos resultados significaban que la vinculación entre el mercado de tierras de Buenos Aires con el mercado mundial fue más cercana en la segunda mitad del siglo que en la primera.

Además, la resistencia indígena y los desastres naturales acentuaron el fracaso de las políticas de reforma rural. En ese sentido es notable advertir la elevada correlación existente entre los ataques indígenas y las extensas sequías. Esto pudo ser observado en 1856-1859, y en 1874. La única instancia en que la correlación estadística no fue mantenida fue en 1851 debido a la política de "pacificación" de Juan Manuel de Rosas con respecto a las tribus indígenas. En efecto, los elevados subsidios o tributos con los que Rosas sobornó a los indios, extirparon en ese momento cualquier riesgo de ataque indígena. En el primer ataque indígena en la década de 1830, casi un millón y medio de vacunos perecieron o fueron robados por los indios. En 1850, casi cuatro millones de ovejas murieron o fueron robadas en otro ataque indígena, y en el último ataque en 1857, fue originada una tasa de mortalidad de 28%. En forma similar, mientras en el primer ataque el volumen de dinero invertido en el mercado de tierras experimentó una fuerte caída de alrededor del 70% y el precio promedio por legua cuadrada cayó 50%, en el segundo ataque el volumen de dinero invertido en el mercado de tierras cayó 56%, y en el último ataque no sólo la ley en arrendamientos públicos no tuvo éxito en arrendar la tierra pública, sino también el mercado de tierras privado cayó alrededor del 50%.

Aplicando la metodología inaugurada por Borde y Góngora, por Taylor y por Brading, reconstruimos la historia dominial de predios rurales, correspondientes a catorce pagos o partidos

del Buenos Aires de comienzos del siglo XIX, cuyas transacciones de dominio habían transcurrido en un total de compraventas, protocolizadas entre 1852 y 1900.¹ Sobre la base de esta reconstrucción, el Cuadro B-I demuestra que el pago con más transacciones venales promedio, es decir el pago cuyos predios cambiaron de manos más veces, fue el de la Costa de Monte Grande o San Isidro, un partido totalmente compuesto por chacras, con una media de (número de transacciones en Monte Grande/total de transacciones); y el pago de menor promedio de transacciones fue el de Areco, un partido totalmente reservado para estancias, con una media de . En la banda sur del pago de las Conchas, un distrito reservado legalmente para chacra, la media de transacciones alcanzó un promedio de ; en la banda norte de la Matanza a ; en las cabezadas de la Magdalena, a ; en la banda sur del pago de Luján, a ; y en el pago de San Andrés de Giles, a .

No obstante lo infrecuente de las propiedades o predios que padecieron una persistencia en el dominio que sobrepasara la de una sola generación, hemos podido reconstruir en el Cuadro B-II el número de generaciones por predio por pago. La persistencia en el dominio estaba dada por la cantidad de parcelas que entre 1810 y 1852 se mantuvieron en manos de las mismas familias, en la mayoría de los casos considerablemente fragmentadas. En nuestro trabajo, los nueve (9) Cuadros, correspondientes a distintas jurisdicciones o pagos, demuestran como numerosas parcelas, se mantuvieron en las manos de una misma familia durante dos o más generaciones. También se registran en dichos Cuadros aquellos casos en que algunas ramas familiares remontaron el origen de sus propiedades al período colonial.

Finalmente, el fracaso de las políticas de reforma rural de Buenos Aires del siglo XIX en desbaratar el latifundio, y desalentar la especulación o, en otras palabras, en transformar el desarrollo rural de estrategias pre-capitalistas a una estrategia campesina, debe ser atribuido primeramente, a la naturaleza de la economía de Buenos Aires orientada a las materias primas. Las características extensivas de la producción de materias primas, más la escasez de capital y trabajo, guió a los propietarios de vacas a sobre enfatizar la provisión de tierra en un grado mayor que los propietarios de ovejas. Con respecto a la cantidad y la calidad de los gastos requeridos, la producción de tasajo estaba caracterizada, en contraste con la lana, por una menor demanda de mano de obra y medios de transporte. Esto fue verdad en parte, porque el ganado era conducido a pie a las plantas procesadoras de carne antes de ser sacrificado, mientras que la lana tenía que ser esquilada en el campo primero, y luego enviada en carretas al puerto. Además, la cría de vacunos requería cantidades más baratas y más grandes de tierra que las ovejas. Esto explica porque los arrendamientos predominaban entre los pagos ganaderos en tanto la propiedad privada prevalecía entre los pagos ovejeros. Los dos principales productos rurales de la época estaban estrechamente conectados con las dos principales políticas dominiales de tierra implementadas, los arrendamientos públicos y la propiedad privada. Mientras que los intereses del tasajo usaba tanto el sistema de enfiteusis como el de arrendamientos, los intereses laneros preferían localizarse donde el sistema de propiedad privada prevalecía. Además, el poder político de los intereses del tasajo fluctuaban dependiendo de la cantidad de tierra que podían adquirir. La disponibilidad de tierra dependía de si la enfiteusis o el sistema de arrendamientos era utilizado. La cantidad total de tierra disponible bajo el sistema de enfiteusis era más del doble de la cantidad de tierra disponible bajo el sistema de arrendamiento. Mientras que el sistema de enfiteusis ocupaba 2/3 de la tierra hasta ese momento distribuida, el sistema de arrendamiento ocupaba 1/4 de ella.

Notas

¹ Lamentablemente, esta obra permanece inédita por lo costoso de su publicación.